

LAS BASES SOCIO-TERRITORIALES DEL VOTO EN EL MÉXICO SUB-NACIONAL

Willibald SONNLEITNER
(*VERSIÓN DEL 30/08/2014*)

INTRODUCCIÓN

En la últimas tres décadas, el sistema político mexicano sufrió una transformación radical. De un régimen autoritario –que logró institucionalizar una Revolución mediante la construcción de un régimen corporativo políticamente excluyente, pero socialmente comprometido y progresista–, se pasó a un juego electoral cada vez más abierto y competitivo, libre y plural. No obstante, esta liberalización política se produjo en un contexto económico singularmente adverso, y se acompañó del retiro del Estado benefactor, del abandono de muchas políticas públicas redistributivas y de la reversión de sendas conquistas sociales. La presente investigación busca contribuir a comprender los cambios y las continuidades que generó esta profunda mutación socio-económica en el ámbito de la participación político-electoral.

Cambio y continuidad del sistema político mexicano

A primera vista, las rupturas en el ejercicio y en los efectos del voto parecen contundentes. A diferencia de lo que ocurría con las elecciones del antiguo régimen, en las que los ganadores se conocían meses antes del escrutinio formal, ahora el sufragio no solamente configura contiendas electorales mucho más libres y competitivas, sino que desemboca en la multiplicación de las alternancias en todos los niveles del poder político institucional. Al respecto, la alternancia presidencial de julio del 2000 marcó un hito histórico, convenciendo a una mayoría de mexicanos que su país ya había transitado hacia la democracia.

Sin embargo, las continuidades con el pasado autoritario no desaparecieron de un solo golpe. Desde 2003, la renovación cuestionada del Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) trastocó el ambiente de primavera democrática, en un contexto de desencanto ciudadano con los resultados del primer gobierno de la alternancia. Lejos de propiciar la consolidación democrática, las dos contiendas presidenciales sucesivas pusieron en duda la certeza de los resultados electorales. Tanto en 2006 como en 2012, el segundo candidato más votado a la Presidencia desconoció dichos resultados, provocando dos sonados conflictos post-electorales que minaron las bases de legitimidad de una democratización frágil e incompleta.

Tras haber caído en los encantos del sufragio universal –del que se esperaba no solamente libertad e igualdad, sino transparencia y justicia, desarrollo y prosperidad–, muchos mexicanos redescubrieron las limitaciones concretas del voto particular. A su vez, los sectores más críticos de las élites partidistas, tras haber exigido un recuento “voto por voto, casilla por casilla” en 2006, en 2012 cuestionaron la certeza de todo el proceso electoral, y la calidad misma de millones de votos, bajo el supuesto que éstos habían sido comprados y vendidos mediante mecanismos diversos de coacción e intercambio clientelar. Después de haber sido relegados a un segundo plano residual, el corporativismo y el clientelismo del antiguo régimen regresaron a ocupar las primeras planas de la prensa nacional.

De ahí las interpretaciones encontradas sobre el significado más profundo de los comicios presidenciales de 2012, entre quienes los leyeron como una prueba adicional de consolidación democrática (al demostrar que el antiguo partido hegemónico se había convertido en un partido competitivo capaz de ganar mediante una contienda democrática), y quienes las descifraron como una restauración autoritaria (al denunciar la inequidad del proceso y la persistencia de prácticas diversas de compra-venta de votos). Lo cierto es que la transición política mexicana se encuentra en una situación paradójica: a pesar de contar con elecciones cada vez más libres y competitivas, éstas siguen siendo percibidas como sucias por la mayoría de los ciudadanos, por lo que sufren de un persistente déficit de credibilidad y legitimidad.

Heterogeneidad, volatilidad y contingencia de la calidad de los votos

¿Qué sucede, ahora, con la calidad de los votos? Para captar el componente respectivo de cambio y continuidad del comportamiento electoral de los mexicanos, este estudio destaca la heterogeneidad del sufragio particular, y lo conceptualiza como un acto socio-político contingente, situacional y multidimensional. Como lo destaca la ciencia política desde más de seis décadas, la decisión electoral depende de muchas variables socio-demográficas y psicosociales, que orientan las actitudes y constriñen las preferencias personales. Sin embargo, el voto no solamente es una elección individual, ideológica y racional; es, también, una práctica social, colectiva y territorializada, que está condicionada por otros factores socio-demográficos y por adscripciones identitarias, por lo que se inserta en numerosas redes de interdependencia y proximidad.

Nuestros hallazgos empíricos cuestionan la idea que el voto es una práctica unitaria y “universal”, e indican que el sufragio “particular” puede obedecer a lógicas muy diversas, de pertenencia, lealtad e identificación colectiva, de negociación e intercambio transactivo, de convicción individual y/o de cálculo racional. Pero los significados del sufragio no solamente dependen de las predisposiciones y actitudes personales de los electores sino, también, del contexto territorial, histórico y situacional, del sentido concreto de cada elección, de lo que se encuentra realmente en juego en ella, así como de la naturaleza más profunda y cambiante del régimen político-institucional. Por lo tanto, el estudio empírico de las bases socio-territoriales del sufragio particular enfrenta importantes desafíos teórico-metodológicos.

Desafíos y consecuencias teórico-metodológicos

En primer lugar, la participación político-electoral es un proceso dinámico y contingente, que puede cambiar considerablemente a lo largo del tiempo. Resulta plausible que no es lo mismo votar en una “elección sin opciones”, en la que compite un candidato único cuyo triunfo es ineluctable (como fue el caso en los comicios presidenciales de 1976 en México, en los que solamente se postuló el candidato del partido oficial), que votar en una contienda altamente reñida e incierta, en la que cada sufragio puede incidir de una forma cuasi decisiva en el resultado de la elección popular (como fue el caso de la presidencial en 2006, cuando el margen de victoria fue de 0.56 puntos porcentuales). En otras palabras, el periodo de estudio, el tipo de régimen y las características contextuales de las elecciones son variables clave para interpretar el sentido cambiante del acto de sufragar.

Como lo indican nuestros resultados, en México existen muchas situaciones híbridas e intermedias, lo que se refleja en una fuerte inestabilidad de las bases socio-territoriales del voto. Entre 1970 y 1976 encontramos, así, una fuerte correlación negativa entre las dinámicas territoriales del desarrollo socio-económico y las tasas de participación electoral. Ello contradice una de las premisas básicas del paradigma de la modernización, que establece una asociación positiva entre el ejercicio del voto y mayores niveles de bienestar e integración social (Lipset, 1959). Dicha relación se invierte posteriormente para volverse positiva entre 1994 y 2000, como consecuencia de la movilización masiva de la ciudadanía en los territorios más prósperos y urbanizados del país. Sin embargo, resulta intrigante que dicha correlación se debilite o desaparezca entre 1979-1991 y 2003-2012, lo que rompe con la idea de una evolución lineal de la democratización mexicana. Ello nos obliga a considerar la existencia de períodos diferenciados dentro del proceso más amplio de la transición, que le confieren significados probablemente distintos, quizás incluso opuestos, a los contenidos cualitativos de la participación electoral.

Pero los significados del voto no solamente varían en el tiempo. Se caracterizan, también, por una gran heterogeneidad espacial. El contraste más radical se observa entre el comportamiento electoral prácticamente unánime de algunas comunidades rurales en situaciones autoritarias, y la fragmentación extrema del voto en algunos barrios de ciudades en contextos de marcada pluralidad política. Se trata, no siempre ni necesariamente de comportamientos estrictamente individuales, sino en ocasiones de comportamientos colectivos que guardan una relación estrecha con otras variables territoriales, situacionales y contextuales. No es lo mismo participar/abstenerse cuando se reside en una colonia altamente urbanizada en la que el anonimato es la regla, que abstenerse/participar en una pequeña comunidad en la que todo el mundo se re-conoce y en la que cualquier presencia/ausencia puede ser notada.

De manera más general, las influencias del entorno dependen de las configuraciones regionales y locales de la oferta partidista, de las estructuras de poder, de la presencia de redes de sociabilidad y apoyo mutuo, así como de muchas otras variables que adquieren dimensiones territoriales propias y se articulan en niveles diversos. Por ello, no existe una escala óptima para el análisis electoral, sino que ésta depende siempre del tipo de proceso que desea observarse.

Al respecto, nuestros hallazgos también arrojan pistas muy interesantes. Las estructuras de poder dependen, por ejemplo, del ámbito de acción de los gobernadores y, en menor medida, de los ediles. Ambos administran cantidades considerables de recursos públicos, cuya distribución se pone en juego en cada elección. Por ello, las ofertas partidistas se articulan fundamentalmente en el nivel estadual (32 entidades que conforman la Federación) y, en segundo lugar, en el municipal (2 446 ayuntamientos encabezados por alcaldes/as). Sin embargo, estos dos niveles también presentan importantes desventajas analíticas, debido a la gran heterogeneidad de sus tamaños geográficos y demográficos (que varían entre algunos miles de campesinos en las zonas rurales, hasta varios millones de ciudadanos en las delegaciones del Distrito Federal).

En contraste, tanto el nivel distrital (que corresponde a los 300 “distritos” en los que se eligen los diputados federales de mayoría relativa) como el nivel seccional (correspondiente a las 66 mil “secciones” en las que se divide el territorio nacional para la instalación de las “casillas” o juntas receptoras de votos), presentan la ventaja de una mayor homogeneidad demográfica. Ambas circunscripciones son diseñadas con la finalidad de evitar desequilibrios excesivos en el “aportamiento” de los escaños y la organización práctica de la jornada electoral. Sin embargo, ni los distritos ni las secciones tienen significados concretos, ni para los ciudadanos ni para los

candidatos, pudiendo contener los primeros más de doce municipios rurales desvinculados y dispersos, o dividir arbitrariamente en tres o cuatro pedazos ciudades densamente pobladas.

Finalmente, cabe destacar la complejidad de analizar dinámicas espaciales territoriales desagregadas en niveles extremadamente finos. Con contadas excepciones, resulta poco útil representar las 66 mil secciones electorales en un solo mapa nacional, sin considerar las posibles distorsiones que implica equiparar las secciones urbanas de una ciudad chiapaneca como San Cristóbal de Las Casas, con las de una delegación del Área Metropolitana del Distrito Federal, cuyas dinámicas también dependen de variables que se estructuran en niveles superiores de análisis. Ello invita a combinar distintas escalas, sin menospreciar la cuestión crucial de las formas en las que se articula y ejerce el poder.

De ahí se desprende un conjunto de reflexiones teórico-metodológicas complejas e interesantes, sobre las posibilidades, las limitaciones, las consecuencias y las implicaciones de cada nivel y de cada escala de análisis, y sobre la necesidad de desarrollar enfoques multidimensionales del comportamiento electoral en contextos inciertos de crisis, transición y fragmentación política.

Estructura del trabajo

Para abordar estas cuestiones, el presente trabajo parte de una revisión sintética de la literatura sobre el comportamiento electoral y sobre sus relaciones con los procesos más amplios de modernización, para construir un marco teórico-metodológico apropiado para el análisis del proceso político mexicano.

Con base en ello, analizamos la evolución de la distribución geográfica del voto, así como sus relaciones con las estructuras territoriales del desarrollo humano en varios niveles complementarios de la geografía política mexicana (32 entidades federadas, 300 distritos legislativos uninominales, 2 443 municipios y 64 mil secciones electorales).

Esta geografía sintética del comportamiento electoral de los mexicanos es completada por un estudio cualitativo y socio-histórico del caso de Chiapas, para captar los significados concretos de las distintas modalidades en las que se ejerce el sufragio particular, e ilustrar los diversos tipos de movilización territorial.

Finalmente, el trabajo concluye con algunas consideraciones generales que se derivan del estudio, sobre la posibilidad de analizar los mecanismos específicos detectados en Chiapas en otras entidades del país, y sobre el interés de desarrollar enfoques teórico-metodológicos plurales que permitan estudiar el voto en una perspectiva situada y multidimensional.

I.

EXPLORANDO

LAS BASES SOCIO-TERRITORIALES DEL SUFRAGIO UNIVERSAL EN MÉXICO

A. Rastreado las huellas del sufragio “particular” en el México sub-nacional

Partiendo de un contexto paradójico –de expansión y de crisis, de idealización y de desencanto con la democracia representativa–, esta investigación busca contribuir al estudio de las dinámicas socio-territoriales de la extensión del sufragio universal, de la inclusión política y de la participación electoral a lo largo de las últimas tres décadas en México, en un período de crisis repetitivas y de una elevada inestabilidad.

Las democratizaciones latinoamericanas de los años 1980 son el fruto de la convergencia de procesos endógenos y exógenos, macro- y micro-sociológicos, que encontrarán condiciones políticas propicias con la crisis de los regímenes militares y/o nacional-populistas, en un contexto internacional muy favorable a la expansión del sufragio universal. Empero, tras haber despertado el entusiasmo popular, los resultados limitados de muchos gobiernos democráticos no tardaron en alimentar las frustraciones de los electores. Este desencanto profundo con la democracia “real” se alimenta de la simultaneidad y de la confusión entre la liberalización política y económica, que se producen en contextos adversos, de transiciones múltiples (demográfica, sociocultural, estatal y política). Muchas democratizaciones surgen, no como resultado de la modernización socio-económica, sino como producto del fracaso de los modelos estado-céntricos de desarrollo, en medio de procesos desordenados de des-regulación.

En México, la apertura política se inicia desde 1977. Pero habrá que esperar las repercusiones estructurales de la crisis de la deuda, en 1982, para que el régimen posrevolucionario haga paulatinamente las concesiones decisivas que permitirán el arranque de la democratización. Como resultado de una “mecánica” compleja de movilizaciones cívicas, de elecciones crecientemente competitivas y de reformas legales sucesivas, el régimen irá cediendo poco a poco su posición hegemónica, antes de perder la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 (Becerra, Salazar & Woldenberg, 2000). En contraste con otros países latinoamericanos, la alternancia presidencial del 2000 en México culmina un prolongado proceso de democratización, cuya conclusión es de las más tardías pero cuyo inicio es de los más precoces de toda la región, particularmente cuando se observa desde el nivel sub-estatal y local.

Por ello, la conquista de elecciones libres y competitivas coincide, aquí, con otra revolución silenciosa, de orden socioeconómico. A raíz de la crisis de la deuda, los gobiernos se ven obligados a realizar reformas estructurales, a reducir drásticamente el gasto público, a privatizar y abrir sus economías. Este repliegue del Estado de bienestar se traduce en la agravación de la fragmentación social. Así, los avances en el ámbito de la democratización se ven contrarrestados por la persistencia de la pobreza y por la agudización de la desigualdad –que sigue contando hoy entre las más elevadas de todo el mundo–. De ahí el déficit de legitimidad del nuevo “desorden democrático”, que se manifiesta a través de un cuestionamiento creciente de las instituciones representativas, de los gobernantes y de los mismos procesos electorales.

Por su relevancia para la historia reciente del país, la democratización y el comportamiento electoral de los mexicanos han sido objeto de numerosas investigaciones. Éstas se han desarrollado con distintos enfoques, entre los que destacan: los estudios centrados en los cambios de la cultura política y de las identidades partidistas (Moreno, 2012; Durand Ponte, 2004); los estudios inspirados en la teoría de la elección racional (Sarsfield, 2007; Buendía, 2000); los estudios de geografía electoral (Sonnleitner, 2013; Gómez Tagle & Valdés Vega, 2000); así como una rica vertiente de estudios cualitativos y etnográficos de antropología política, que privilegian la descripción densa de las relaciones de poder en contextos y comunidades particulares (Winocur, 2002; Krotz, 1996).¹

Sin embargo, aún contamos con pocos estudios que logran vincular la interpretación densa de los significados cualitativos y micro-sociológicos del voto (que se estudian a través de etnografías y observaciones participantes, en los niveles comunitario y local), con los procesos más amplios de democratización (que se analizan, mediante encuestas y datos agregados, en los niveles estatal y nacional). Para contribuir a esta tarea, la presente investigación explorará las dinámicas territoriales del sufragio “particular” en las escalas estadual, distrital, municipal y seccional, relacionándolas con los clivajes socio-económicos que estructuran las distintas entidades, regiones y microrregiones de México, e interpretándolas a la luz de datos cualitativos que permiten captar sus contenidos antropológicos en el contexto particular de Chiapas.

B. (Des-) armando el rompecabezas del voto y la participación electoral

Por su centralidad en la teoría democrática, el voto y la participación electoral cuentan entre los fenómenos más estudiados por la ciencia política. No solamente se trata de la forma más usual y frecuente de participación ciudadana, sino que su magnitud suele ser interpretada como un indicador vital de la legitimidad y de la salud de los gobiernos democráticos. Por ello, incontables investigaciones empíricas han explorado las variables que propician/inhiben la movilización política en democracias consolidadas, tanto mediante análisis de datos agregados como individuales.

Sabemos así, con mucha certeza, que la participación electoral se asocia fuerte y positivamente con diversos recursos individuales, particularmente la edad, los ingresos y la educación (Verba & Nie, 1972; Brady, Verba & Schlozman, 1995). También contamos con estimaciones robustas de los efectos positivos que ejercen distintos factores políticos e institucionales, incluyendo la relevancia, la competitividad y la simultaneidad de las elecciones, la fragmentación del sistema de partidos, los requisitos para el registro ciudadano, la posibilidad de votar por correo y/o los fines de semana, así como el voto obligatorio (Blais, 2007; Geys, 2006; Franklin, 1996). Asimismo, existe una relación consistente entre los indicadores nacionales del desarrollo socio-económico y los promedios nacionales de la participación electoral (Powell, 1986; Blais, 2007), que corrobora las premisas de la teoría de la modernización a nivel mundial y se acompaña de transformaciones cualitativas de la participación ciudadana (Norris, 2002).

Pero pese a la riqueza de los estudios disponibles para las democracias más avanzadas, seguimos desconociendo muchos aspectos del comportamiento electoral en las “nuevas” democracias. En efecto, se registra una varianza considerable no solamente *entre*, sino también

¹ Por limitaciones de espacio, solamente se citan algunos trabajos de referencia, que contienen a su vez buenas síntesis de cada enfoque, así como bibliografías amplias sobre la producción académica sobre el caso mexicano.

dentro de muchos países, que se refleja tanto en el tiempo (volatilidad) como en el espacio (dispersión geográfica), incluso en Francia (Braconnier & Dormagen, 2007) y en los Estados Unidos de América (Darmofal, 2003). Al respecto, se ha desarrollado un estimulante debate sobre el declive reciente de la participación electoral, que se verifica en muchos países de la OCDE desde la década de los noventa (Rosenstone & Hansen, 1993; Blais 2007), pero dista mucho de caracterizarlos a todos por igual (Topf, 1995; Norris, 2002).

Asimismo, la validez universal de la teoría de la modernización ha sido cuestionada por investigaciones sub-nacionales realizadas en países tan distintos como Sudáfrica (Fauvelle-Aymar, 2008), la India (Krishna, 2006; Mitra & Singh, 1999) y Honduras (Cáliz & Sonnleitner, 2006), donde son las localidades más marginadas las que participan más en las elecciones. Otras investigaciones recientes subrayan finalmente la permanencia de reductos autoritarios que restringen el ejercicio autónomo del voto en el nivel sub-nacional, no solamente en América Latina sino incluso en democracias “consolidadas” como los Estados Unidos de América (Gibson, 2012).

Desde una perspectiva más antropológica, también importa subrayar la diversidad de significados que puede adquirir el sufragio particular. Para captar la heterogeneidad de estos contenidos socioculturales del comportamiento electoral, Olivier Ihl distingue tres dispositivos fundamentales que reviste el voto como relación social: una *transacción*, una *pertenencia* y una *convicción*. Constituidas en categorías ideal-típicas, estas tres dimensiones permiten distinguir a su vez tres formas de elección: el *voto de intercambio*, el *voto comunitario* y el *voto de opinión*. El primero se relaciona con la asignación de ventajas materiales en redes clientelares. El segundo remite a pertenencias, reivindicaciones y decisiones colectivas, al movilizar grupos que se conciben como autónomos en torno a metas y conflictos de tipo comunitario (religión, lengua, identidades étnicas). El último corresponde a elecciones y a decisiones individuales, fundadas en conciencia y tomadas en contextos que garantizan la libertad e igualdad de los ciudadanos (Ihl, 2000: 22-34).

Finalmente, cabe indagar en las consecuencias de dicha heterogeneidad constitutiva del sufragio particular y en sus relaciones con la calidad de la democracia. Lejos de garantizar la igualdad política, el ejercicio diferenciado del voto conlleva sesgos importantes que debilitan la influencia de los más desfavorecidos sobre la política, la representación y la gobernabilidad democráticas (Dahl, 1956; Lipset, 1959; Lijphart, 1997). Pese a los ideales que inspiran la extensión y la expansión del sufragio “universal”, en la práctica éste no refleja siempre ni necesariamente decisiones personales, autónomas e individuales, sino que también puede resultar de presiones colectivas, corporativas y comunitarias, o de transacciones clientelares e intercambios asimétricos que comprometen su libertad e igualdad (Schedler & Schaffer, 2007; Holzner, 2010).

Partiendo de este marco teórico y conceptual, cabe preguntarse entonces: ¿Qué ha cambiado, concretamente, a lo largo del proceso de transición en el ejercicio del sufragio particular, y cuáles son los elementos de continuidad en el sistema político mexicano? ¿Cómo han evolucionado las tendencias sub-nacionales del voto en las últimas décadas en los distintos territorios de México, en un contexto adverso de reajuste económico y repliegue del Estado, cuando no de violencia e inseguridad? ¿Hasta qué punto dichas tendencias territoriales obedecen a dinámicas comunes – macro-sociológicas, regionales y transversales, políticas y/o institucionales–, y hasta qué punto éstas dependen de factores específicos –micro-sociológicos, coyunturales y/o locales–? ¿Qué relación guardan estas distintas dinámicas de *movilización electoral* con las estructuras geográficas del desarrollo económico, social y “humano”? ¿Cómo interpretar, en suma, estas tendencias temporales y espaciales del voto en el marco de las transformaciones más amplias inducidas por los procesos de modernización y de democratización en los últimos treinta años?

C. Hacia un enfoque plural y multidimensional de la movilización político-electoral

Nuestra tesis central es que la movilización electoral en México es un proceso heterogéneo, volátil y multidimensional, cuyos significados varían en el espacio y en el tiempo, en la medida en la que se modifican las reglas y los contenidos de un juego político en plena transformación. Lejos de ser un mero sub-producto de la modernización económica, la inclusión política desigual y la participación fluctuante de la ciudadanía dependen de diversos dispositivos de movilización electoral. Por ende, las distintas modalidades del voto se asocian con distintos perfiles de desarrollo socio-económico. Éstos condicionan y configuran las características del comportamiento electoral, con significados, funciones y consecuencias diferenciadas sobre los procesos de modernización y democratización.

Este estudio adopta un enfoque socio-territorial y multidimensional del sufragio “particular”. En lugar de concebirlo como una categoría rígida y opuesta al abstencionismo, se desarrolla la hipótesis que ambos comportamientos comparten una amplia zona gris, compuesta por electores que participan por razones diversas y en formas fluctuantes, cíclicas o intermitentes. Entre los votantes “duros” con lealtades, convicciones e identidades consistentes –que tienden a considerar el sufragio como un derecho o como un deber–, y los abstencionistas “estructurales” –que se encuentran en una situación permanente de exclusión electoral–, numerosos ciudadanos votan ocasionalmente, de una manera contingente y coyuntural.

Más generalmente, nuestro trabajo cuestiona la idea que el voto es una práctica unitaria y “universal” que pueda aprehenderse a partir de un modelo único, y demuestra que el sufragio “particular” obedece a lógicas muy diversas y en ocasiones opuestas, de lealtad e identificación colectiva, de negociación e intercambio transactivo, de convicción individual y/o de cálculo racional. Pero los significados del sufragio no solamente dependen de las predisposiciones y actitudes personales de los electores sino, también, del sentido concreto de cada elección, de lo que se encuentra realmente en juego en ella, así como de la naturaleza más compleja y profunda del régimen político-institucional.

En efecto, no es lo mismo participar por convicciones individuales en comicios libres y competitivos con una alta dosis de incertidumbre, que hacerlo por compromiso o por lealtad, bajo fuertes presiones colectivas en elecciones corporativas y restringidas cuyos resultados se conocen de antemano. Tampoco es lo mismo sufragar de una forma autónoma, bajo la protección de la secrecía del voto y en la anonimidad que confiere la residencia en alguna ciudad grande, que votar (o abstenerse) en una pequeña comunidad rural en la que todos se frecuentan y se re-conocen, lo que le confiere un contenido inter-subjetivo mucho más denso y complejo a una decisión en teoría individual.

De ahí la necesidad de adoptar una estrategia metodológica que permita captar y medir los comportamientos electorales en una perspectiva multidimensional. El potencial innovador de nuestro enfoque reside en su capacidad de incrementar la profundidad del análisis, al enriquecerlo con dimensiones territoriales de los procesos políticos, mediante la multiplicación de las escalas y de las unidades de observación.

Así, en lugar de limitarse a estudiar las tendencias macro-sociológicas del voto en el nivel nacional, la geografía electoral y la cartografía exploratoria del voto permiten indagar en las dinámicas particulares de las 32 entidades federadas, de los 300 distritos legislativos (en los que se eligen los diputados uninominales), de los 2 443 municipios y hasta de las 66 mil secciones electorales que conforman los territorios político-electorales de México. La introducción de estos

contrastes espaciales proporciona una visión sumamente fina de la política electoral desde el ámbito micro-sociológico y local.

En este trabajo, utilizamos el análisis espacial y la cartografía exploratoria de tres formas complementarias:

(1) Para analizar las dinámicas geográficas de la participación electoral y del voto partidista, y para identificar sus principales territorios y fronteras.

(2) Para establecer sus relaciones con las estructuras geográficas del desarrollo humano y para ubicar sus principales configuraciones territoriales.

(3) Para explorar si estos patrones territoriales también se asocian con formas específicas y diferenciadas de ejercer el voto (apoyándose primordialmente en mecanismos de pertenencia colectiva, de intercambio y/o de elección individual).

Evidentemente, estamos muy conscientes de las limitaciones y de los riesgos inherentes al análisis de datos agregados, y particularmente de lo que se conoce en la ciencia política como el "error ecológico" [*ecological fallacy*]: al modificar la escala analítica, una correlación cambia frecuentemente de intensidad, y hasta puede invertir su sentido y significado (Robinson, 1950). Por ello, la existencia de una correlación estadística en algún nivel agregado (país, entidad federada, departamento, distrito, municipio, sección electoral/mesa receptora de votos, etc.) nunca permite inferir sobre la existencia de una correlación análoga en ningún otro nivel, colectivo o individual.

Sin embargo, esto no significa que el nivel individual sea el único pertinente para estudiar el comportamiento electoral. Lejos de invalidar el interés del análisis ecológico, la posibilidad de establecer relaciones cambiantes en distintos niveles de observación invita a reflexionar sobre los efectos específicos que tiene la escala sobre los resultados del análisis. En efecto, el voto no es solamente una *decisión individual, ideológica y racional*; es, también, una *práctica social, colectiva y territorializada*, que está condicionada por factores socio-demográficos y por adscripciones identitarias, por lo que se inserta en numerosas redes de interdependencia y proximidad. En suma, el comportamiento electoral individual es tan importante como sus manifestaciones agregadas y colectivas.

Partiendo de estos elementos conceptuales, teóricos y metodológicos, pasemos ahora al análisis empírico del proceso político mexicano, iniciando con sus dinámicas estructurales y macro-sociológicas, territoriales e históricas.

II.

Del antiguo régimen al desorden democrático:

La lenta pero inexorable fragmentación de la familia revolucionaria, y el surgimiento de un sistema multipartidista con alternancia y competitividad

La ciencia política comparada nos ha acostumbrado a pensar la política electoral en términos predominantemente partidistas. Asumimos así, no solamente que los “partidos políticos” existen realmente en su forma ideal-típica en nuestros países, sino que éstos también orientan de una forma efectiva las identidades, las actitudes y las motivaciones del conjunto del electorado. Ese marco analítico funciona sin lugar a dudas en muchas viejas naciones europeas y en los Estados Unidos de América, donde los procesos políticos de los pasados dos siglos se estructuraron efectivamente en torno a divisiones partidistas que reflejan potentes clivajes económicos y socioculturales, profundamente arraigados en los electorados.

Sin negar que dicho enfoque tenga pertinencia para entender una parte del comportamiento electoral de los mexicanos, nuestros hallazgos invitan a combinarlo con otros enfoques alternativos. Al respecto, la sigla misma del legendario Partido Revolucionario Institucional (PRI) obliga a tomar alguna distancia crítica con respecto a la teoría clásica de los partidos políticos. Lejos de designar a un segmento determinado de la Nación con un proyecto ideológico distintivo, en México el PRI histórico se asemeja más bien a un conjunto de coaliciones que dan cabida a todos los sectores y proyectos imaginables de sociedad, bajo la sombrilla protectora de una gran familia revolucionaria. Y en lugar de amenazar los intereses conservadores de las élites dominantes, dicha familia logra la hazaña de protegerlos con la mayor eficacia al lograr pacificar la política e institucionalizarla bajo un pacto autoritario y corporativo, pero popular e incluyente. Ni “revolucionario” por sus métodos e intenciones, ni “partido” por sus aspiraciones a representar al conjunto del pueblo bajo su protección hegemónica, ni “institucionalizado” por su habilidad en combinar las leyes escritas con una utilización sofisticada de prácticas informales al menos tan determinantes e influyentes, la organización que gobierna el país entre 1929 y 2000 parece ser todo lo contrario de lo que reivindica su sigla denominativa.

¿Por qué no leer, entonces, la transición política mexicana, no a la luz de la teoría de los partidos políticos que se consolidaron con dinámicas propias en otras latitudes, sino a la luz del lento pero inexorable proceso de erosión y fragmentación de dicha organización corporativa y autoritaria? Como veremos ahora, la llamada “familia revolucionaria” pasó paulatinamente de una posición totalmente dominante a una hegemonía eficaz pero con fisuras crecientes, antes de romperse y escindirse tras la crisis de sus mecanismos de renovación interna. El enfoque territorial del voto proporciona un valioso instrumento para visualizar las dinámicas temporales y espaciales de dicho proceso a lo largo y ancho del país; revela las bases socio-territoriales, heterogéneas y cambiantes, de los distintos comportamientos político-electorales de los mexicanos.

A. La peculiaridad de la transición mexicana más allá del prisma partidista: una democratización a contracorriente

Cuando se observa la política mexicana desde Latinoamérica, ésta adquiere frecuentemente tintes de excepcionalidad. Durante largas décadas, sus instituciones gozaron de una envidiable estabilidad, particularmente en los períodos más convulsivos de los setenta y los ochenta, cuando las naciones del Sur y del Centro de las Américas conocieron dolorosos procesos de violencia revolucionaria y contra-insurgente. Heredero de un amplio movimiento revolucionario, que realizó una ambiciosa reforma agraria, creó poderosos sindicatos y nacionalizó los recursos naturales estratégicos empezando por petróleo, el régimen del PRI contó con un considerable sustento popular, al grado que el escritor peruano liberal, Mario Vargas Llosa, lo calificó como una “dictadura perfecta”.

De ahí la dificultad de identificar un punto claro de inicio de la llamada transición democrática. A contracorriente de la ola latinoamericana de democratizaciones, el proceso político mexicano se caracterizó por un cambio singularmente lento y gradual, que se negoció mediante una larga serie de reformas electorales, en el marco de la Constitución de 1917 que todavía sigue vigente. A diferencia de muchos otros regímenes autoritarios, en México los gobiernos posrevolucionarios nunca negaron la existencia de grupos de oposición. Por el contrario, durante mucho tiempo lograron instrumentalizarlos para canalizar los conflictos mediante concesiones de la más diversa índole.

Convivieron, así, durante seis décadas, un marco legal que garantizaba la realización periódica de elecciones multipartidistas (que se organizaban cada tres años, como lo marcaba la ley), con la utilización peculiar de dichos comicios por parte del régimen revolucionario institucionalizado (que controlaba estrechamente su grado de libertad, participación e inclusión, pero sobre todo, la designación de los gobernantes previamente seleccionados mediante el famoso “*dedazo*”). Si bien las elecciones no ofrecían verdaderas opciones, éstas permitían movilizar las masas populares y legitimar los candidatos oficiales, cuya designación era ratificada mediante un largo y cuidadoso ritual político (Adler-Lomnitz; Salazar; Adler, 2004). Retomando la clásica tipología de Hermet, Rouquié & Linz (1982: 27-31), se trataba de un “*multipartidismo coercitivo, limitado autoritariamente por el Estado*” y “*sin alternancia gubernamental*”.

Como lo veremos a continuación, en México la transición política no se caracterizó por un pacto puntual ni por la realización de unas elecciones fundadoras, sino por un prolongado proceso de negociación de elecciones cada vez más libres y competitivas. El paulatino declive del PRI se acompañó de la afirmación y consolidación del multipartidismo, afectando por ende al sistema político en su conjunto. Entre la reforma electoral de 1977 –que atrajo hacia el ámbito electoral a la gran mayoría de los sectores opositores– y la reforma de 1996 –que garantizó las bases jurídicas para un juego político más libre y competitivo–, se produjo una serie de cambios graduales en la organización y el funcionamiento del régimen institucional. Como consecuencia del resquebrajamiento de la hegemonía priísta, se debilitó el presidencialismo centralizador, al tiempo que se generó una división cada vez más efectiva de los poderes, tanto en sus dimensiones horizontales (con la creciente autonomización de los órganos legislativo y judicial) como verticales (con la reafirmación del federalismo y la descentralización de facultades y recursos hacia los gobiernos estatales y municipales).

En esta perspectiva, la alternancia presidencial del 2 de julio del 2000 puede ser considerada como una ruptura histórica en el largo proceso de transición, ya que ésta rompió el monopolio del

poder ejecutivo que ejerció el PRI durante 71 años, generalizando la división de los poderes en todos los niveles de gobierno. Pero si dicha alternancia desempeñó un papel fundador para la democratización mexicana, ésta también inauguró una era de nuevos desafíos para la gobernabilidad del sistema político y para su legitimidad. Las limitaciones del proceso democratizador resurgieron desde 2003, antes de manifestarse con fuerza durante los comicios generales de 2006. En un contexto en el que muchos esperaban una segunda alternancia presidencial desde la izquierda, la elección cerrada del candidato conservador del ya gobernante Partido Acción Nacional (PAN), suscitó un desgarrador conflicto postelectoral. Seis años después, la elección anunciada del candidato del PRI se tradujo en una nueva impugnación del proceso electoral de 2012. Sin embargo, la polarización que caracterizó la retórica de las campañas presidenciales no refleja la pluralidad de los comportamientos políticos de los ciudadanos, marcados por una creciente fragmentación y volatilidad del voto.

1. De la dictadura imperfecta al desorden democrático

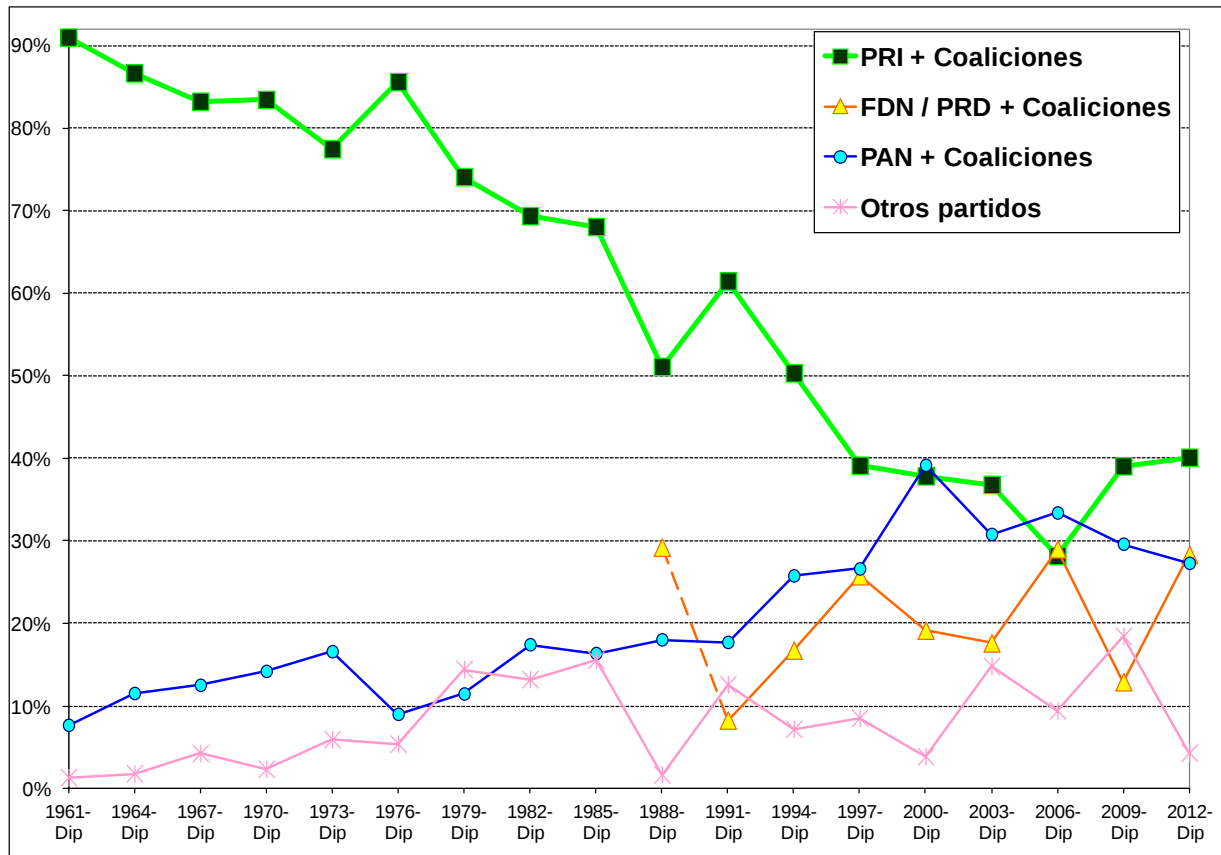
Para entender el significado más profundo de las elecciones contemporáneas en México, conviene ubicarlas en una perspectiva histórica y geográfica. Como lo veremos, la gran originalidad de la transición mexicana reside en su carácter excepcionalmente prolongado, centrado en la reforma gradual de los procesos electorales en el marco constitucional vigente desde 1917, característica que la distingue de las otras transiciones latinoamericanas. La alternancia presidencial del año 2000 trastoca radicalmente la correlación tradicional de fuerzas, poniendo fin al predominio ejecutivo del antiguo partido hegemónico y confirmando la configuración de un sistema político abierto, competitivo y plural, con tres partidos relevantes. Pero los resultados electorales también revelan fuertes continuidades con las tendencias pesadas y pasadas del voto, que pueden observarse a lo largo de las últimas décadas y varían notablemente en función de los distintos contextos regionales.

El lento pero inexorable declive de una dictadura casi perfecta (1961-1988)

La historia de la democratización electoral en México, es la historia del lento pero inexorable declive de una dictadura casi “perfecta”, cuya pieza clave fue la dominación hegemónica del PRI. Éste fue fundado en 1946 como sucesor directo del Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929) y del Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938), para articular los intereses antagónicos de los distintos sectores de la llamada “familia revolucionaria”. Dotado de un considerable sustento popular, dicho partido obtuvo resultados económicos “milagrosos” y se benefició de una estabilidad política excepcional hasta mediados de los sesenta, antes de ser cuestionado por una oposición cada vez más numerosa y pujante, particularmente a partir de la crisis política de 1968.

La gráfica 1 sintetiza el ritmo y la profundidad de las transformaciones electorales a lo largo de los últimos 45 años. Como bien se observa, la transición mexicana fue singularmente prolongada y gradual. La tendencia histórica estructural, que se percibe claramente desde la década de los sesenta, pese a las limitaciones que por mucho tiempo tuvieron los resultados electorales en México, es el lento pero inexorable declive del PRI, que va cediendo terreno de manera progresiva y constante. En este proceso, destaca tempranamente la afirmación del Partido Acción Nacional (centro-derecha) como primer ente aglutinador de la oposición en el nivel local, al calor de las luchas cívicas que prepararon el terreno para la democratización electoral (Gómez Tagle, 2001; Loaeza, 1999).

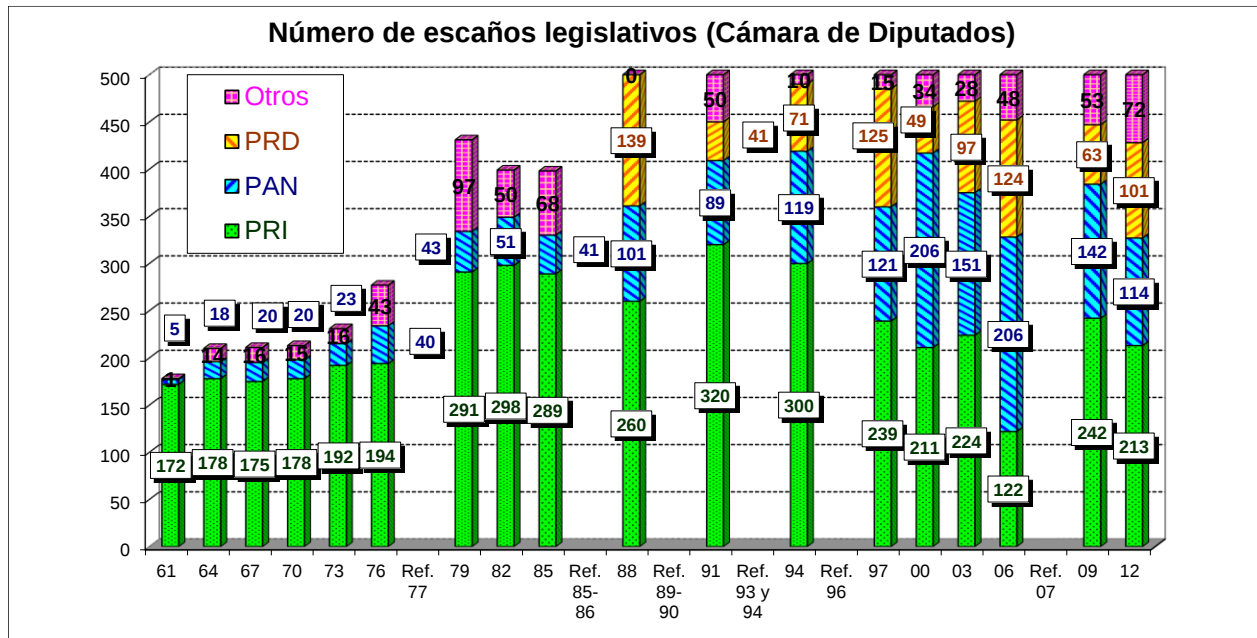
Gráfica 1: % Votos válidos obtenidos por los principales partidos políticos



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

Pero habrá que esperar los efectos de una larga serie de reformas para que, entre 1977 y 1996, las elecciones se vuelvan no solamente libres y plurales, sino también competitivas e inciertas con respecto a sus resultados. En dicho período, cada contienda presidencial es precedida por al menos una modificación de las reglas del juego político-electoral. La introducción sucesiva de una dosis creciente de proporcionalidad, que desemboca en la configuración de un sistema electoral mixto cada vez más abierto y representativo, juega un papel fundamental en esta transición. Como bien lo señalan Becerra, Salazar y Woldenberg (2000), los procesos electorales fungen como el principal motor de la “*mecánica del cambio político*”: al beneficiarse de la apertura progresiva del campo político, los partidos se integran poco a poco a la lucha electoral; ello les permite incrementar paulatinamente su representación en el Congreso de la Unión, lo que les proporciona una plataforma para fortalecerse en el ámbito electoral; ello, a su vez, les permite negociar nuevas reformas electorales para ampliar su representación en el nivel nacional (gráfica 2).

Gráfica 2: Evolución de la composición de la Cámara de Diputados (1961-2012)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

Al mismo tiempo, la oposición incrementa su fuerza y arraigo electoral, partiendo del ámbito municipal y distrital pero articulándose, también, poco a poco en los niveles estadual y federal. A partir de 1979, ésta capta siempre más de una cuarta parte de los votos válidos, para sumar prácticamente la mitad de ellos en las elecciones presidenciales de 1988. En dichos comicios, el proceso interno de selección del candidato del PRI entra en crisis, y una corriente denominada "crítica" rompe con el partido para constituir, en alianza con otros partidos de izquierda, el Frente Democrático Nacional (FDN), que posteriormente se transformará en el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centro-izquierda). Dicho frente apoya la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, antiguo gobernador priísta de Michoacán e hijo de Lázaro Cárdenas del Río, el mítico General y Presidente posrevolucionario (1934-1940). En plena crisis económica, con una fuerte devaluación del peso, el oficialista Carlos Salinas de Gortari apenas recibe el 50% del sufragio válido, en unos comicios que muchos consideran fraudulentos y que desembocan en un intenso conflicto postelectoral (Gómez Tagle, 2001).

Este proceso prolongado de descomposición de la familia revolucionaria se acompaña de la conformación de un juego político cada vez más abierto, libre y competitivo. Ello se refleja en la fragmentación creciente del sistema de partidos, que puede medirse mediante la evolución de diversos indicadores sintéticos. Para empezar, la capacidad de movilización del partido oficial (que se mantiene como la primera fuerza política hasta el año 2000) se deteriora paulatina pero inexorablemente, al pasar de 91% en 1961 a 74% en 1979, antes de caer de 61% a 39% entre 1991 y 2000, y de tocar fondo con 33% en las legislativas de 2006. Dicho declive se acompaña del crecimiento constante de las otras fuerzas de oposición que, pese a su creciente fragmentación, cierran cada vez más las contiendas electorales. Mientras que en 1961, la segunda fuerza legislativa apenas consigue 8% de los sufragios válidos, en 1973 y en 1982 ésta ya logra captar 17% del voto, antes de captar más del 26% a partir de 1994 (cuadro 1).

Cuadro 1: La fragmentación creciente del sistema de partidos

	1961	1964	1967	1970	1973	1976	1979	1982	1985	1988	1991	1994	1997	2000	2003	2006	2009	2012
Primera fuerza	91%	87%	83%	83%	77%	86%	74%	69%	68%	51%	61%	50%	39%	39%	37%	33%	39%	40%
Segunda fuerza	8%	12%	13%	14%	17%	9%	11%	17%	16%	29%	18%	26%	27%	38%	31%	29%	30%	28%
Competitividad	83%	75%	71%	69%	61%	77%	63%	52%	52%	22%	44%	25%	13%	1%	6%	4%	9%	12%
Nepl	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.7	1.9	1.9	2.6	2.3	2.8	3.4	3.0	4.1	3.5	3.8	4.3

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

Evidentemente, ambos fenómenos se reflejan en el incremento sostenido de la competitividad. En los setenta, los márgenes de victoria del entonces partido dominante rebasan siempre 71 puntos porcentuales, antes de disminuir a 63 puntos en 1979, a 52 puntos en 1982 y 1985, y a 22 puntos en 1988. Luego, a lo largo de los noventa las elecciones de diputados no dejan de cerrarse hasta llegar a niveles muy elevados de competitividad entre 2000 y 2006, y volver a abrirse posteriormente en 2009 y 2012 (cuadro 1).

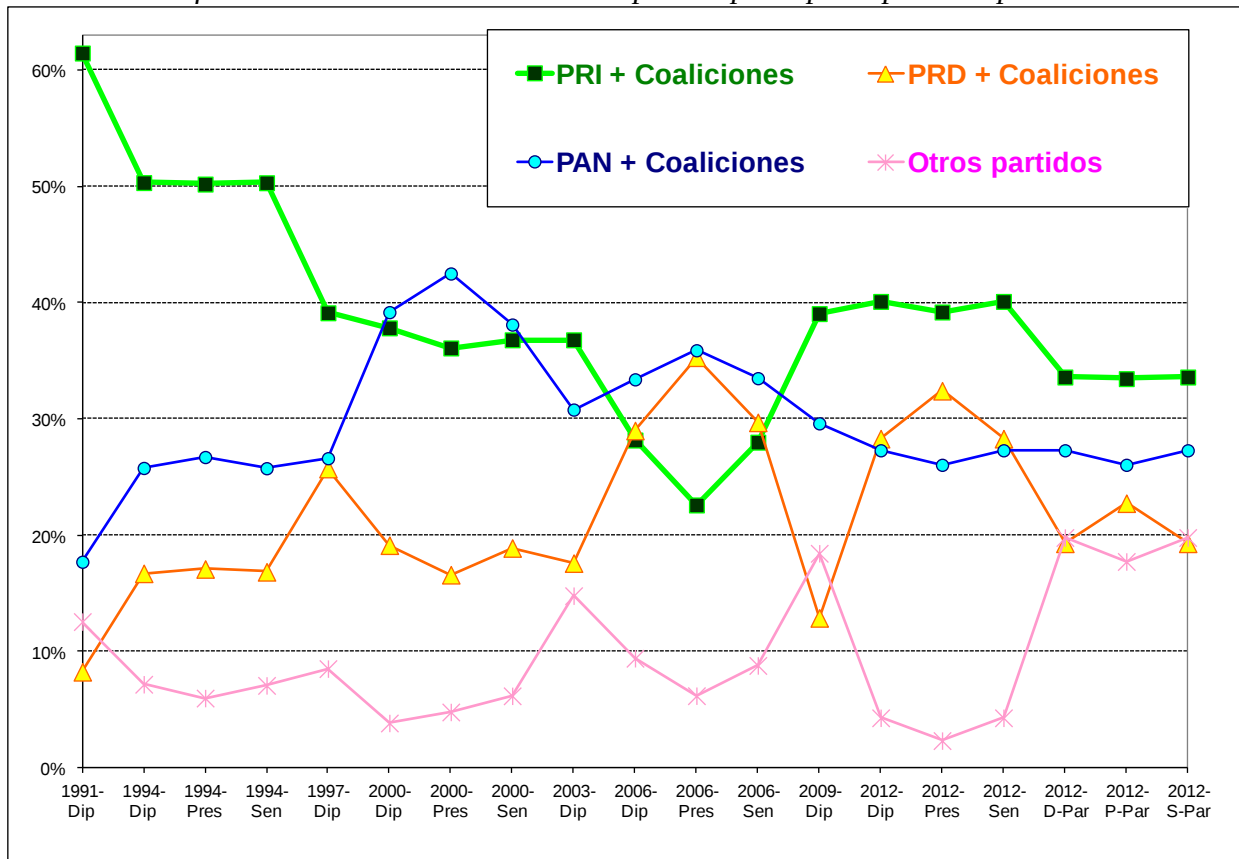
Finalmente, la fragmentación del sistema de partidos se refleja en el incremento paulatino pero continuo del número efectivo de partidos electorales. De un régimen de partido prácticamente único en 1961 (cuando el tricolor todavía 91% de los votos válidos), se pasa así a un régimen de partido hegemónico entre 1964 y 1979 (periodo durante el cual el único partido relevante sigue captando entre 87% y 74% de los sufragios válidos). Tan solo en los ochenta, las rupturas internas de la familia revolucionaria permiten la afirmación de otras fuerzas políticas importantes, que se consolidarán a lo largo de los noventa en el marco de un sistema con tres partidos políticos relevantes.

De la fragmentación del PRI, al multipartidismo y a la volatilidad (1991-2012)

Como resultado del declive del otrora partido dominante y hegemónico, el régimen político mexicano experimenta una transformación profunda, en un contexto de creciente volatilidad y fragmentación. Para establecer su legitimidad, el presidente Salinas inicia una nueva serie de negociaciones y “concertaciones”, que incluyen el reconocimiento de gobernadores panistas en Baja California y Chihuahua, así como una serie de nuevas reformas electorales. Este nuevo periodo inicia precisamente en 1991 con las primeras elecciones organizadas por el IFE, por lo que merecen un análisis más detallado los dieciséis comicios federales desarrollados desde entonces para elegir presidentes, diputados y/o senadores de la República (gráfica 3).

De entrada, llama la atención la posición confortable del PRI en las legislativas intermedias de 1991, que recuerda de alguna forma la situación previa a 1988, caracterizada por un partido cuasi hegemónico que capta 61.5% del total de votos válidos. Sin embargo, el sistema político cambia de naturaleza y, a partir de entonces, el Revolucionario Institucional pierde sucesivamente su hegemonía tradicional. En marzo de 1994, su candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, es asesinado en un mitin electoral en Tijuana, en un contexto de confusión generalizada, marcado por fuertes movilizaciones sociales tras la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Tras una campaña caracterizada por la incertidumbre y el miedo, el candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, gana nuevamente la Presidencia con el 50% de los votos, aunque su partido pierde por vez primera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión (gráficas 3 y 2).

Gráfica 3: % Votos válidos obtenidos por los principales partidos políticos



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE IFE (2012)

Como lo reconocerá posteriormente el mismo presidente Ernesto Zedillo, dichas elecciones resultan inusualmente libres y competitivas, pero todavía sufren un notorio déficit en materia de equidad. Solamente tres años después, tras las reformas electorales decisivas de 1996, el juego político se abre lo suficientemente para que el PRI pierda, finalmente, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ese mismo año, las primeras elecciones para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, también permiten la elección de Cuauhtémoc Cárdenas a ese cargo, ejerciendo de paso un importante efecto de arrastre personal que beneficia al PRD en las legislativas federales intermedias de 1997 (gráfica 3).

Tres años después, la candidatura de Vicente Fox ejerce un efecto similar de “voto útil” que beneficia a su Alianza por el Cambio, y le permite conquistar la Presidencia de la República en los comicios generales del 2000. Dicho efecto se observa tanto en el crecimiento generalizado de la coalición encabezada por el PAN en las legislativas, como en el fenómeno adicional de voto estratégico que le confiere una ventaja adicional en la presidencial, al captar una parte significativa de electores que votaron por la coalición de izquierda o por el PRI en las legislativas concomitantes. Es gracias a este voto cruzado que las presidenciales se saldan por un margen de ventaja de 6.4 puntos porcentuales con respecto al PRI, a diferencia de lo que sucede en las elecciones de diputados en las que el PAN solamente gana con una ventaja de 1.4 puntos porcentuales. Este dato resulta altamente significativo para facilitar la alternancia presidencial, contribuyendo a reducir la incertidumbre al disuadir un eventual rechazo o impugnación de parte de los candidatos perdedores (gráfica 3).

En 2003, se confirma la pluralidad del Congreso y se reproduce una situación de gobierno dividido (el gobierno del presidente Fox nunca cuenta con una mayoría panista en el Congreso). Pero a decir verdad, esto no se debe a una recuperación efectiva del principal ganador de los comicios (el partido tricolor), sino al éxito de su primera alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que le permite reconquistar la primera bancada en la Cámara de diputados al beneficiarse del voto de castigo contra el PAN. En cambio, la ruptura de la coalición de izquierda se refleja directamente en una mayor fragmentación del voto, así como en el estancamiento electoral del PRD (gráfica 3).

En 2006, la volatilidad electoral se acentúa considerablemente como consecuencia de la fuerte polarización que suscitan las campañas presidenciales. Por vez primera, la contienda se enfoca entre la ya gobernante Acción Nacional (que compite ahora sin alianzas, con la candidatura de Felipe Calderón) y la Coalición por el Bien de Todos (CBT, encabezada por el PRD y por Andrés Manuel López Obrador), relegando al PRI y a su candidato (Roberto Madrazo) al tercer lugar. Tanto Calderón (quien suma el 35.895% de los sufragios) como López Obrador (quien capta 35.332%) se beneficiarán de importantes efectos de arrastre, resultado de un voto cruzado masivo de electores priístas que votan por alguno de ambos en la presidencial. Es justamente por el notable efecto de arrastre que ejerce la candidatura de AMLO que la contienda se cierra, ahora, a un nivel máximo, reduciendo el margen de victoria a 0.56 puntos porcentuales en la presidencial, a diferencia de los 4.4 puntos de ventaja que obtienen los candidatos del PAN sobre los candidatos de la CBT en las legislativas. Y en esta ocasión, el carácter sumamente cerrado de la elección presidencial sí contribuye a generar una enorme incertidumbre sobre los resultados, alimentando las dudas e impugnaciones que desembocan en un grave conflicto postelectoral.

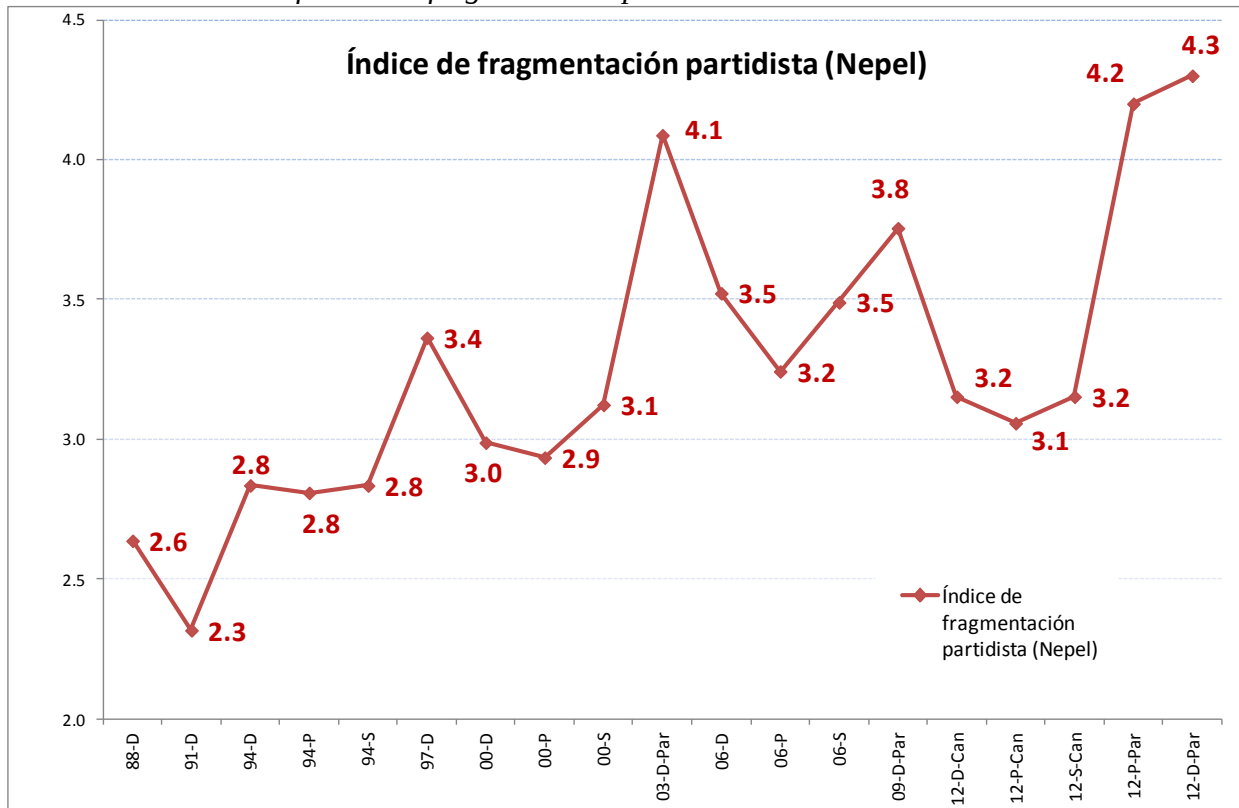
Las próximas legislativas intermedias de 2009 inician una nueva etapa en la configuración del sistema de partidos. El elemento más notable es la recuperación del PRI que, gracias a sus alianzas parciales con el Verde Ecologista, reconquista 264 (52.8%) de los 500 escaños en la Cámara de Diputados, sumando a sus 242 diputados los 22 legisladores aliados del PVEM. A su vez, el partido del presidente Calderón sufre un nuevo voto de castigo, que lo deja con una bancada reducida de 142 legisladores (28.4%). Pero sobre todo, las divisiones internas de la izquierda tienen efectos desastrosos para el PRD, que registra su votación más baja desde 1994 y apenas obtiene 64 diputados (12.8%).

Las últimas elecciones generales de 2012 deben de interpretarse a la luz de estas tendencias diacrónicas: confirman la recuperación relativa del PRI (fortalecido por sus alianzas estratégicas con el PVEM), el declive del PAN (desgastado por doce años de gobierno) y el peso competitivo de la izquierda partidista (cuando ésta logra superar sus divisiones internas). La gráfica 3 también permite visualizar los matices que ya señalamos anteriormente. A diferencia de Vicente Fox en 2000 y de Felipe Calderón en 2006, Enrique Peña Nieto no ejerce ningún efecto significativo de arrastre en la presidencial, sino que recibe incluso menos votos que los candidatos de su alianza en las legislativas. En contraste, y como en 2006, Andrés Manuel López Obrador vuelve a ejercer un importante efecto de arrastre y sí logra captar electores que votan por el PRI, el PVEM, el PAN o el PANAL en las legislativas concomitantes (véase la gráfica 3).

Finalmente, cabe destacar la creciente fragmentación del sistema de partidos. Cuando se pasa del análisis de las coaliciones al peso de cada fuerza partidista por separado, se obtiene una imagen muy distinta del juego político-electoral. Lejos de ser hegemónico o siquiera mayoritario, el PRI en realidad capta apenas una tercera parte del voto válido, lo que lo sitúa en una posición radicalmente distinta a la que pudo ocupar cuando era un partido dominante. De hecho, su fuerza

relativa ya no puede explicarse sin el apoyo de sus aliados del PVEM, que se ha vuelto estratégico tanto para obtener una ventaja clara en las presidenciales como para conformar mayorías legislativas en el Congreso de la Unión. A su vez, las izquierdas y el PRD pueden conformar coaliciones ganadoras cuando se presentan unidas, pero son relegadas al tercer, al cuarto o al quinto lugar cuando actúan como partidos separados. Finalmente, tras haber logrado aglutinar hasta 43% de los sufragios en torno a la candidatura presidencial de Fox en el 2000, el PAN apenas logra captar 26.1% en las presidenciales de 2012, aunque sigue siendo el segundo partido del país.

Gráfica 4: La fragmentación partidista en el nivel nacional



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

En suma, lo más relevante para la comprensión precisa del nuevo juego político-electoral es la creciente fragmentación del sistema de partidos. Aunque muchos siguen pensando la política mexicana dentro de un esquema tri-partidista (PRI-PAN-PRD), en realidad ésta ya funciona ahora mediante un sistema con cuatro fuerzas relevantes. Ello se refleja en el Número efectivo de partidos electorales (Nepel), que pasó de 4.1 en 2003 a 3.8 en 2009 y alcanza, ahora, 4.2 en las presidenciales y 4.3 en las legislativas. Por primera vez, esta fragmentación también se refleja en la composición de la cámara de diputados donde, pese a los efectos desproporcionales del sistema electoral mixto, este indicador pasa de 2.99 en 2009 a 3.7 en 2012. En otras palabras, el papel que juega el PVEM, el PT, el MC y el mismo PANAL ha dejado de ser auxiliar, para volverse crucial en la construcción de coaliciones ganadoras y de mayorías gobernantes (gráfica 4).

¿Cómo se comportan, ahora, estas grandes tendencias nacionales cuando se desagregan en sus diversos componentes territoriales, en el nivel de las 32 entidades, de los 300 distritos legislativos uninominales y de los 2 446 municipios que conforman actualmente el territorio mexicano? ¿Y qué nos dicen estas distintas geografías electorales sobre las bases socio-territoriales del voto?

B. Las dinámicas sub-nacionales y las bases socio-territoriales del voto

Como veremos ahora, las grandes tendencias que se observan a nivel nacional distan mucho de ser homogéneas, y se caracterizan por fuertes especificidades sub-nacionales, regionales y locales. Éstas ponen de manifiesto una marcada diferenciación geográfica de las ofertas político-partidistas, de las bases socio-territoriales del voto, de la erosión y de fragmentación de los sistemas de partidos locales, que conviene abordar en tres niveles complementarios.

En su afán por controlar los cargos ejecutivos centrales de la política mexicana, las élites partidistas se estructuran, antes que nada, en el ámbito estadual, en el que buscan construir alianzas electorales que les permitan conquistar los gobiernos de las 32 entidades que conforman la Federación. Por ello, la descomposición de la familia revolucionaria se percibe con gran claridad en este nivel de análisis, que proporciona un mapa fácilmente comprensible de las distintas configuraciones estaduales de élites inter-partidarias.

Debido a su mayor diversidad, el comportamiento político de los electores se observa, en cambio, con mayor fidelidad en el nivel de los 300 distritos en los que se eligen los diputados federales uninominales. Éstos no cuentan con ofertas partidistas consistentes, pero presentan la ventaja de caracterizarse por una gran homogeneidad demográfica (cuadro 2). Ello facilita la comparación entre ellos: permite contrastar visualmente las circunscripciones urbanas –de mayor densidad poblacional y de mayor desarrollo socioeconómico–, con las circunscripciones rurales –más extensas, marginadas y dispersas–; y permite reducir las distorsiones que resultan de la comparación de entidades de una considerable heterogeneidad demográfica, social y humana (con una población de más de 8.8 millones de habitantes y niveles europeos de desarrollo, el Distrito Federal se distingue radicalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, más similares a las Repúblicas centroamericanas). Al mantener prácticamente constante el número de ciudadanos que los conforman, los distritos uninominales permiten captar, así, los efectos de las desigualdades socioeconómicas sobre los comportamientos electorales agregados.

Cuadro 2: Distribución del listado nominal por estados, distritos, municipios y secciones

LN_P_12XEntidades		LN_P_12_XDistritos		LN_P_12XMunicipios		LN_P_12XSecciones	
N Válidos	32	N Válidos	300	N Válidos	2,446	N Válidos	66,526
Media	2,566,101.0	Media	273,717.4	Media	33,571.2	Media	1,234.3
Error típ. de la media	386,248.7	Error típ. de la media	2,166.6	Error típ. de la media	2,043.8	Error típ. de la media	4.2
Mediana	1,950,466.0	Mediana	270,549.5	Mediana	9,274.5	Mediana	1,041.0
Moda	449,574	Moda	194872.00(a)	Moda	2,553	Moda	887
Desv. típ.	2,184,952.7	Desv. típ.	37,526.2	Desv. típ.	101,080.3	Desv. típ.	1,089.7
Varianza	4,774,018,280,445.4	Varianza	1,408,213,359.7	Varianza	10,217,228,075.9	Varianza	1,187,337.9
Rango	10,237,274	Rango	276,786.00	Rango	1,422,613	Rango	22,027
Mínimo	449,574	Mínimo	194,872.00	Mínimo	80	Mínimo	64
Máximo	10,686,848	Máximo	471,658.00	Máximo	1,422,693	Máximo	22,091
Suma	82,115,233	Suma	82,115,233.00	Suma	82,115,233	Suma	82,115,233

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

En tercer lugar, hay que hacer una aclaración importante sobre las posibilidades y limitaciones del análisis espacial en el nivel local. En este caso, el municipio presenta la importante ventaja de constituir la unidad básica de la vida pública mexicana. Es en los ayuntamientos que se planifican y ejecutan muchas de las políticas que más les importan a los ciudadanos. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los diputados –desconocidos, distantes y lejanos–, todos conocen e identifican a su alcalde –cuya proximidad se refleja tanto en las festividades como en los momentos más conflictuales–. No obstante, resulta poco útil representar en un solo mapa 2 446 unidades municipales, sin hablar de los problemas teórico-metodológicos que plantea la comparación directa de entidades conurbadas de hasta 1.8 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, con entidades eminentemente rurales de escasos miles de campesinos en las sierras de Guerrero, Chiapas o Oaxaca.

Dicho problema puede ser resuelto en parte mediante la utilización de las 66 mil secciones electorales en las que se instalan los centros de votación, y que cuentan con una gran homogeneidad demográfica y estabilidad temporal desde su creación en 1991. Sin embargo, generalmente resulta todavía menos útil construir mapas con un número tan elevado de unidades, que se vuelven prácticamente ilegibles. Por ello, reservaremos estos dos niveles de análisis para el estudio posterior de una entidad (Chiapas), que nos servirá como caso para profundizar nuestras indagaciones sobre las bases socio-territoriales del voto en un contexto más controlado y acotado.

La siguiente serie de mapas nos permitirá visualizar, de manera panorámica y retrospectiva, las principales dinámicas sub-nacionales de la transición mexicana y las bases socio-territoriales de los distintos comportamientos electorales en escalas complementarias. Éstas nos remiten a cuatro procesos articulados, que permiten observar el cambio político nacional en distintos niveles temporales y espaciales, proporcionando en su conjunto un panorama sintético de la geografía político-electoral mexicana:

a) La *división y descomposición progresivas de la famosa “familia revolucionaria”*, organizada en torno al PRI, perceptibles al menos desde la década de los sesenta y concentradas territorialmente en los niveles estadual y distrital.²

b) La paulatina *afirmación de una oposición de orígenes cívicos y empresariales*, que crece paulatinamente en las entidades y en las ciudades más desarrolladas del país. Geográficamente, ésta se expande desde la periferia hacia el centro y se aglutina en torno al PAN.

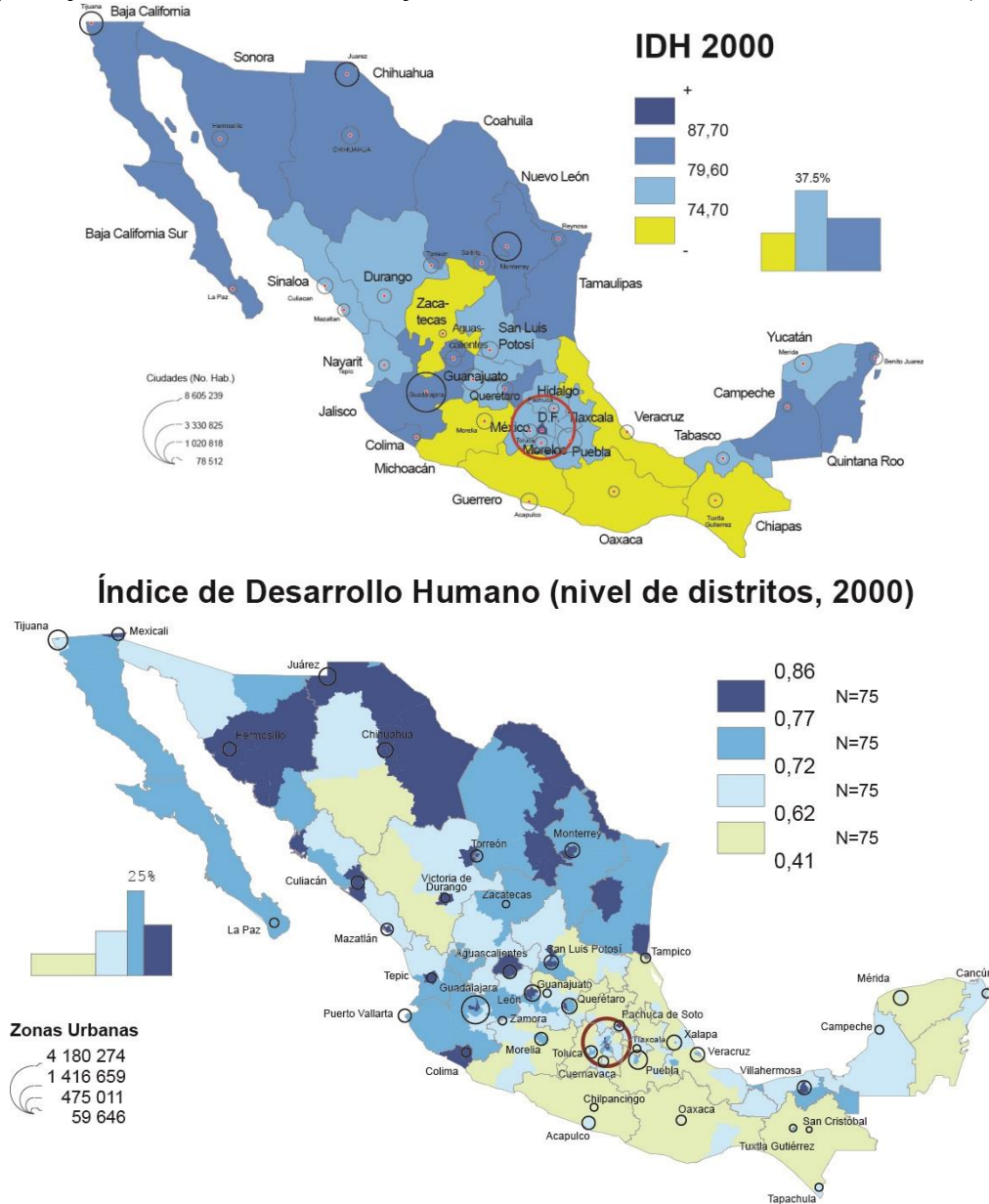
c) Una serie de *rupturas internas en el seno del PRI* que, mediante la *escisión sucesiva* de varios sectores identificados con el nacionalismo posrevolucionario y/o sus alianzas puntuales con diversos sectores de izquierda, desembocarán en la fundación del FDN en 1988 y del PRD en 1989. En términos geo-políticos, su expansión se produce desde el centro hacia la periferia del régimen, a partir de 1991.

d) Las *erosión y fragmentación crecientes del sistema de partidos*, que se configura en un primer tiempo en torno al PAN y al PRD, pero que va incluyendo a un número importante de partidos cada vez menos pequeños e irrelevantes, dando lugar a un juego cada vez más complejo e inestable de coaliciones puntuales y de alianzas coyunturales sin contenidos programáticos.

² Como la geografía electoral mexicana ha experimentado varios procesos de re-distritación, para este ejercicio hemos retenido la división distrital vigente desde 2009, reconstruyendo los indicadores socio-demográficos y los resultados electorales anteriores a partir de la agregación de los datos de las secciones electorales que integran los 300 distritos actuales.

Como punto de partida, recordemos brevemente las estructuras geográficas del desarrollo socioeconómico y humano, en vistas de relacionarlas posteriormente con las dinámicas socio-territoriales de los comportamientos político-electorales. En el primer mapa se distingue, así, el Distrito Federal –de lejos la entidad con el mayor nivel de desarrollo humano–, seguido por las seis entidades nortenas que colindan con los Estados Unidos de América, así como por cuatro entidades del Bajío y dos entidades de la península de Yucatán. En contraste, los menores niveles de desarrollo se concentran en el Sureste pero también caracterizan Michoacán y Zacatecas, situándose el resto de entidades en niveles intermedios de (sub-)desarrollo humano.

Mapas 1 y 2: Distribución estadual y distrital del Índice de Desarrollo Humano (2000)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL PNUD (2004)

El segundo mapa, desagregado en los 300 distritos uninominales, resulta mucho más preciso y revelador. En él, no solamente se distinguen con claridad los principales centros industriales del país, sino que también se ubican las zonas que se han desarrollado en torno a ellos, particularmente las franjas maquiladoras de la Frontera Norte y las zonas industriales de Aguascalientes y de Monterrey. Pero se observa, sobre todo, la diferenciación generalizada entre las ciudades más dinámicas y las capitales administrativas de las 32 entidades, y las zonas rurales y dispersas que se encuentran al margen del desarrollo nacional. Estas últimas se sitúan sobre todo en el Sureste, pero también abarcan partes importantes del Centro, del Golfo de México y del Norte, coincidiendo asimismo con las principales regiones indígenas del país (mapa 2).

a) El voto “duro” del PRI en los bastiones rurales del régimen posrevolucionario

Pasemos ahora a un análisis pormenorizado de las grandes tendencias geográficas e históricas del comportamiento electoral. Los primeros mapas sintéticos, realizados mediante análisis de clasificación jerárquica, muestran las principales dinámicas espaciales del declive del otrora partido hegemónico en el nivel estadual y distrital.³

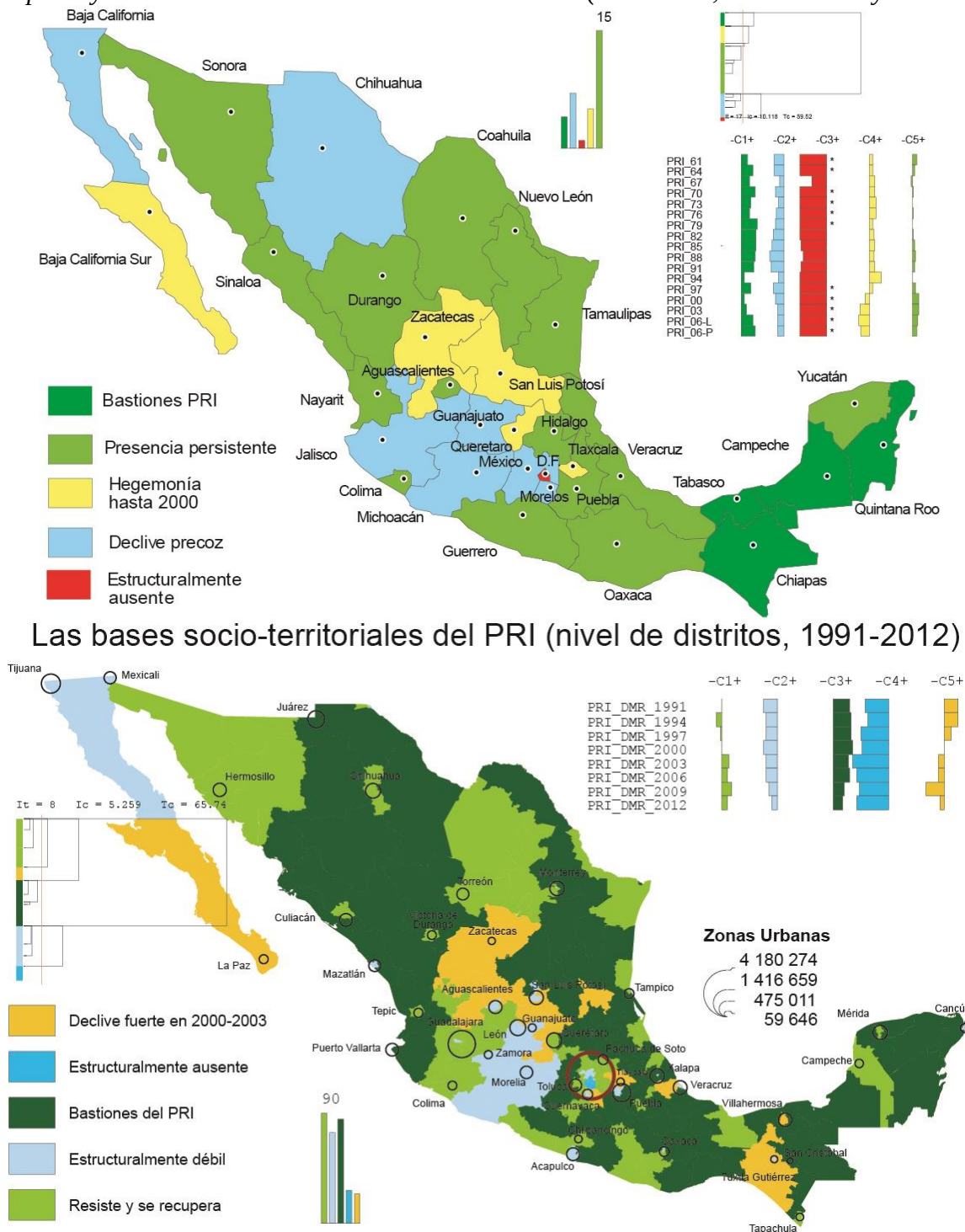
Desde los años sesenta, la familia revolucionaria enfrenta una fuerte oposición en el Distrito Federal, así como una incipiente pero sostenida oposición en otros siete estados del Centro (México, Morelos), del Centro-Occidente (Michoacán, Guanajuato, Jalisco) y del Norte del país (Baja California y Chihuahua). En Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala, su hegemonía relativa resiste mejor, pero terminará cediendo a partir de 1997 en los primeros dos casos, y del 2000 en los otros tres. Como en 1988, varios de estos casos se relacionan directamente con rupturas internas en torno a la definición de las candidaturas tricolores para gobernador, que desembocan en la elección de los “tránsfugos” bajo las siglas de algún partido o coalición de oposición. Desde entonces, el PRI tan sólo mantiene una fuerza excepcional en cuatro entidades del Sureste (Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas), beneficiándose sobre todo de las divisiones de la oposición que le permiten conservar una presencia significativa en las otras 15 entidades, gracias a una estructura organizativa que sigue siendo la más amplia y extendida de todas las fuerzas políticas mexicanas (véase mapa 3).

En un nivel más fino, el mapa distrital complementa útilmente estas tendencias estaduales de larga duración, para el período 1991-2012. A la manera de un queso Gruyere, la hegemonía del Revolucionario Institucional se erosiona de una forma mucho más profunda y precoz en los distritos de distintas ciudades y capitales estatales. Dicho declive es particularmente marcado en el Distrito Federal, en El Bajío y en Baja California. Pero también se observa, al menos desde 1991, en Tijuana y Mexicali, en Mazatlán, Aguascalientes, Guadalajara y San Luis, así como en distritos urbanos de entidades con fuerte presencia priísta, como Puebla, Acapulco, Xalapa, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Cancún. De manera general, la fragmentación de la familia revolucionaria se concentra en los distritos urbanos con mayores niveles de desarrollo, incluyendo aquellos casos en los que logra recuperarse en términos relativos entre 2003 y 2012. Por cierto, prácticamente no existen centros urbanos eminentemente tricolores, ubicándose los principales bastiones del Revolucionario Institucional en los distritos más rurales, dispersos y marginados del

³ Este método estadístico permite identificar las configuraciones más características de un conjunto inter-relacionado de variables (en este caso del comportamiento electoral) mediante la agrupación de las unidades en distintos sub-grupos, maximizando la coherencia interna de cada categoría, así como las diferencias entre ellas. Para una descripción del método, véase Minvielle & Sid-Ahmed (2003).

país. Ello le confiere un marcado perfil socio-demográfico a las bases territoriales del tricolor (véase mapa 4).

Mapas 3 y 4: Tendencias territoriales del voto del PRI (1961-2012, nivel estados y distritos)

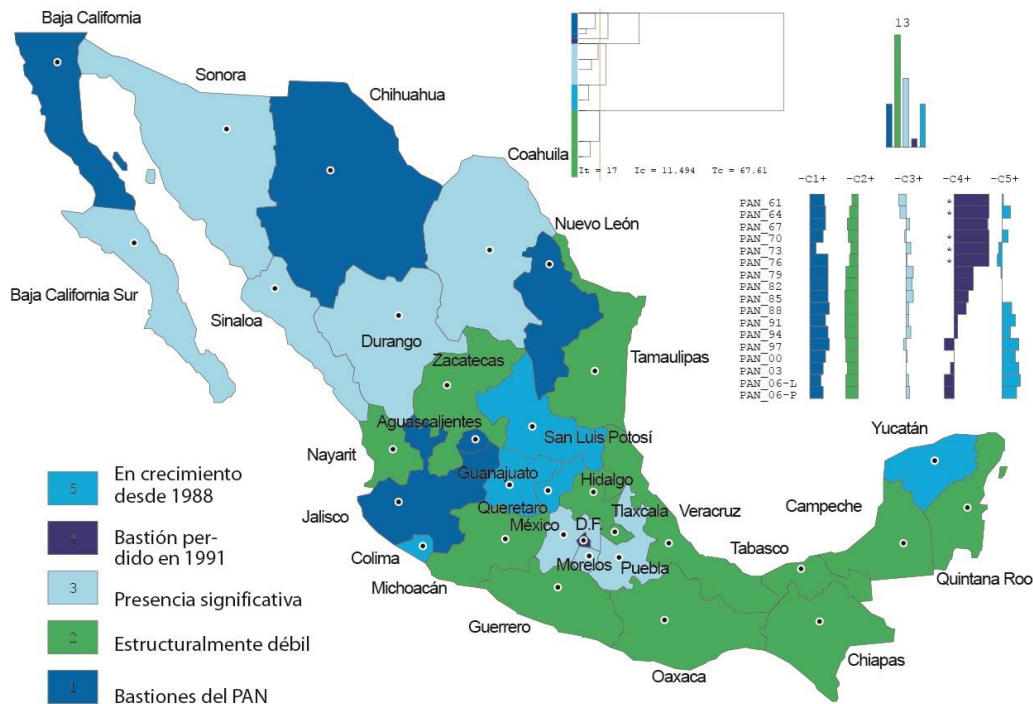


Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012).

b) Acción Nacional, o la revuelta cívica de las clases medias y urbanas ignoradas

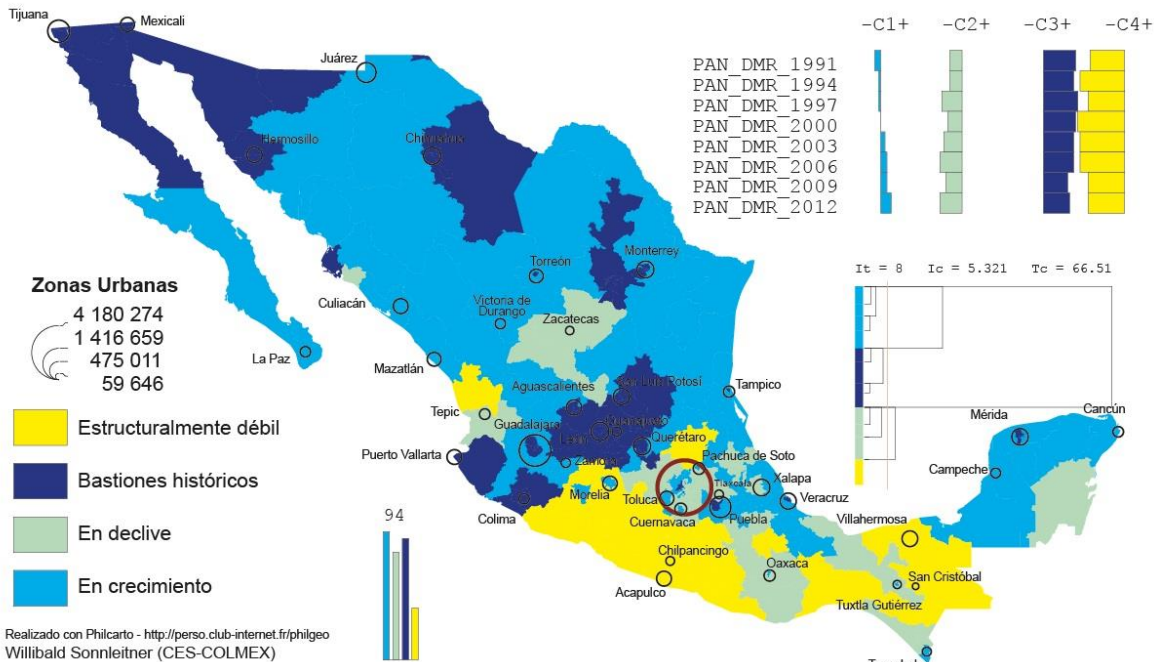
A la manera de los negativos de una fotografía, los próximos mapas reflejan las dinámicas geográficas de los procesos concomitantes que acompañan la erosión y fragmentación del Revolucionario Institucional. Como bien se observa en el mapa 5, el PAN cuenta con un fuerte y largo arraigo en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco, donde se ha beneficiado de una dinámica de crecimiento constante y sostenido desde los años sesenta. Su presencia también fue inicialmente muy importante en el Distrito Federal, pero aquí son otras fuerzas las que, a partir de 1988, logran desplazar al PRI del primer lugar. A estos bastiones históricos del blanquiazul, se agrega una segunda categoría de entidades, donde la expansión de Acción Nacional también es impresionante pero mucho más reciente (1988-1994): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Colima y Yucatán. Finalmente, el PAN también logra implantarse en ocho entidades más del Norte (Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Coahuila) y del Centro (Estado de México, Morelos y Puebla), pero no tiene mayor éxito en el resto del país, salvo en algunas grandes ciudades y regiones (véase mapa 5).

Mapa 5: Tendencias territoriales del voto del PAN (1961-2012, nivel estados)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

Las bases socio-territoriales de Acción Nacional aparecen claramente en el mapa distrital. A la inversa del PRI, este partido de clase media surge y se consolida en distintos centros urbanos, particularmente en El Bajío, en la Frontera Norte y en el Centro del país. Pero el PAN también capta los votos de un electorado urbano y de clase media, situado en muchas otras capitales estatales (Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Mérida), incluyendo las ciudades de Puebla y Veracruz, Mérida, Campeche y Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Oaxaca, en entidades que se encuentran durante mucho tiempo bajo un férreo control del Revolucionario Institucional. De ahí el perfil socio-demográfico distintivo que se asocia usualmente con el blanquiazul, y que se mantiene al menos hasta el final del sexenio de Vicente Fox, en 2006 (mapa 6).

*Mapa 6: Tendencias territoriales del voto del PAN (1991-2012, nivel distritos)***Las bases socio-territoriales del PAN (nivel de distritos, 1991-2012)**

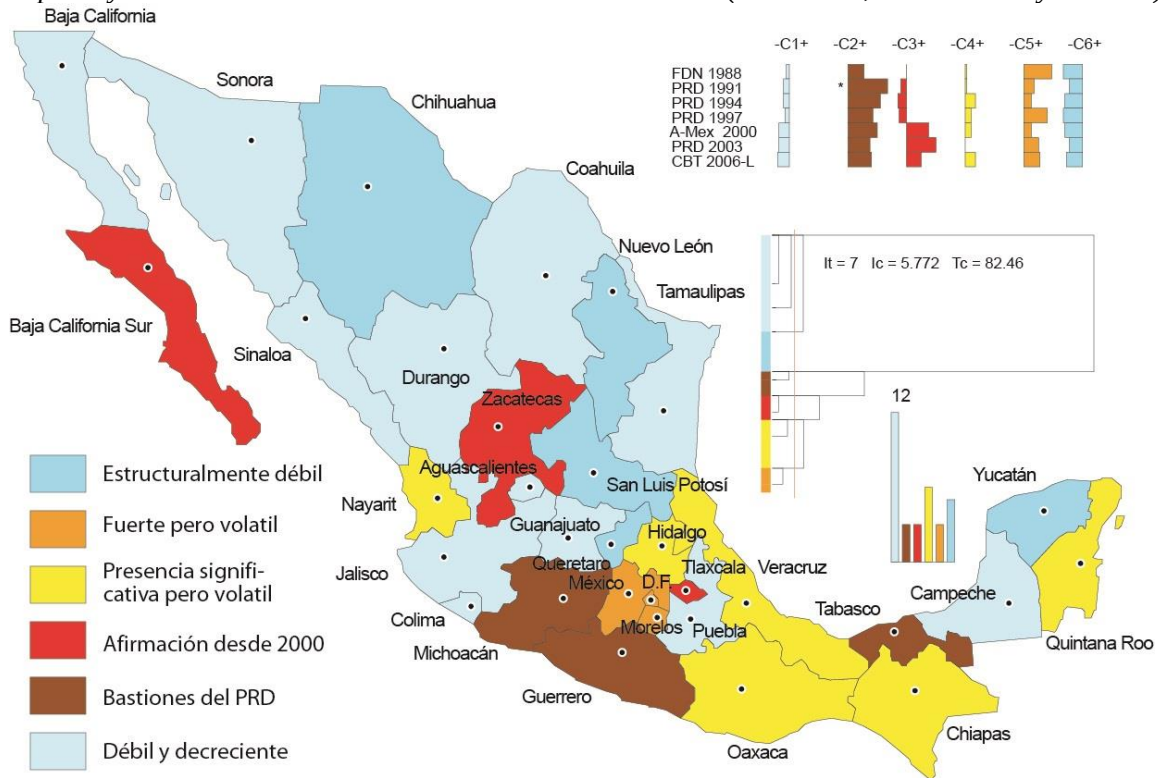
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

c) Disputas de familia: el PRD y la defensa del nacionalismo revolucionario

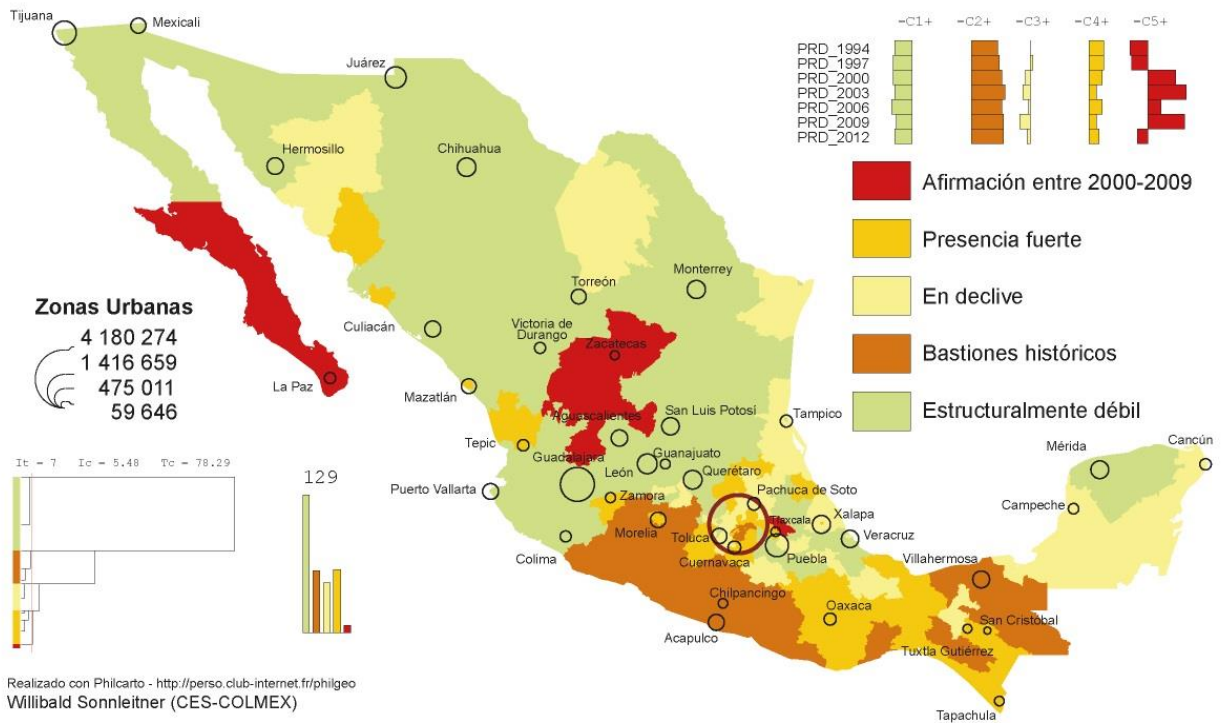
En contraste con el electorado de Acción Nacional, las dinámicas territoriales del FDN y de su heredero, el PRD, son mucho más fluctuantes. Dicha volatilidad se deriva de las rupturas sucesivas que se producen en el seno de la familia revolucionaria. Desde la escisión de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, la presencia del partido del Sol Azteca es fuerte y sostenida en su bastión personal de Michoacán (que él mismo gobernó en los ochenta, y donde gobernó posteriormente su hijo, Lázaro), en Guerrero y en Tabasco (de donde es originario Andrés Manuel López Obrador). Asimismo, desde 1988 el FDN se arraigó con fuerza en el Distrito Federal, en el Estado de México y en Morelos, antes de afirmarse en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Hidalgo y Nayarit a partir de 1994 (mapa 7).

La expansión del PRD fue mucha más convulsiva en el resto del país, registrando victorias puntuales gracias a la construcción de amplias coaliciones opositoras, pero conociendo fuertes reflujos en las legislativas intermedias. Dicha tendencia se distingue con nitidez en Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, donde la hegemonía priísta se mantuvo hasta finales de los noventa y donde la súbita afirmación del Sol Azteca se relaciona directamente con nuevas rupturas dentro del PRI. Éstas le permitieron conformar coaliciones con los disidentes de dicho partido, y conquistar las gubernaturas de las dos primeras entidades en 1998, y de la tercera en 1999 (mapa 8).

Mapas 7 y 8: Tendencias territoriales del voto del FDN/PRD (1988-2012, nivel estados y distritos)



Las bases socio-territoriales del PRD (nivel de distritos, 1994-2012)



Realizado con Philcarto - <http://perso.club-internet.fr/philgeo>
Willibald Sonnleitner (CES-COLMEX)

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012).

Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática ha logrado penetrar en muchos municipios y distritos, pero no se ha consolidado frecuentemente como una alternativa consistente a nivel estatal, teniendo una presencia coyuntural e insular que se observa en el mapa distrital. Éste confirma la profundidad de las raíces territoriales del Sol Azteca en sus bastiones de Michoacán, Tabasco y el Distrito Federal, y revela sus zonas de fuerza en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También permite ubicar sus bastiones distritales en Mazatlán, Tepic, Querétaro y Xalapa. Asimismo, llama la atención la volatilidad extrema de sus resultados distritales en Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, donde surge súbitamente en el 2000 antes de desaparecer prácticamente en 2012. Sin sorpresas, dicha inestabilidad resulta del tipo de alianzas que le permiten conquistar las tres gubernaturas en 1998 y 1999, gracias al apoyo de sectores descontentos del Revolucionario Institucional (véase mapa 8).

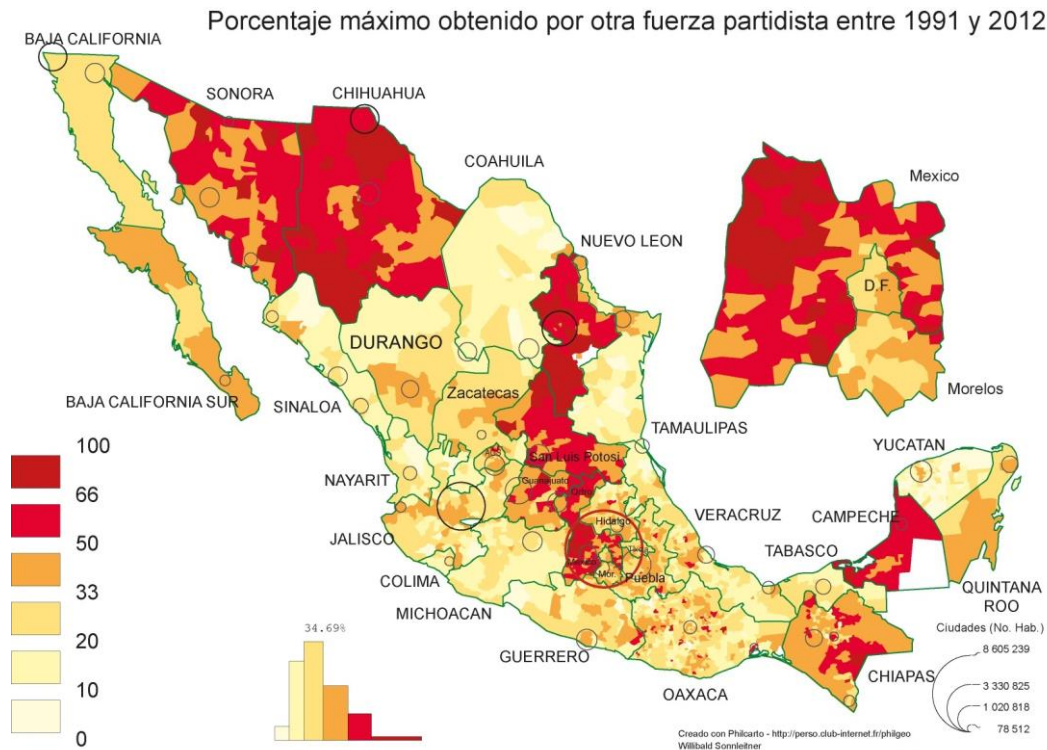
d) La “chiquillada”: los hijos rebeldes, huérfanos e ilegítimos del régimen

Sin embargo, una lectura del proceso político mexicano en términos estrictamente tripartidistas resulta trunca e insuficiente. A decir verdad, el éxito mismo de la familia revolucionaria se debe a su capacidad de confederar bajo las mismas siglas una miríada de organizaciones e intereses, dispersos y plurales. Cuando se funda, así, el partido tricolor bajo las siglas iniciales del Partido Nacional Revolucionario (PRM) en 1929, este aglutina en los hechos a cerca de 300 formaciones locales que, a falta de un proyecto disciplinante, bien hubieran podido perdurar como partidos políticos independientes.

En nuestros días, el papel de las otras fuerzas partidistas es más discreto pero no menos importante. Entre 1991 y 2012, una treintena de partidos registrados han participado activamente en alguna de las ocho contiendas federales, sin contar los numerosos partidos locales que han presentado candidatos en alguno de los comicios locales. Como lo hemos visto, el Congreso de la Unión se conforma actualmente, no con tres, sino con siete partidos que tienen voz y voto en las actividades legislativas. Pero, a diferencia de lo que ocurre con las tres grandes fuerzas políticas nacionales, estos partidos no cuentan con bases socio-territoriales estables en el nivel estadual ni distrital. Su participación se estructura, fundamentalmente, en el ámbito municipal, y su representación nacional depende de alianzas coyunturales y de coaliciones inestables.

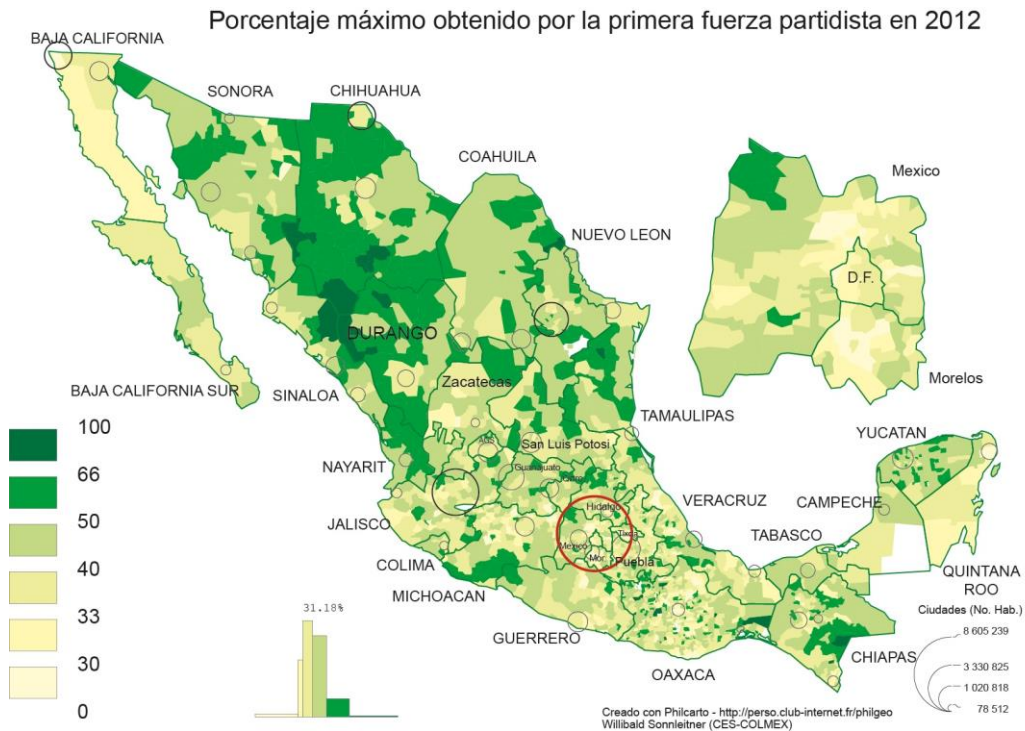
Por ello, en este caso hemos optado por un mapa peculiar para ubicar su presencia territorial, que representa el porcentaje máximo obtenido por el total de estas fuerzas en alguna de las elecciones federales del periodo 1991-2012, en el nivel de las 2 446 municipios mexicanos. Se observa una clara concentración geográfica del fenómeno, que recubre en parte el clivaje rural-urbano, pero también varía fuertemente entre las 32 entidades. En muchos casos, estos partidos se concentran efectivamente en los principales centros urbanos. Pero también hay entidades, en las que la fragmentación afecta amplias zonas rurales, como es el caso en Sonora y Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, el Estado de México, Campeche y Chiapas. En dichas entidades, existen 280 municipios urbanos y rurales en los que las cuartas fuerzas partidistas logran sumar puntualmente más de la mitad de los votos, movilizándolo incluso a más de dos terceras partes del electorado en 86 casos adicionales (mapa 9).

Mapa 9: Máximo municipal obtenido por algún “cuarto” partido político (1991-2012)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Mapa 10: Máximo municipal obtenido por el primer partido político (2012)



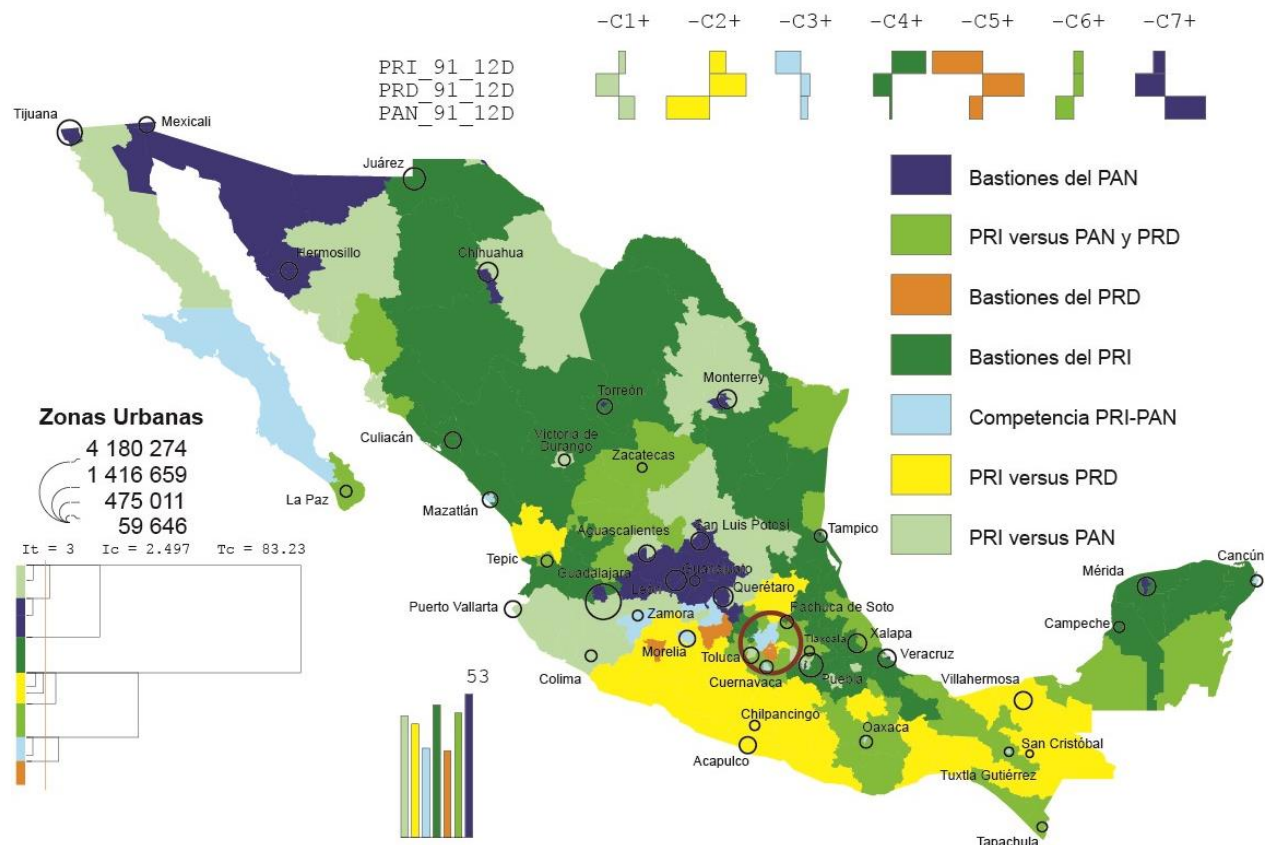
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Con toda su fragmentación e inestabilidad, dicha presencia es cuanto más significativa que, en las últimas elecciones legislativas federales de 2012, alguno de los tres principales partidos de gobierno apenas sumó más de la mitad de los votos en 347 municipios, movilizándolo a más de dos tercios de los electores en solamente 34 casos, situados en zonas más bien marginadas y rurales (mapa 10). Se trata, por supuesto, de un indicador aproximativo de un fenómeno muy heterogéneo e inestable, que aglutina organizaciones con fines, electorados e ideologías diametralmente opuestas, con demandas tan disímiles como la pena de muerte promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y consignas de inspiración socialista como las que impulsa el Partido del Trabajo (PT). Pero independientemente de su heterogeneidad, lo que hay que destacar es la importancia creciente de esta miríada de actores para el funcionamiento del sistema político mexicano.

Una geografía sintética de las bases socio-territoriales del voto (1991-2012)

Para terminar, el último mapa sintetiza las principales configuraciones de competencia inter-partidista, a partir de los promedios registrados en los distritos por el PRI, el PAN y el PRD entre 1991 y 2012 (mapa 11).

Mapa 11: Síntesis de las dinámicas territoriales del PRI, PAN y PRD (1991-2012)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Se distinguen, así, las grandes dinámicas analizadas de expansión territorial de la oposición. Acción Nacional surge en las ciudades más dinámicas del Norte y del Bajío, donde se consolida y desde donde se extiende paulatinamente para competir con el tricolor, logrando desplazar al PRI del primer lugar en Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. De manera inversa, el PRD surge y se expande desde el Centro hacia la periferia del régimen, registrando inicialmente sus mejores resultados en el Distrito Federal y en Michoacán, antes de extenderse hacia Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde compite en forma ocasionalmente reñida con el PRI. En cuanto al antiguo partido hegemónico, este resiste mejor en las zonas rurales del Norte y del Centro, y se beneficia de las divisiones de la oposición en el resto del país, manteniendo ventajas confortables en Coahuila y Tamaulipas, en Sinaloa y Durango, así como en Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, donde su predominio solamente es contestado en las ciudades más grandes y desarrolladas.

Finalmente, los siguientes cuadros permiten visualizar la evolución de las relaciones entre dichos comportamientos político-electorales, y las dinámicas distritales y seccionales del desarrollo socio-económico. Como se confirma en ambos niveles de análisis, Acción Nacional tiene mayor éxito en las entidades más urbanizadas y prósperas, en franco contraste con el Partido Revolucionario Institucional que resiste mejor en las zonas más rezagadas y rurales del país. Las bases socio-territoriales del PRD y de los otros partidos son más volátiles y heterogéneas. Ello se debe a que éstas se sitúan, tanto en la franja más desarrollada del área metropolitana (Distrito Federal y zona conurbana del estado de México), como en las entidades más marginadas y rurales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lo que les confiere un perfil socio-demográfico mixto y globalmente indiferenciado (cuadros 3 y 4).

Cuadros 3 y 4: Correlaciones entre partidos e índices de urbanización y desarrollo humano (Nivel distrital y seccional, 1991-2012)

Correlaciones IDH con:	1991	1994	1994-P	1997	2000	2000-P	2003	2006	2006-P	2009	2012	2012-P
PRI + coaliciones	-.487**	-.435**	-.449**	-.570**	-.503**	-.478**	-.274**	-.304**	-.472**	-.090	-.271**	-.355**
PAN + coaliciones	.594**	.702**	.724**	.544**	.649**	.694**	.489**	.488**	.528**	.283**	.351**	.369**
PRD + coaliciones	-.274**	-.467**	-.468**	-.187**	-.391**	-.478**	-.147*	-.320**	-.280**	-.283**	-.145*	-.0107
Correlaciones Urbanización con:	1991	1994	1994-P	1997	2000	2000-P	2003	2006	2006-P	2009	2012	2012-P
PRI + coaliciones	-.633**	-.641**	-.617**	-.734**	-.724**	-.691**	-.531**	-.536**	-.683**	-.215**	-.499**	-.591**
PAN + coaliciones	.546**	.666**	.668**	.389**	.631**	.685**	.450**	.335**	.370**	.165**	.205**	.198**
PRD + coaliciones	-.147*	-.286**	-.295**	0.066	-.222**	-.286**	0.027	-0.055	-0.008	-.138*	.143*	.194**
Nivel de distritos electorales (N = 300)	*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).						**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).					
Correlaciones IDH con:	1991	1994	1994-P	1997	2000	2000-P	2003	2006	2006-P	2009	2012	2012-P
PRI + coaliciones	-.368**	-.403**	-.416**	-.504**	-.475**	-.462**	-.248**	-.293**	-.455**	-.084**	-.240**	-.337**
PAN + coaliciones	.493**	.615**	.646**	.447**	.602**	.643**	.417**	.354**	.398**	.206**	.202**	.173**
PRD + coaliciones	-.157**	-.215**	-.209**	-0.008	-.252**	-.333**	-.156**	-.195**	-.085**	-.282**	-.064**	.039**
Correlaciones Urbanización con:	1991	1994	1994-P	1997	2000	2000-P	2003	2006	2006-P	2009	2012	2012-P
PRI + coaliciones	-.440**	-.509**	-.497**	-.590**	-.620**	-.614**	-.423**	-.450**	-.587**	-.222**	-.404**	-.489**
PAN + coaliciones	.470**	.637**	.647**	.421**	.635**	.699**	.426**	.329**	.382**	.177**	.184**	.151**
PRD + coaliciones	-.096**	-.139**	-.139**	.084**	-.159**	-.239**	-.018**	-.055**	-.035**	-.165**	.070**	.172**
Nivel de secciones electorales (N = 64 512)	**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).											

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Para terminar, llama la atención el cambio importante que registran las bases socio-territoriales del PAN a partir de 2009, año en el que se debilita notablemente su marcado perfil urbano y desarrollado. Dicha ruptura coincide con el fin del sexenio de Vicente Fox, y con la nueva estrategia adoptada por el presidente Felipe Calderón. Para entender mejor la reconfiguración reciente de las dinámicas territoriales del juego inter-partidista, el análisis profundizado del caso de Chiapas resulta particularmente útil y revelador. A pesar de sus marcadas especificidades socio-demográficas, esta entidad del Sureste mexicano conoce una transición político-electoral muy similar a la que se observa en el nivel federal. Asimismo, presenta una gran diversidad regional, económica y sociocultural, por lo que nos permitirá reflexionar sobre las bases socio-demográficas y territoriales del sufragio particular.

III.

LAS BASES MICRO-SOCIOLÓGICAS DEL SUFRAGIO PARTICULAR EN CHIAPAS

En este apartado, indagaremos en las dimensiones antropológicas y micro-sociológicas del sufragio particular, en un contexto geográfico y socio-histórico peculiar. Chiapas proporciona un verdadero paradigma del pacto político que cimentó las bases socio-territoriales del régimen pos-revolucionario en el pasado, en una de las regiones más rezagadas y marginadas de la República mexicana. Como veremos, dicho pacto entre las élites federales del PRI y los grupos locales de empresarios agropecuarios, fue singularmente sólido y duradero. Resistió los embates de la crisis política de 1988, la más grave que enfrentó el régimen desde su consolidación, lo que le valió a esta entidad la reputación de ser el “último granero electoral del PRI”. Luego vino la rebelión neo-zapatista de 1994, que puso los graves problemas del estado en el centro de la agenda nacional. Aunque los procesos electorales permanecieron al margen de los reflectores mediáticos, fue en este ámbito en el que se produjo el cambio más drástico y notable, transformando mediante una revolución silenciosa las formas en las que se compite por el poder político en el estado.

¿Cómo interpretar las distintas dimensiones de la participación electoral, en un contexto de cambios profundos no solamente del régimen político institucional, sino de la demografía, la economía y la sociedad? ¿Qué significados adquieren los votos en situaciones autoritarias marcadas por la dominación de un régimen de partido hegemónico? Y, ¿qué cambia concretamente con el surgimiento de elecciones multipartidistas más libres y competitivas, con alternancias y con opciones efectivas para los ciudadanos? ¿Qué revelan las votaciones masivas y gregarias, hegemónicas o cuasi unánimes, de algunas secciones electorales al ser observadas en campo? ¿Cómo se refleja la volatilidad del voto cuando ésta obedece a consignas electorales colectivas, de tipo corporativo, coercitivo y/o clientelar? ¿En qué circunstancias los ciudadanos tienden a “dividir” estratégicamente sus votos entre candidatos de distintos partidos? Y ¿qué relación guardan estas prácticas territorialmente diferenciadas del *sufragio particular*, con otras desigualdades de tipo económico y sociocultural?

A continuación, abordamos estos interrogantes desde una perspectiva multi-dimensional. Primero, analizamos las bases socio-territoriales de la participación electoral durante la época dorada del antiguo régimen posrevolucionario, cuando sufragar era prácticamente sinónimo de apoyar al PRI. Entonces, las estructuras territoriales del voto coincidían estrechamente con la capacidad de movilización de los agentes e intermediarios del tricolor; las elecciones solamente se volvían competitivas ocasionalmente, cuando en algunos lugares se fracturaba el pacto posrevolucionario, antes de ser restablecido por la fuerza de la persuasión y la cooptación, o por la violencia de la represión. En este tipo de situación autoritaria, la oposición al régimen se manifestaba sobre todo de forma indirecta, mediante la desafección y el abstencionismo, que se concentraban claramente en las principales ciudades con mayores niveles de desarrollo. De ahí una relación significativa, pero contra-intuitiva, entre los niveles municipales de subdesarrollo y de participación electoral.

Esta relación cambia paulatinamente en los noventa, como lo revela el análisis de los nuevos comportamientos políticos registrados a partir de 1991. Tras la creación del IFE, éstos pueden ser desagregados en la escala micro-sociológica de las 1 929 secciones que conforman desde entonces la geografía electoral de Chiapas. A lo largo de 21 años, se produce una

transformación profunda del sistema político institucional, que conlleva una diversificación creciente de las prácticas y los contenidos de la participación electoral. De conductas colectivas, comunitarias o corporativas, eminentemente unánimes y estables, se pasa a un ejercicio cada vez más diverso, volátil y fragmentado, autónomo e individual del sufragio, lo que revela el paulatino aprendizaje del pluralismo electoral en un contexto de re-apropiación y re-invencción del voto.

Sin embargo, dicho proceso dista mucho de ser homogéneo o lineal. Junto con el nuevo tipo de sufragio –autónomo e individualizado, de convicción, de evaluación o de sanción–, conviven también comportamientos más tradicionales –de carácter eminentemente colectivo y gregario– que pueden apoyarse en lealtades corporativas y faccionales, o bien en mecanismos diversos de transacción e intercambio clientelar. Es por ello que, cuando se relacionan los promedios seccionales de participación electoral con los niveles seccionales de marginación socio-económica, el coeficiente global no resulta significativo. Sin embargo, ello no significa que no exista ninguna relación entre ambas variables. Significa, más bien, que se requiere de un análisis de los distintos componentes del voto por separado, para entender cómo se agregan éstos en el conjunto heterogéneo que integra la participación electoral en Chiapas.

A. De la movilización autoritaria a la fragmentación del voto

En México, los significados históricos de la participación electoral bajo las formas del “acarreo” y la movilización corporativa, así como en sus vertientes más modernas y cívicas, han sido analizados por numerosos autores (Adler-Lomnitz, Salazar & Adler, 2004; Durand Ponte, 2004; Gómez Tagle, 2001). Para el caso específico del Chiapas autoritario, rural e indígena, resultan reveladores los siguientes cuatro relatos, referidos a las décadas de 1940, 1960, 1970 y 1980. Como pudimos documentarlo mediante entrevistas que realizamos con antiguas autoridades tradicionales, las elecciones del periodo posrevolucionario distaban mucho de ser libres y competitivas. Las palabras de un antiguo presidente municipal de Huixtán resultan reveladoras:

Anteriormente ya votábamos en Huixtán. Marcábamos las boletas como de cuatro, pero siempre por el PRI, porque el PAN —nos decían— era para los mestizos. Y nos amenazaban si votábamos por el PAN. Por eso nadie votaba por el PAN. En cambio ahora sí se ve que ha cambiado mucho, porque ya hay casillas y sólo una boleta, y es a escondidas. Antes sólo se sacaba la mesa en el pueblo de Huixtán, y por caja las boletas, y se repartían los paquetes. Estamos hablando de los años 1945, yo tenía más o menos como 23 años [...].⁴

A su vez, Ulrich Köhler documentó la forma en la que se realizaron los comicios de 1970 en San Pablo Chalchihuitán. Su reconstitución de la forma en la que se organizaban las “elecciones” en esa época, ilustra de forma fehaciente cómo se “votaba” entonces en numerosas comunidades rurales, indígenas y mestizas, de Chiapas:

Oficialmente el *peserente* es elegido por escrutinio secreto de todos los pableros y pableras. En la practica el PRI decide (*sic*) quien va a ser *peserente*. Pues, el que llega a ser candidato del PRI, ya no puede perder la "elección". Siendo trabajo de papeleo, se encarga, en San Pablo, al secretario municipal la tarea de llenar las papeletas electorales. Para él, el año de 1970 fue bastante duro porque tenía que llenar las aproximadamente 1 400 papeletas electorales [...] El secretario ya conoce el método "apropiado" y no llena ni un solo voto en contra de la proposición del PRI, pero sí devuelve unas nueve, trece o diecisiete (de preferencia un numero

⁴ Entrevista con Miguel Huacash, fundador de la religión evangélica en San Antonio Balashilná, San Antonio Balashilná, 11 de octubre del 2000.

irregular) papeletas blancas. Así se evita un voto afirmativo de 100% y se llega al resultado elegante de 99% y pico [...]. (Köhler, 1982:133)

Como tercer botón de muestra, las entrevistas a profundidad que realizó Edmundo Henríquez Arellano durante su trabajo etnográfico sobre las élites indígenas locales de los Altos, aportan elementos adicionales sobre las dimensiones antropológicas del voto durante el régimen posrevolucionario. Como se lo relató uno de los antiguos presidentes municipales de Mitontic:

La verdad [...] es que nunca ha existido la democracia. Era una sacadera de votos, era como tradición. En la época de la votación se mandaba llamar a los escribanos, se tomaba el padrón, bueno, nunca van a votar todos, y llenaban los votos. Se escuchaba de otros partidos, pero en el municipio [de Mitontic] no se permitía otro para que todos estuvieran unidos. Llega un licenciado de Asuntos Indígenas, ellos hacían el acta. La verdad me da pena, quisiera uno regresar el tiempo (Henríquez Arellano, 2000:57-58).

Estas situaciones autoritarias solamente empezaron a cambiar durante la década de los noventa, cuando la creación y la ciudadanización del IFE fue generando paulatinamente condiciones más propicias para una participación electoral más autónoma e independiente:

Ahora, el que no vota, pues queda a su criterio, porque ya no hay castigo. Solamente ante la comunidad, es mal visto o criticado, porque la gente sí se da cuenta cuando una persona no vota.

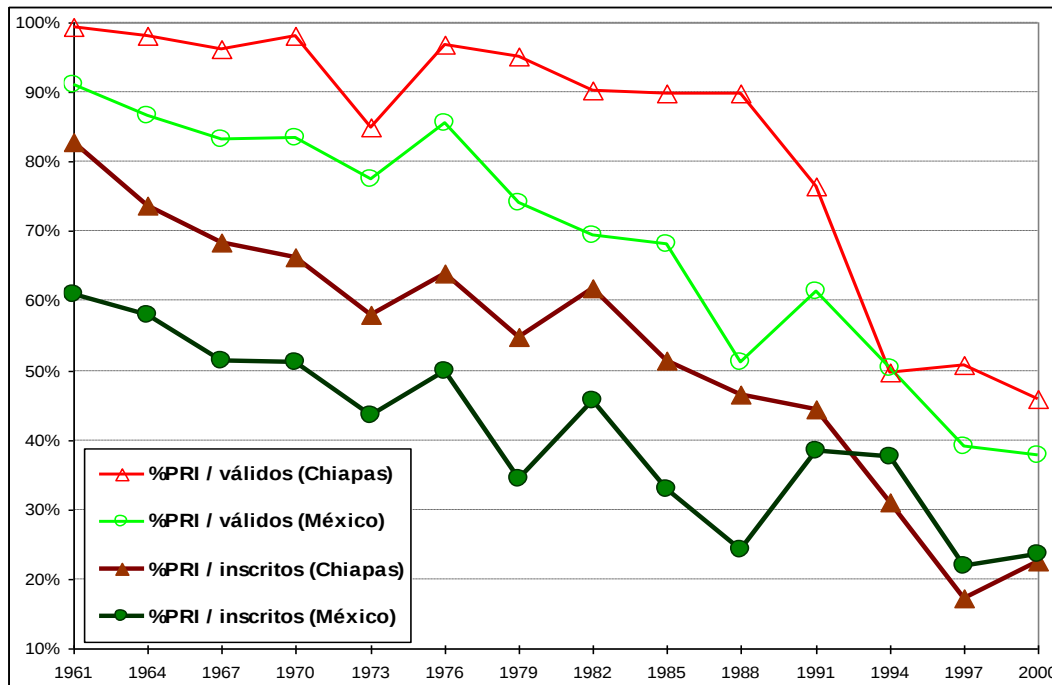
En cambio, en las elecciones anteriores era muy diferente. Eran obligadas las gentes para que salieran a votar. Y al que no lo hacía, le cobraban multa: de tres pesos. Y si sobraban paquetes de boletas, se invitaban a los ex comisariados para apoyar a tachar las boletas restantes. Por eso ganaba siempre el PRI. Votaban puros hombres, porque no habían boletas para las mujeres, únicamente para los hombres.

Eso sucedió en los años 60. O sea, prácticamente no había orden, sólo los líderes manejaban las elecciones. Eran las autoridades las que se encargaban de las casillas y hacían lo que ellos querían. Antes, no era como hoy. No habían horarios. Porque los electores llegaban a lo que iban, y regresaban luego a sus casas. Por eso sólo los que cuidaban las casillas, sólo ellos se quedaban. Por eso hacían lo que querían [...].⁵

Como veremos más adelante, los efectos de estas prácticas anti-democráticas se reflejan en las dinámicas territoriales y en el perfil socio-demográfico de la participación electoral hasta 1988 (mapas 12-14). Solamente a partir de 1991, inicia un proceso de apertura y liberalización política, en el marco de una transición desde un régimen autoritario, corporativo y de partido hegemónico, hacia un sistema multipartidista y plural, con elecciones cada vez más libres y competitivas. Dicha transformación estructural, que se aparenta a una verdadera revolución político-electoral, se observa en la gráfica siguiente, que permite ubicar la especificidad chiapaneca. Como en el resto del país, en esta entidad se produce un marcado declive del partido históricamente hegemónico, que se debilita y fragmenta gradualmente hasta perder el control del poder institucional. Pero, a diferencia de lo que se observa en el nivel nacional, aquí dicho proceso de crisis, descomposición y re-configuración política es singularmente tardío y abrupto, convulsivo y violento (gráfica 5).

⁵ Entrevista con Manuel Bolóm Vásquez, ex comisariado, ex regidor y ex comité de la CNC, Chempil, 30 de agosto del 2000.

Gráfica 5: ¿EL ÚLTIMO “GRANERO ELECTORAL” DEL PRI?



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE GOMEZ TAGLE (2001) E IFE (2012)

Hasta 1991, Chiapas se perfila como uno de los bastiones más sólidos del PRI en México. Entre 1979 y 1988, el partido hegemónico obtiene un promedio de 26 puntos porcentuales más que en el resto de la Federación. Incluso en 1988, cuando el país entra en plena efervescencia política, el PRI recibe el 90% de los votos válidos en Chiapas, es decir 39 puntos porcentuales más que a nivel federal (51%). Estos resultados excepcionales le valdrán a la entidad la reputación de ser el último “granero electoral” del PRI.

Solamente en 1994, la rebelión neo-zapatista pone de manifiesto una profunda crisis de las relaciones de poder locales. A partir de entonces, el tricolor se recupera aparentemente, en términos relativos, movilizando una parte superior de votos válidos a la que éste capta en el resto de la República. Pero esto se debe, en realidad, a una mayor tasa de abstencionismo, ya que la capacidad de movilización estructural del PRI (medida a través de su porcentaje de votos sobre el listado nominal) es sensiblemente inferior en Chiapas que en el resto del país (gráfica 5).

¿Cómo interpretar, en este contexto, los significados del voto durante las diversas etapas de la transición política, sin reducir al exceso la complejidad y pluralidad de motivaciones de los distintos electorados?

Una oferta política fragmentada, volátil y segmentada

Independientemente de la retórica partidista, en Chiapas la única organización que se parecía a un partido político fue por mucho tiempo el REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Pero éste funcionaba, en realidad, como el brazo electoral del Estado post-revolucionario: en lugar de asumir la capacitación de cuadros administrativos, la formación ideológica de militantes o la representación de los intereses de sus electores, el tricolor articulaba un conjunto heterogéneo de alianzas estratégicas con hombres fuertes del más diverso cuño.

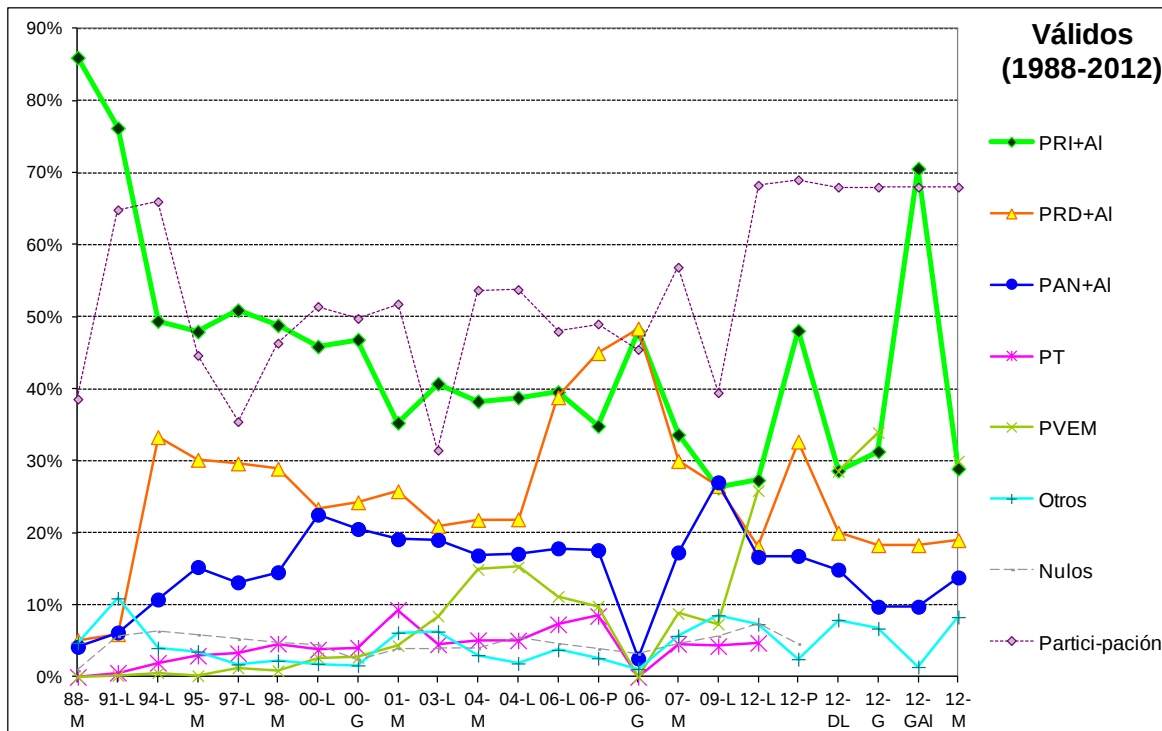
Estos famosos *caciques* actuaban como señores feudales, detentaban un poder ilimitado y lo ejercían sin contrapesos institucionales. En sus dominios respectivos gozaban de una gran autonomía, fundada en un pacto tácito que les garantizaba la impunidad o el apoyo puntual de las autoridades estatales y federales, a cambio de su lealtad política incondicional durante las crisis y los períodos electorales. A falta de estructuras partidistas y de mecanismos de control directo, el régimen priísta se apoyaba en una vasta red de intermediarios regionales y de pequeños jefes locales, así como en diversas organizaciones corporativas que le permitían captar y disciplinar, cooptar y regenerar extensas clientelas político-electorales. Ello le otorgó al sistema una innegable legitimidad popular, y una gran estabilidad. Hasta que el pacto se resquebrajó con la crisis del modelo posrevolucionario.

En Chiapas, las primeras fisuras de dicho pacto se vislumbran desde las elecciones de 1991. Pero es, sobre todo, el conflicto armado en 1994 que funge como un poderoso catalizador del cambio democrático. Entonces, la alianza táctica del EZLN con el candidato del PRD a la gubernatura del estado, permite canalizar las fuertes movilizaciones populares hacia la contienda electoral de agosto. No obstante, en un segundo tiempo la prolongación del conflicto tendrá un efecto inverso, que contribuye a frenar la transición democrática, bloqueándola inclusive en la zona de conflicto. A partir de 1995, los rebeldes se retiran del juego electoral y promueven el abstencionismo entre sus bases, boicoteando activamente el proceso electoral federal de 1997 y debilitando la frágil oposición partidista local. Por ello, habrá que esperar los comicios para gobernador del 20 de agosto del 2000 para ver surgir una amplia coalición opositora (PRD-PAN-PT-PVEM), cuyo triunfo desemboca finalmente en la primera alternancia pacífica del estado, con la elección del antiguo senador *priísta*, Pablo Salazar Mendiguchía.

Como se observa en la gráfica 6, cabe distinguir al menos cuatro fases en la transición política chiapaneca: (1) Hasta fines de los años ochenta, se trata en efecto de un “*granero electoral*” muy rentable para el PRI, cuya hegemonía se traduce en una capacidad de movilización real. (2) Sin embargo, esta situación cambia drásticamente entre 1991 y 1994, cuando se produce la caída del antiguo partido hegemónico. (3) Entre 1995 y 1997, la apertura democrática entra en crisis, antes de desembocar en una serie de alternancias pacíficas entre 1998 y 2000. (4) Finalmente, a partir de 2001 se inicia un nuevo ciclo electoral, caracterizado por el debilitamiento y la descomposición crecientes de todos los partidos políticos, que se benefician puntualmente del declive del PRI pero no logran articularse permanentemente ni formular proyectos alternativos consistentes (gráfica 6).

En efecto, las alianzas coyunturales entre el PRI y el PVEM en las elecciones para gobernador de 2006, así como entre el PRI, el PVEM y el PANAL en 2012, que compiten en ambas ocasiones contra coaliciones conformadas por el resto de los partidos restantes, dan la apariencia de una fuerte polarización en 2006 y de una impresionante concentración del voto en 2012. Pero en realidad, ambas contiendas ocultan una acentuada y creciente fragmentación partidista.

Gráfica 6: Las transiciones políticas en Chiapas (1988-2012)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BANAMEX-ACCIVAL (2001) E IFE (2012)

Las últimas elecciones generales, en las que los comicios federales coincidieron por vez primera con el conjunto de los comicios locales, reflejan la exacerbación de este proceso prolongado de pulverización de la oferta política. A primera vista, el joven candidato a de la coalición PRI-PVEM-PANAL arrasó en las elecciones para gobernador, sumando bajo su nombre más del 70% de los sufragios válidos, en unos comicios por lo demás extraordinariamente participativos (que alcanzaron una tasa inusual de 68%). No obstante, detrás del efecto de arrastre personal del famoso “güero Velasco”, se encuentra en realidad una descomposición avanzada del sistema partidista. Los conflictos personales que enfrentaron a los distintos aspirantes a la candidatura de la alianza tricolor se saldaron por una situación paradójica, en la que los principales cargos de elección terminaron siendo ocupados por candidatos externos, sin afiliación formal al PRI. Independientemente de sus orígenes familiares, de su cercanía y amistad con el antiguo gobernador Salazar Mendiguchía, el mismo senador Velasco nunca militó en el PRI, sino que siempre fungió como el líder del PVEM en Chiapas.

Por ello, cabe subrayar que, dentro de la alianza ganadora, el Verde Ecologista por sí solo aportó 33.9% de los 70.6% que sumó Velasco, es decir una parte sensiblemente superior a los aportes respectivos de sus aliados del PRI (31.3%) y del PANAL (5.3%). Pero el partido verde no solamente rebasó al tricolor en los comicios para gobernador, sino que también conquistó un número superior de alcaldes y diputados locales, ya que ganó en un mayor número de municipios y distritos en los que los dos partidos no compitieron como alianza. Así, la victoria aparentemente hegemónica del “güero Velasco” se debe, en realidad, a la fragmentación extrema del sistema de partidos, que alcanzó por vez primera un número efectivo de 4.8 partidos electorales relevantes en las legislativas federales, lo que exacerbó el carácter personalista de la campaña por la gubernatura del estado.

En otras palabras, resulta engañoso conferirle alguna coherencia ideológica a los sectores que conforman la nebulosa de grupos e intereses que se reivindica del PRI. Más que de un partido disciplinado, se trata de un mosaico de alianzas corporativas más o menos imbricadas con las distintas estructuras de la administración pública. A raíz de la doble alternancia del año 2000, y del acceso al poder de un grupo que gobernó bajo otras siglas partidistas hasta 2012, el PRI chiapaneco inició un lento proceso de reconversión, organizativa y estratégica más que ideológica. Sin embargo, queda cada vez menos claro quienes pertenecen en la actualidad al partido, en un estado bajo el control del primer gobernador proveniente de las filas del Partido Verde Ecologista.

Pero tampoco resulta fácil situar sobre una escala ideológica coherente los múltiples grupos, facciones y organizaciones sociales o “para-políticas” que establecen alianzas, más o menos transitorias, con los distintos partidos que se fueron formando desde la oposición. En el nivel municipal y local, estos últimos sirven a menudo simplemente de “presta-nombre”, ya que hasta 2012 la ley electoral prohibía la postulación de candidaturas independientes.

A este respecto, el caso del Partido de la Revolución Democrática es paradigmático. Entre 1991 y 1994, el electorado de este partido se multiplica súbitamente por siete en Chiapas, al pasar de solamente 50 mil a más de 334 mil sufragios. Este incremento exponencial se explica en parte porque el PRD se convierte en la principal alternativa al antiguo partido hegemónico, capitalizando así el declive de este último y recuperando “por defecto” una parte importante de sus antiguos electores. Pero dicha progresión no es durable, ya que en lugar de apoyarse sobre el desarrollo de estructuras partidistas y militantes, remite más bien a una serie de alianzas inestables con grupos y organizaciones de la más diversa índole. Esta extraordinaria heterogeneidad contribuye a explicar la fuerte volatilidad de sus sufragios (gráfica 6). Por ello, tampoco queda claro si el PRD chiapaneco puede ser analizado como un partido, o bien como un conjunto de alianzas personalistas, cambiantes y heteróclitas.

La situación del Partido Acción Nacional fue inicialmente distinta. Desde 1991, éste dispone de una sólida implantación en una decena de municipios y ciudades de la Costa y el Centro del estado, lo que le ha permitido crecer constantemente hasta 2000, para consolidarse con alrededor del 18% de las preferencias electorales. Como lo veremos más adelante, su presencia es mucho más frágil y reciente en las zonas rurales e indígenas, donde la composición sociológica e ideológica de su electorado dista mucho de corresponder a la que tradicionalmente caracterizó a este viejo partido de la derecha católica a nivel nacional. Asimismo, cabe recordar que algunos grupos de disidentes indígenas han recurrido al blanquiazul desde principios de los años setenta, incluso en municipios tzotziles tan tradicionalistas como San Juan Chamula y Zinacantán.

En cuanto a las otras fuerzas políticas, éstas captan puntualmente electores descontentos que les permiten acceder a algunas diputaciones plurinominales o a presidencias municipales, pero carecen, con contadas excepciones, de bases organizadas y estructuradas territorialmente. Detrás de las siglas que colorean las papeletas de voto, se pueden encontrar toda clase de candidatos: dirigentes de organizaciones sociales más o menos influyentes, pero también individuos aislados que lograron convencer a los cuadros regionales de tal o cual partido que estaban en condiciones de aportarles sufragios, a cambio de subvenciones para costear “campañas electorales” más o menos ficticias. En otros casos, facciones locales poderosas pueden verse obligadas a renegociar sus alianzas, otorgándole “sus” sufragios a otros grupos y cambiando, de esa manera, “de partido”. Es en este contexto que conviene interpretar una parte de la creciente volatilidad electoral que se observa en el nivel de los municipios y las secciones electorales.

A ello, cabe añadir la falta de cuadros profesionales y la debilidad de las estructuras logísticas de los partidos, particularmente en los municipios rurales e indígenas. Con la notable excepción de los candidatos del PRI, raros son los que logran organizar verdaderas campañas electorales, sin hablar de actividades genuinas de formación ideológica o difusión programática. En resumidas cuentas, la oferta política en Chiapas, más que remitir a proyectos partidistas o a programas ideológicos consistentes, tiene que ser analizada en términos de alianzas estratégicas, establecidas conforme a lealtades faccionales más o menos estructuradas, pero renegociadas constantemente en una lucha cada vez más competida por el control de los recursos materiales y políticos. A su vez, es indispensable matizar el significado de las preferencias electorales.

Del sufragio “comunitario” y corporativo al voto faccional e individualizado

Como en otras latitudes, el multipartidismo y el sufragio adquieren una multiplicidad de significados en Chiapas. Para captar la diversidad antropológica y relacional del comportamiento electoral, retomaremos las tres formas ideal-típicas de elección propuestas por Olivier Ihl (2002), que ya discutimos en la parte teórica de este trabajo: el *voto comunitario*, el *voto de intercambio* y el *voto de opinión*.

Como veremos, para un gran número de electores chiapanecos el sufragio todavía no es el resultado de una decisión individual, sino más bien de una deliberación colectiva (en ocasiones, incluso pública), que reafirma la pertenencia a una comunidad. Con todo, dicha pertenencia tampoco puede aspirar a la unanimidad, sino que tiene que acomodarse de un número creciente de lealtades cruzadas que estructuran y dividen a las comunidades rurales. Ello se refleja en la transición de un sufragio cautivo y corporativo, hacia un voto faccional y cada vez más plural.

Por otra parte, las elecciones son momentos privilegiados para (re-)negociar todo tipo de ventajas y servicios (individuales o colectivos) a cambio de sufragios. Pero como consecuencia del declive del PRI, ningún partido dispone ya del monopolio de dichas transacciones en Chiapas, y muchos “clientes”, ahora protegidos por el secreto del voto, aceptan “adelantos” sin cumplir necesariamente “el contrato” el día de la elección.

A su vez, la fragmentación y volatilidad crecientes de los electorados revelan la aparición de un voto individualizado de opinión que se expresa, particularmente, mediante la afirmación más reciente de un voto diferenciado y “dividido” en elecciones simultáneas de distintos niveles políticos (por ejemplo, en las presidenciales y legislativas concomitantes de 1994, 2000, 2006 y 2012).

Destaquemos, finalmente, que el voto libre y secreto aún es una práctica muy reciente en Chiapas, que todavía es el objeto de un aprendizaje plural y desigual. Es en este contexto de apropiación de una “tecnología” de origen externo –pero con múltiples usos internos– que vamos a estudiar el acto electoral.

En resumen, las adscripciones partidistas en Chiapas tienen significados reales en la vida política local, comunitaria y regional. Éstas son utilizadas de manera recurrente para referirse a facciones y a conflictos relevantes, contribuyendo a situarlos con respecto a los gobiernos local y federal, así como frente a otros grupos de poder que actúan a nivel regional. Sin embargo, no podemos conferirles un contenido ideológico consistente, ni asociarlas con los intereses que representan los partidos políticos a nivel nacional. Muchas preferencias electorales pueden analizarse en términos de alianzas estratégicas, establecidas en función de pertenencias faccionales

estructuradas, pero constantemente renegociadas en una disputa cada vez más competida por el control de los recursos económicos y políticos. ¿Cómo rastrear ahora, a la luz de estas consideraciones históricas, teóricas y conceptuales, las distintas dimensiones empíricas del voto?

B. En las fronteras de la democracia: explorando las dimensiones antropológicas del voto

Para captar las distintas dimensiones empíricas del voto, analicemos las tendencias electorales desagregadas en el nivel micro-sociológico de los 111 municipios y de las 1 929 secciones que conforman la geografía político-electoral de Chiapas. Al revelar la existencia de comunidades y localidades con comportamientos extremos, éstas permiten detectar diversos procesos de diferenciación territorial de la participación ciudadana y de los electorados partidistas, así como de descomposición y fragmentación, volatilidad e “individualización” del voto. Pero lo más interesante es que estas prácticas geográficamente diferenciadas de ejercer el sufragio, además de vincularse con las bases territoriales de los distintos partidos, también se relacionan significativamente con otras desigualdades socioeconómicas y con el clivaje urbano-rural. Por ello, cabe indagar en la evolución y el perfil de la participación electoral, así como en los significados más profundos de los resultados electorales disponibles desde 1973.

La desigualdad en el ejercicio del sufragio “universal” empieza con la calidad desigual de la participación electoral: hasta 1988, los resultados no siempre reflejaban comportamientos electorales individuales, sino que podían indicar prácticas diversas de control autoritario y corporativo, cuando no manipulaciones descaradas de los mismos datos agregados. Y pese a los avances considerables de la democratización chiapaneca en los noventa, aún persisten contextos territoriales en los que no todos los ciudadanos tienen el derecho efectivo de votar en secrecía y libertad, ya sea porque sus sufragios no son contados de una manera transparente e imparcial, ya sea porque éstos sufren las presiones de un entorno poco propicio para la expresión de sus diferencias políticas. Pero incluso cuando existen condiciones institucionales que garantizan formalmente la libertad y el pluralismo de la competición electoral, el multipartidismo no es necesariamente sinónimo de comportamientos políticos individuales, sino que también puede apoyarse sobre lealtades corporativas y/o sobre diversas lógicas de intercambio colectivo, de tipo faccional o clientelar.

Como es bien sabido, las elecciones transparentes, libres y competitivas se caracterizan por un alto grado de precisión y confiabilidad, en la medida en la que se organizan con medios técnicos importantes y bajo un estrecho control, tanto de la ciudadanía como del conjunto de las fuerzas políticas contendientes. En el caso de México, los contenidos y la confiabilidad de los datos se relacionan así estrechamente con el grado de competitividad de los procesos electorales, conociendo un salto cualitativo con la creación y ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1990 y 1996.

De ahí el interés de analizar los resultados electorales disponibles para Chiapas a la luz de este parte-aguas histórico. Entre 1973 y 1988, los datos solamente existen para el nivel de los 110 municipios, y sufren de limitaciones patentes que contrastan con la calidad de los resultados que empieza a producir el IFE a partir de 1991, en el nivel de las 1 929 secciones electorales. Pero independientemente del nivel de desagregación y de la heterogeneidad de su calidad, ambas series de datos aportan información sumamente valiosa sobre la distribución geográfica y el perfil socio-demográfico de la participación electoral, y sobre los significados históricos cambiantes del voto en la escala local.

Las bases socio-territoriales de la movilización corporativa (1973-1988)

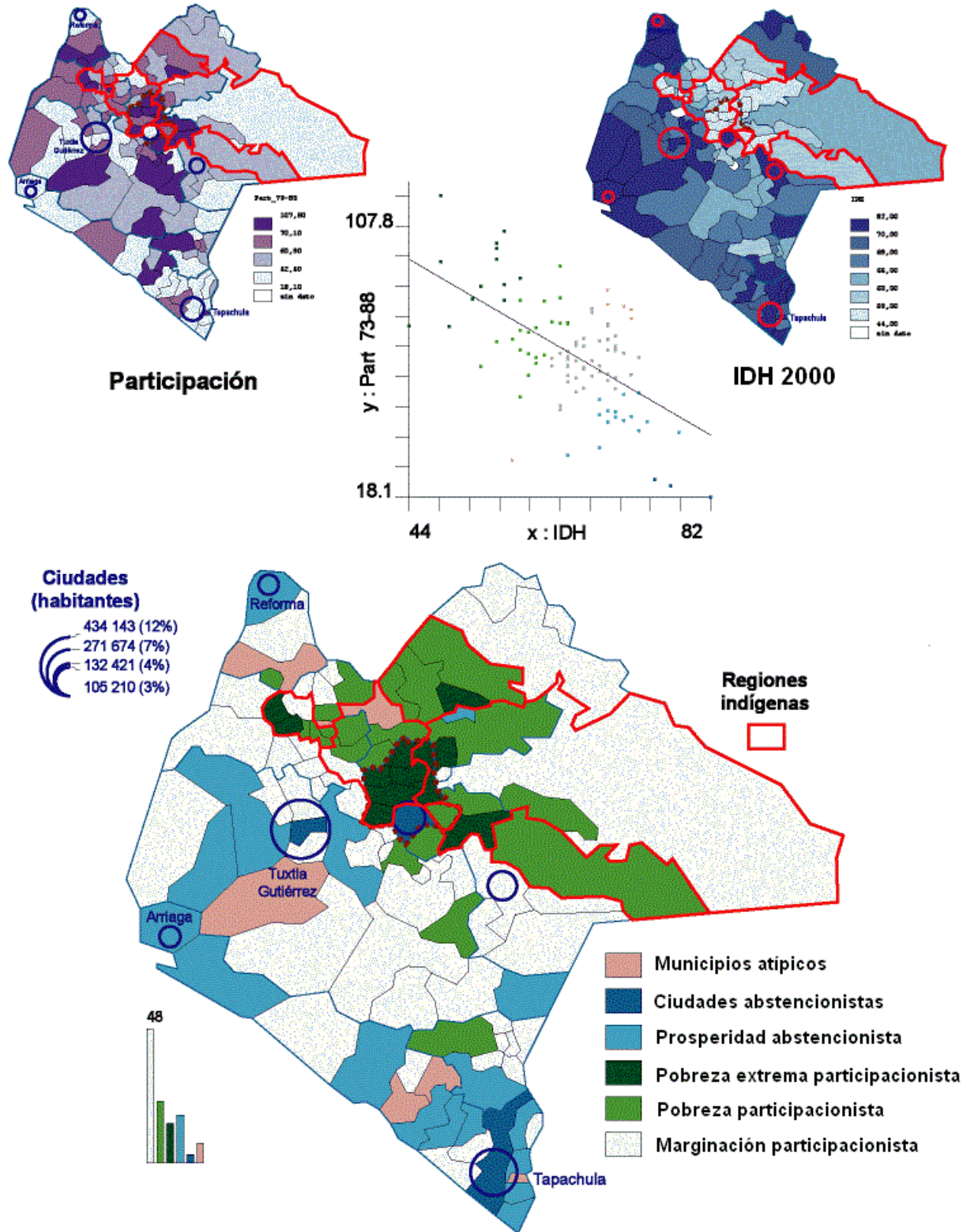
Como lo ilustran los mapas 12, 13 y 14, las relaciones entre las tasas de la participación electoral y los niveles de desarrollo socio-económico son de una claridad impactante. Es precisamente en las reservas históricas de mano de obra barata –es decir en las regiones indígenas alteñas y norteñas del estado, así como en los municipios tzeltales y tojolabales que se extienden hacia la Selva lacandona– donde se observa la movilización más masiva de la población durante las jornadas electorales. Como lo revelan los promedios agregados de estas dos categorías de municipios (en color verde y verde oscuro en el mapa 14), dicha movilización beneficia casi exclusivamente al PRI (que obtiene en promedio 83% y 65% de la lista nominal y la cuasi totalidad de los votos válidos, cuando no capta un sufragio unánime o rebasa incluso la población en edad de votar), y se caracteriza por un perfil eminentemente subdesarrollado y rural (se trata de las regiones más marginadas de la entidad, y toda la República mexicana).

De forma exactamente inversa, las tres principales ciudades y los municipios con mayores niveles de desarrollo socio-económico se caracterizan por tasas sorprendentemente elevadas de abstencionismo, cuyos promedios se sitúan entre 76% y 88% de la población inscrita en Tuxtla Gutierrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. En estas dos categorías de municipios el PAN y otros partidos de oposición registran puntualmente alguna presencia, aunque ello también se observa en algunos municipios rezagados y rurales (Las Margaritas, Chamula y Zinacantán). En realidad, lo que distingue a los electorados urbanos entre 1973 y 1988 es, por lo tanto, una abstención masiva y consistente, que se relaciona probablemente con una actitud difusa de desafección hacia el partido gobernante. Como lo veremos, es precisamente en estos centros urbanos y en los municipios con mayores niveles de desarrollo que se consolidará el PAN a partir de 1991.

Por lo pronto, cabe destacar la relación casi perfecta entre los índices de marginación y las tasas municipales de participación electoral. Ésta se refleja en un coeficiente negativo de correlación de -0.586 entre ambas, que explica por sí sola 34% de la varianza total. Pero la relación es, en realidad, todavía más fuerte. Con la excepción de los cinco municipios en color rosado (Huituipan, cuya elevada marginación se asocia con un elevado abstencionismo; Acapetagua, Pichucalco, Escuintla, Metapa, Villaflores y Tapilula, cuya prosperidad se asocia en cambio con mayores promedios municipales de participación electoral), los 103 municipios restantes se sitúan a lo largo de una línea de regresión cuyo coeficiente se eleva a +0.703, por lo que explica por sí sola la mitad de la varianza total (mapas 12-14).

En otras palabras, hemos encontrado un tipo cuasi ideal de una situación corporativa y autoritaria, en la que la participación electoral se asocia estrecha y positivamente con el subdesarrollo en beneficio directo del partido gobernante. En este contexto, la oposición al régimen se traduce predominantemente en un abstencionismo masivo y consistente, a contracorriente de la expectativa teórica básica de la teoría de la modernización (que postula una relación positiva entre el nivel de integración socioeconómica, y el tipo de interés que motiva una mayor participación electoral autónoma e independiente entre los electorados con mayores recursos y autonomía). La fuerza de dicha relación atípica se debe, en parte, a “votaciones” masivas de tipo gregario, corporativo y clientelar; pero también contiene comportamientos abiertamente irregulares y fraudulentos, en contextos en los que el relleno de urnas se sustituye públicamente al ejercicio formal del sufragio universal. Incluso así, la oposición no está totalmente ausente de la vida político-electoral. Con las transformaciones inducidas por la modernización caótica de la sociedad chiapaneca, las relaciones de poder entran en crisis.

Mapas 12, 13 y 14: La relación entre el desarrollo y la participación electoral (1973-1988)



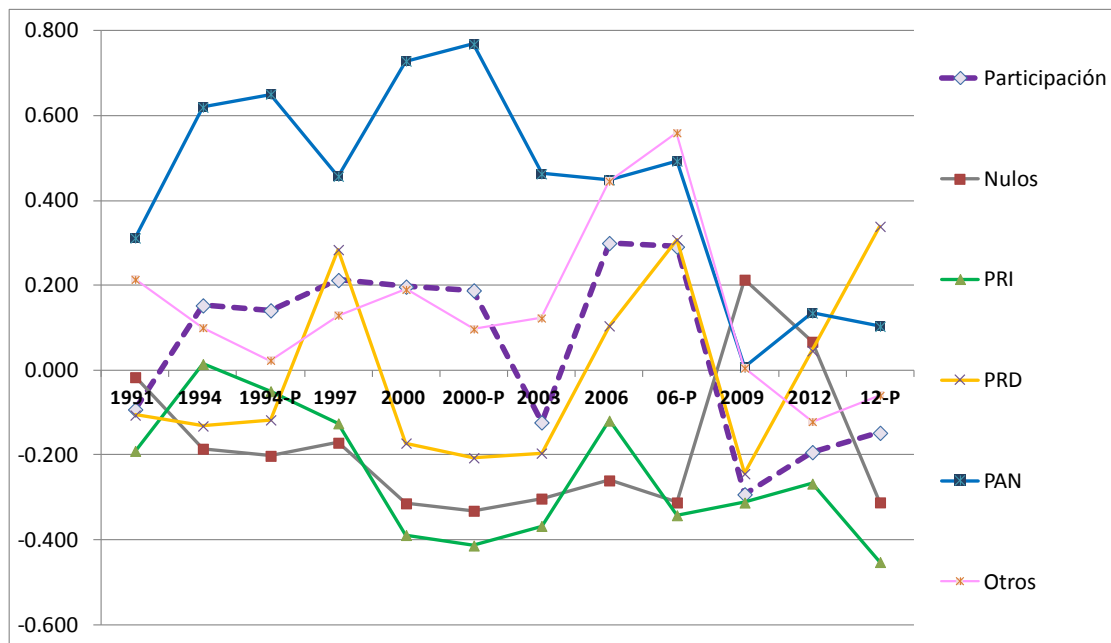
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BANAMEX-ACCIVAL Y PNUD (2004)

El perfil socio-territorial de la participación electoral multipartidista (1991-2012)

Con la creación del IFE, a principios de los noventa, el perfil territorial y socio-demográfico de la participación electoral cambia, en un contexto de configuración de un sistema multipartidista. Desde 1991, estas transformaciones pueden ser observadas en el nivel micro-sociológico de las 1 929 secciones electorales que integran la nueva geografía político-institucional.⁶ Este nivel de análisis permite observar las dinámicas geográficas de los distintos componentes político-partidistas que conforman, en su agregado, la participación electoral, por lo que aportan muchas luces sobre la evolución cambiante del perfil territorial, antropológico y socio-económico del voto.

En franca ruptura con el período 1973-1988, la década de los noventa se caracteriza por una relación positiva, significativa y consistente entre las tasas seccionales de movilización ciudadana y sus niveles de desarrollo material. Pero curiosamente, esta tendencia no se mantiene tras la alternancia, sino que se vuelve sorprendentemente volátil: en las legislativas intermedias de 2003, se invierte puntualmente, antes de reafirmarse con fuerza en las generales de 2006, de invertirse de nuevo en las legislativas intermedias de 2009 y de mantenerse negativa en las últimas elecciones generales de 2012 (gráfica 7).

Gráfica 7: Evolución de los coeficientes de correlación entre las tasas de desarrollo socio-económico y los promedios del voto en el nivel de las 1929 secciones electorales (1991-2012)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Como también se observa en la gráfica 7, la tendencia de los coeficiente de correlación de la participación electoral agregada coincide estrechamente con la evolución de los coeficientes del voto panista. En efecto, son las estructuras territoriales de los electorados blanquiazules las que le confieren a la participación un perfil más desarrollado y urbano entre 1994 y 2006, antes de sufrir un marcado proceso de fragmentación geográfica en 2009 y 2012. En cambio, los electorados tricolores se caracterizan por un perfil socio-económico inverso en el nivel de las secciones, mucho

⁶ En el ámbito rural, éstas contienen en promedio entre 642 y 1 269 electores potenciales entre 1991 y 2012, situándose alrededor de 794 y 1 925 inscritos en los contextos urbanos.

más rural y marginado, a la manera de las tasas de votos anulados que se relacionan directa y negativamente con las tasas de analfabetismo, monolingüismo y marginación (con la notable excepción de 2009, cuando el movimiento anulista perturba puntualmente dicha relación).

En cuanto a los electorados del PRD, éstos son mucho más heterogéneos y volátiles. Por lo general, se caracterizan por un mayor arraigo en las secciones de mayor rezago socio-económico, pero tanto en las legislativas intermedias de 1997 como en las presidenciales de 2006 y 2012, este perfil se invierte coyunturalmente para adquirir un marcado sesgo desarrollado, lo que se explica por los efectos de arrastre personal de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador (que movilizan sobre todo en secciones eminentemente urbanas). Finalmente, los electorados que movilizan los otros partidos tienen un perfil más desarrollado desde 1991 y particularmente en 2006; sin embargo, éste se desborra en 2009 y se invierte en 2012, adquiriendo incluso un sesgo de mayor marginación socio-económica (gráfica 7).

Para visualizar y entender lo que significan concretamente estas tendencias abstractas de las correlaciones estadísticas, observemos ahora la evolución de las estructuras territoriales de los distintos electorados partidistas, a través del análisis de una serie de mapas sintéticos contruidos mediante análisis multi-variables de clasificación jerárquica ascendiente.⁷ En esta escala micro-sociológica, las dinámicas de la fragmentación creciente del antiguo régimen son particularmente marcadas y acentuadas.

En primer lugar, se percibe claramente el carácter marginado y rural de los últimos reductos priístas, que se concentran principalmente en torno a cinco polos, situados en la frontera con Oaxaca (en los municipios de Sunuapa, Ocozocuatla y Tecpatán), en Los Altos (Chamula, Mitontic, Aldama, Santiago El Pinar y Oxchuc), en la Selva (algunas microrregiones de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano), en el Valle de Comitán (Tzimol y Comitán), así como en la Sierra Madre (Siltepec, Bellavista, Bejucal de Ocampo, Motozintla y Frontera Comalapa). Asimismo, el tricolor resiste y hasta se recupera notablemente en muchas otras microrregiones rurales e indígenas (colores verde y verde oscuro), pero brilla por su debilidad o ausencia estructurales en los principales centros urbanos (en color rojo), en el Valle Central y en la Costa del Pacífico (en color amarillo claro), con muy contadas excepciones (mapa 15).

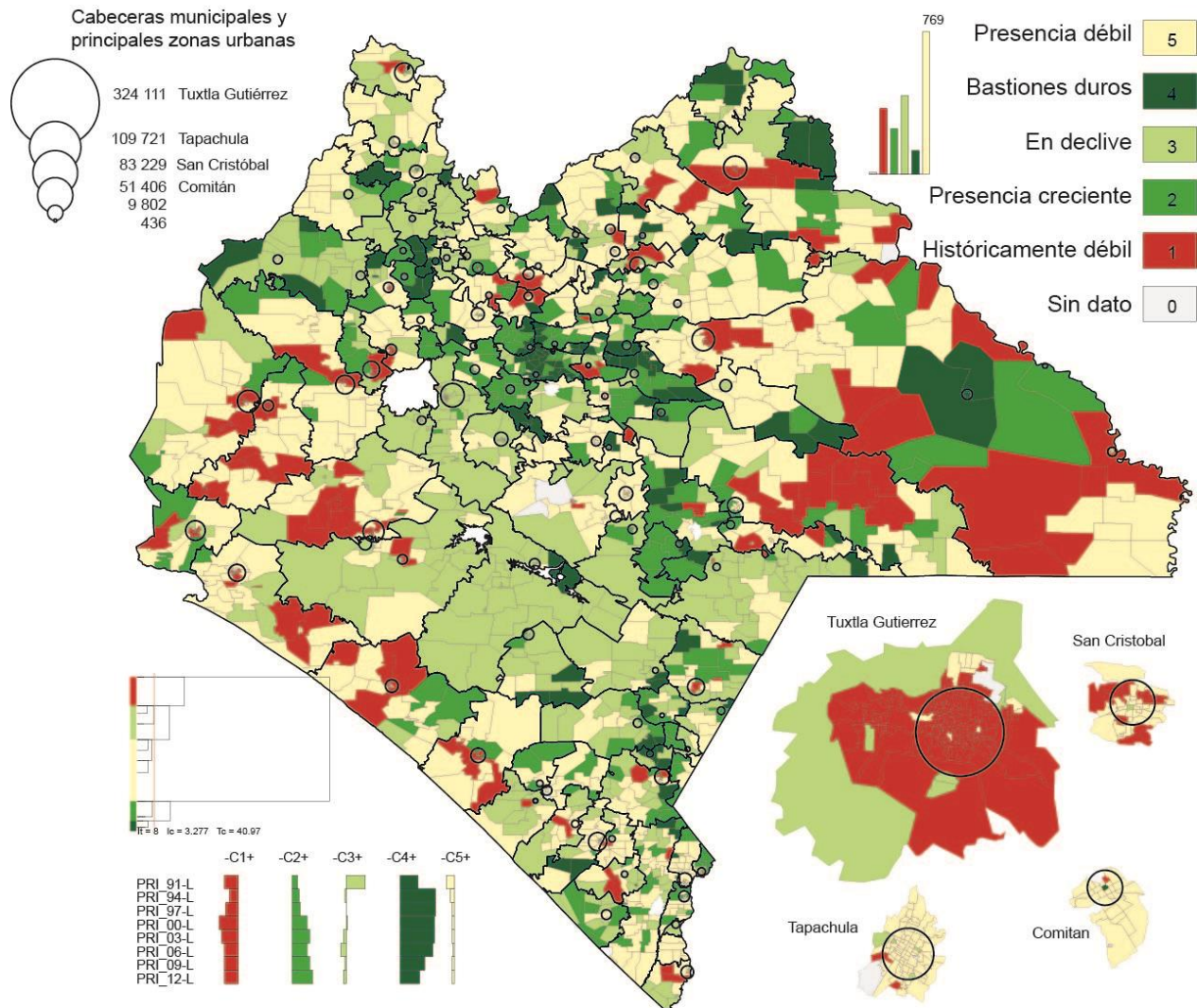
De manera justamente inversa, el Partido Acción Nacional se distingue por una temprana y sostenida presencia en 226 secciones, situadas en torno a cinco polos de expansión: sus principales bastiones se ubican en la Costa del Pacífico (Arriaga y Tonalá, Huixtla y Mapastepec) y en la capital del estado (Tuxtla Gutiérrez), así como en el Noreste (Juárez, Pichucalco y Francisco León) y Noroeste de la entidad (La Libertad). Es a partir de la conquista de estas alcaldías que el blanquiazul se consolida y se expande hasta 2006, sobre todo en la Costa, el Norte y el Valle Central (mapa 16).

Sin embargo, dicha estructuración territorial cambia significativamente después de la elección de Felipe Calderón en 2006. Hasta entonces, Acción Nacional brillaba por su ausencia en las regiones más rezagadas e indígenas del estado. Pero a partir de 2007, una nueva estrategia orientada hacia el campo le permite crecer en 463 secciones rurales y marginadas (en color rosado), lo que se refleja ese mismo año en la conquista de la presidencia municipal de Ocosingo, así como

⁷ Este método estadístico permite minimizar la varianza interna de cada categoría (intra-grupal), maximizando a la vez la varianza entre categorías (inter-grupal).

en una expansión notable en muchas secciones rurales de la Costa, el Valle Central y el Norte, en las que no había logrado arraigarse con anterioridad.

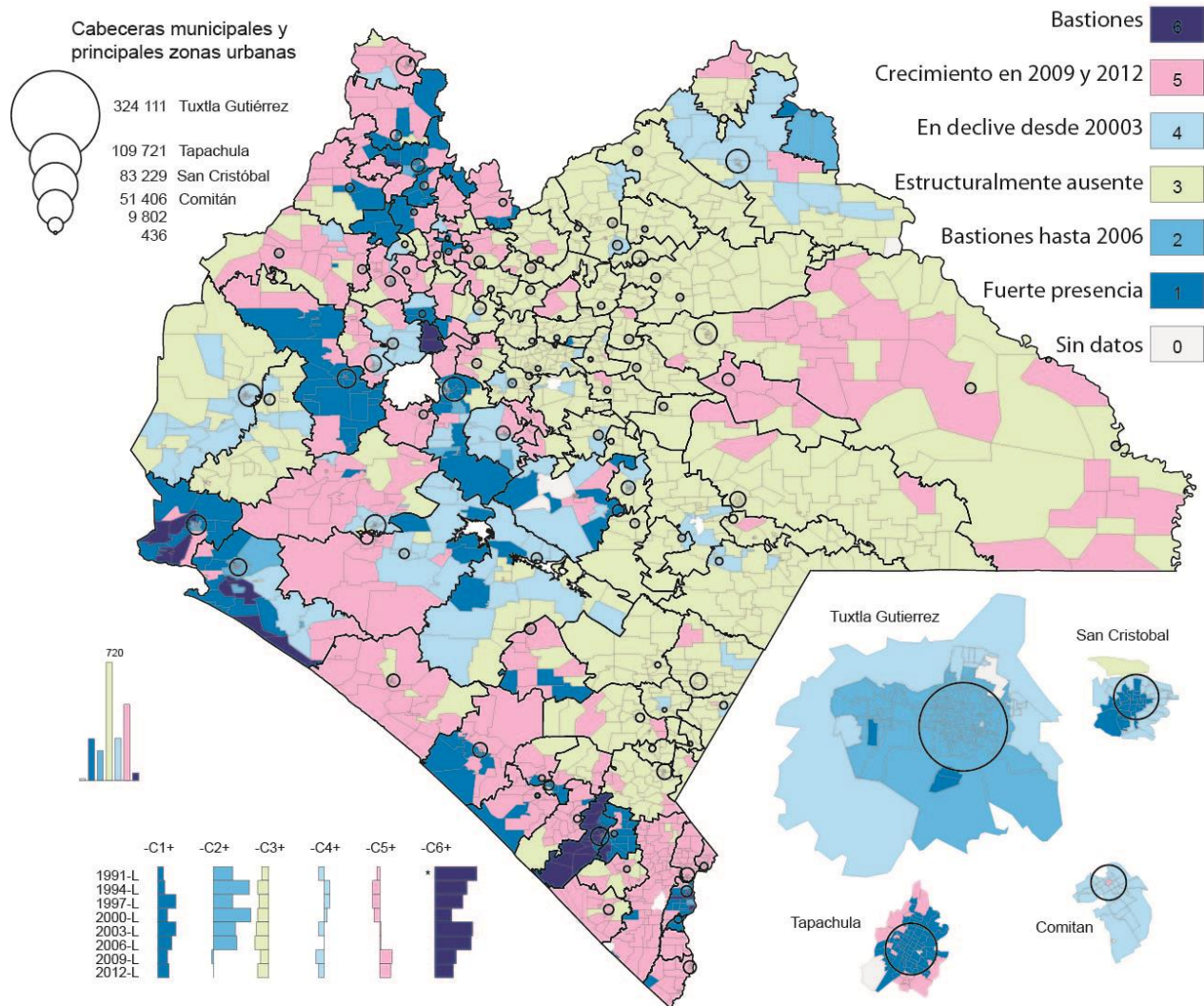
Mapa 15: Las bases territoriales del PRI (secciones, 1991-2012)



Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

Al mismo tiempo, el PAN empieza a debilitarse en 181 secciones de sus bastiones urbanos tradicionales, situados fundamentalmente en Tuxtla Gutierrez y La Libertad, pero también en las cabeceras de Arriaga y Tonalá (en celeste oscuro). Como consecuencia de estas dos tendencias – de expansión hacia nuevas zonas rurales de elevada marginación, y de declive relativo en sus bastiones urbanos tradicionales– el perfil de mayor desarrollo que caracterizaba al blanquiazul entre 1991 y 2006 se debilita notablemente, lo que explica en buena parte porqué la participación electoral también deja de caracterizarse por una relación positiva con el desarrollo humano (mapa 16).

Mapa 16: Las bases territoriales del PAN (1991-2012)



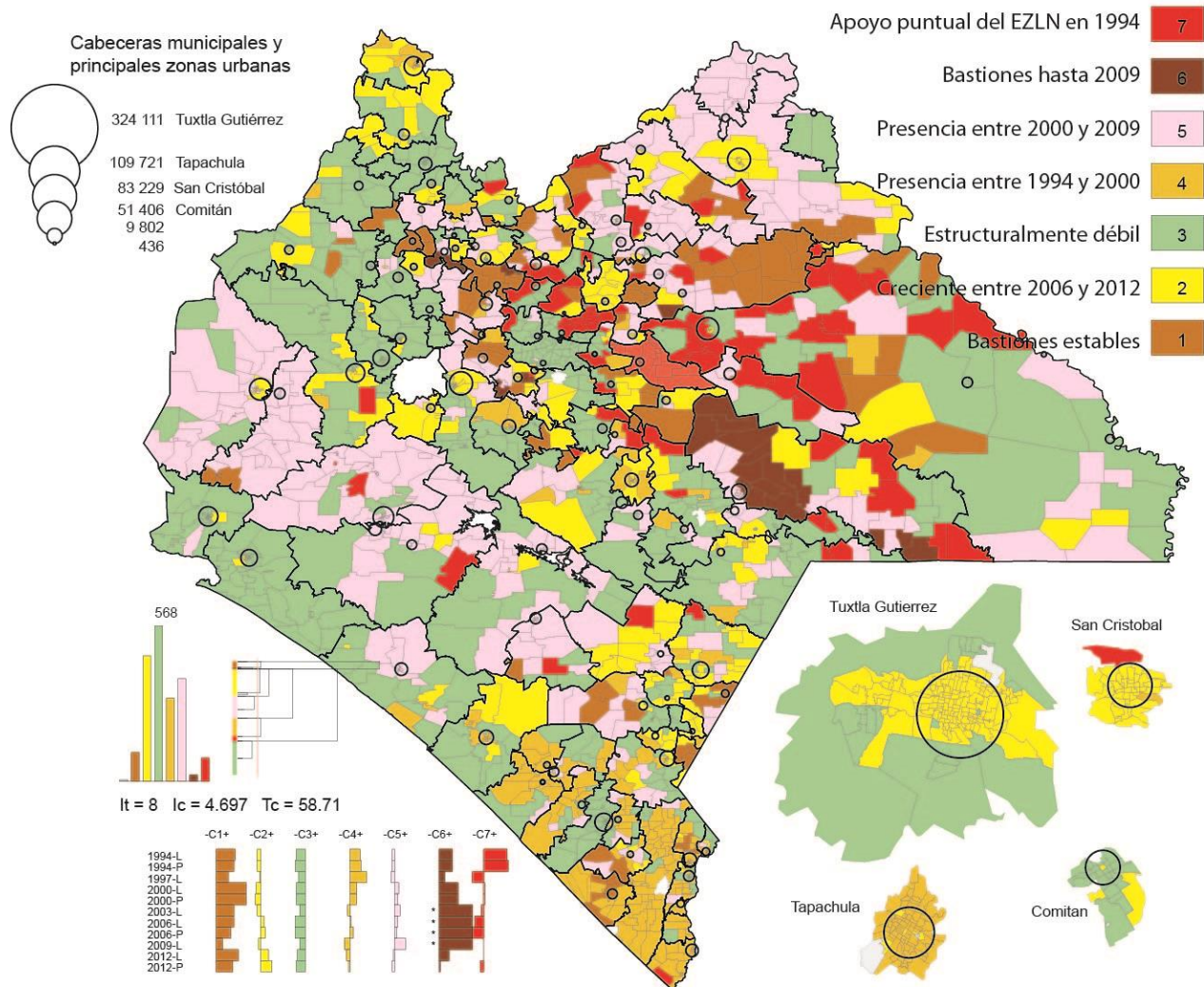
Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

A diferencia del blanquiazul y del tricolor, las bases territoriales del PRD son mucho más heterogéneas, dispersas y volátiles. Con la excepción de sus 130 bastiones, que se sitúan en las zonas históricas de influencia de la CIOAC en La Selva (Las Margaritas) y en varios municipios mestizos e indígenas norteños (Huituipán, Simojovel, Jitotol, Bochil, Soyoló e Ixtapa), así como tzeltales (Chilón y Sitalá) y zoques (Pantepec, Tapalapa, Ocotepec y Francisco León), éstas se caracterizan por tendencias muy cambiantes, de afirmación y declive en la Sierra y en el Sur de la Costa (incluyendo la misma Tapachula), o de expansión más coyuntural y/o reciente en otras microrregiones indígenas y del Valle Central (mapa 17).

Entre las categorías más volátiles, destacan dos tipos de situaciones. En 86 secciones, la afirmación del PRD es exponencial en 1994 (50% de los inscritos) pero desaparece inmediatamente desde 1997 (2.9% de los inscritos). Dicha volatilidad extrema se relaciona con las consignas de voto de organizaciones como el EZLN, que apoyan la candidatura a gobernador de Amado Avendaño en 1994 pero llaman a la abstención desde 1995. La segunda situación es igualmente interesante y caracteriza 459 secciones que se concentran claramente en las cabeceras municipales y en los principales centros urbanos del estado (incluyendo Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de

Las Casas). Aquí, el PRD no cuenta con bases estructurales, pero AMLO obtiene un número inusual de votos en las elecciones de 2006 y 2012, lo que refleja su capacidad de atraer este tipo de electorados más autónomos y descontentos (mapa 17).

Mapa 17: Las bases territoriales del PRD (1994-2012)



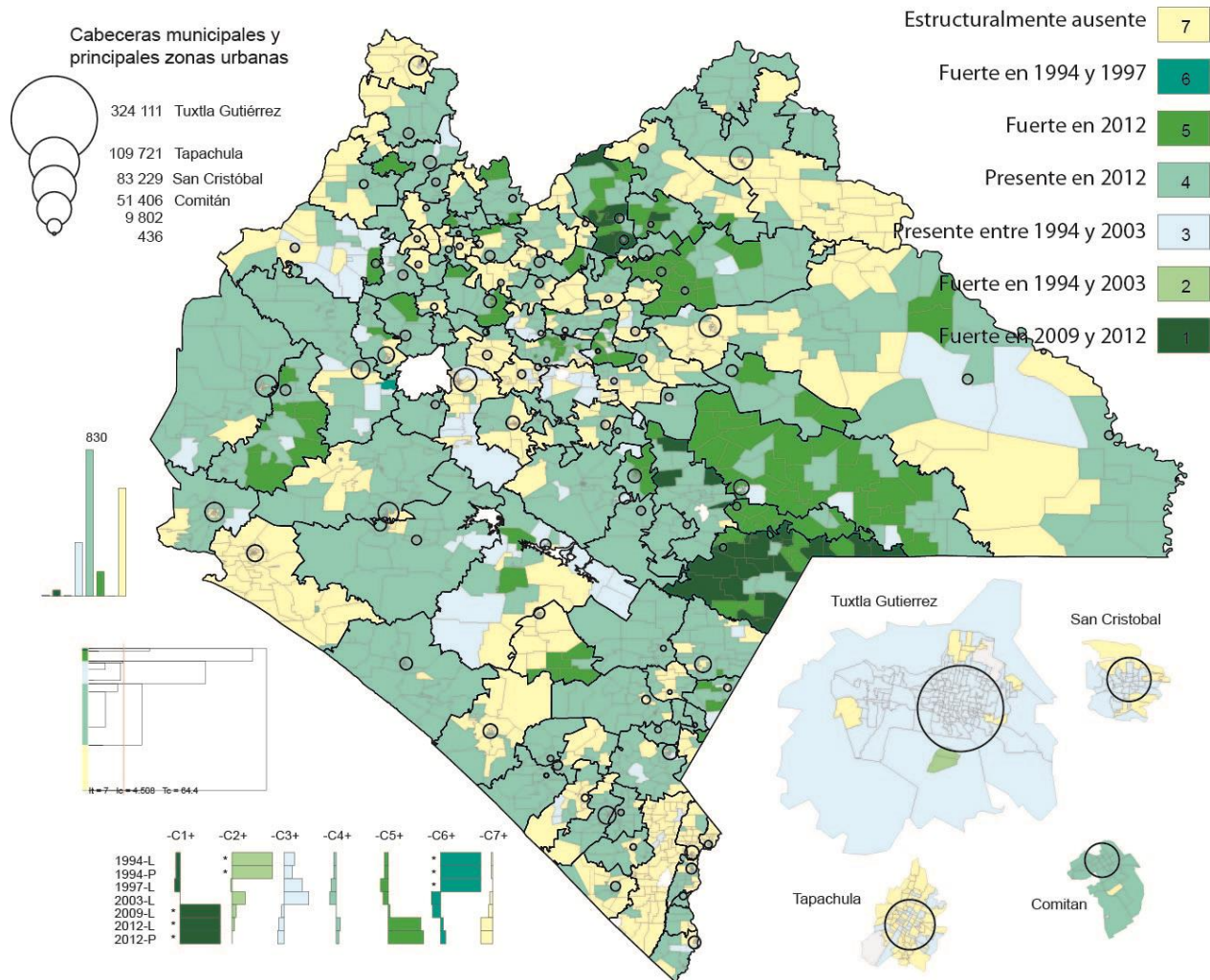
Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

En otras palabras, el partido del Sol Azteca tiene globalmente mayor éxito en las zonas marginadas y es más débil en los polos urbanos, pero dicho perfil puede invertirse coyunturalmente cuando alianzas específicas con organizaciones sociales influyentes, o candidatos populares y carismáticos (como Amado Avendaño en 1994, o López Obrador en 2006 y 2012) pueden ejercer efectos notables de arrastre personal en las áreas urbanas de mayor desarrollo socio-económico (mapa 17).

En cuanto a los otros partidos políticos, hasta 2009 éstos tienden a concentrarse en las secciones más urbanas y desarrolladas del estado, pero se caracterizan sobre todo por una muy elevada volatilidad, relacionada con el carácter coyuntural de sus éxitos en los distintos años y contextos municipales. Entre ellos, el PVEM merece un análisis aparte, muy útil para entender cómo esta pequeña fuerza a primera vista insignificante, logró implantarse y crecer paulatinamente mediante una serie de alianzas cruzadas con la totalidad de los partidos presentes en la entidad,

antes de desplazar al mismo PRI del primer lugar en las elecciones para gobernador, diputados locales y alcaldes de julio de 2012.

Mapa 18: Las bases territoriales del PVEM (1994-2012)



Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

Hasta 2006, el Verde Ecologista contó con un electorado sumamente modesto, que se concentraba en algunas secciones de las cabeceras de algunos municipios contados, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, a partir de 2009 sus estructuras territoriales cambian drásticamente. Primero, gracias a los éxitos sorprendentes que obtiene en 34 secciones de La Trinitaria, Comitán, Tila y Tumbalá. Luego, el Verde Ecologista se extiende con una fuerza sorprendente hacia algunos municipios colindantes (Las Margaritas, Altamirano, Chilón, etc.), al mismo tiempo que conoce un crecimiento generalizado en muchas zonas rurales a lo largo y ancho del estado 2012, sin penetrar significativamente en las cabeceras municipales (que permanecen en amarillo).

En su conjunto, estos mapas sintéticos permiten visualizar las principales tendencias del voto en las 1 929 secciones, y nos permiten identificar los distintos territorios partidistas que conforman en su agregado la geografía electoral de Chiapas. Asimismo, nos permiten interpretar los cambios en la composición socio-económica de la movilización electoral, que adquiere un perfil

más desarrollado entre 1994 y 2006, pero se transforma notablemente como consecuencia de la fragmentación del electorado del PAN entre 2009 y 2012. A esta diferenciación de los componentes partidistas del voto, hay que agregarle otro tipo de heterogeneidad, que nos remite a los contenidos antropológicos que adquiere el sufragio en los distintos contextos territoriales en los que se ejerce de una forma particular.

La heterogeneidad de los contenidos antropológicos del sufragio particular

En los noventa, el voto en Chiapas pasa de ser una práctica social eminentemente colectiva, homogénea y estable, a devenir un ejercicio político cada vez más fragmentado y volátil, autónomo e individualizado. Por ende, para entender las dinámicas de la participación electoral, resulta indispensable interesarse de cerca en la evolución de sus distintos componentes antropológicos, así como en sus relaciones con las estructuras territoriales del desarrollo socio-económico.

Por su carácter abstracto y poco personalizado, las elecciones federales para legisladores permiten captar el peso de las distintas preferencias e identidades político-partidistas, aun cuando éstas siguen estando sujetas a efectos diversos de atracción o aversión hacia candidatos y partidos particulares, sobre todo cuando coinciden con otros comicios (lo que es el caso de los presidenciales en 1994, 2000 y 2006, y de los locales en 2012). En esas circunstancias de mayor competitividad, cada votante tiene no solamente más de una opción político-partidista, sino también más de una boleta electoral (para cada uno de los distintos cargos de elección).

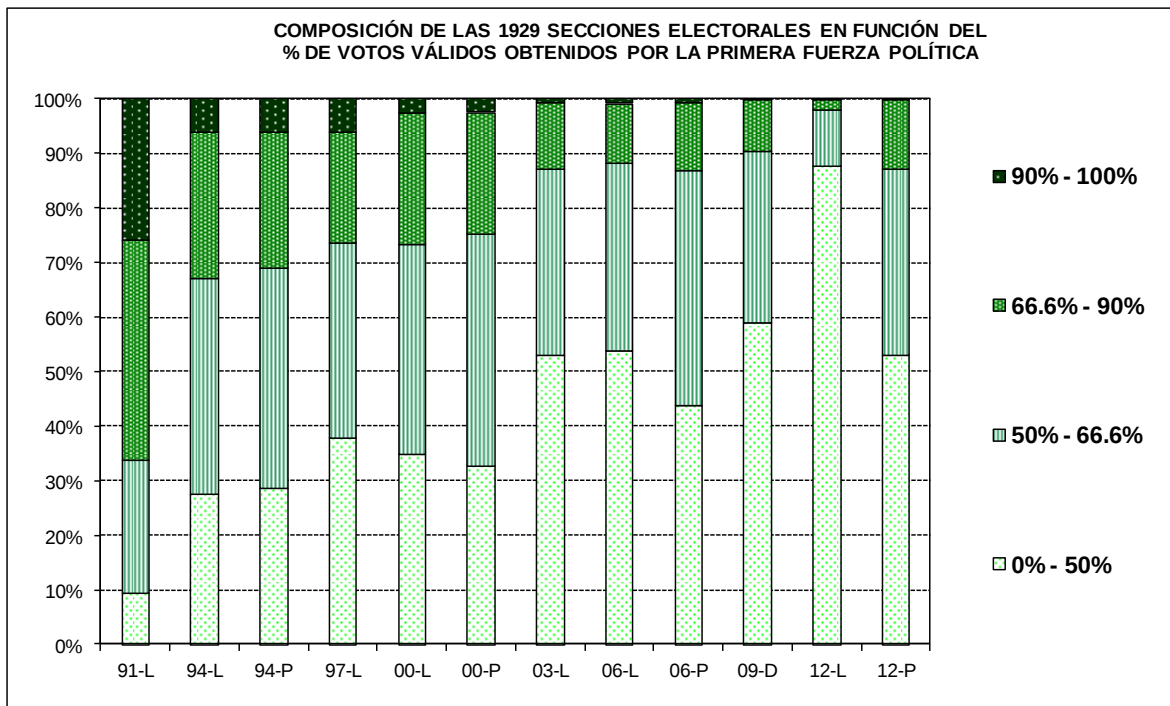
De manera general, además de votar por el candidato o partido de su preferencia personal, el ciudadano puede renunciar simple y llanamente a ejercer el sufragio, mediante su abstención o no inscripción en las listas electorales. Asimismo, éste puede rechazar la oferta político-partidista, votando por un candidato no registrado o bien anulando su voto. En lugar de sufragar por un programa que lo convence o por un partido con el que se siente identificado, el elector también puede apoyar coyunturalmente a un candidato por sus cualidades personales (efectos de notoriedad y notabilidad) o por compromisos e intereses particulares (voto de intercambio o clientelar), votar a favor del “mal menor” con la intención de contrarrestar la elección de un candidato percibido como “peligroso” o “nefasto” (voto “negativo” o “útil”) y, en el caso de varios comicios simultáneos (como, por ejemplo, en las elecciones federales para diputados, senadores y presidente de la República de 1994, 2000 y 2006, o como sucedió en 2012 cuando las tres elecciones federales coincidieron por vez primera con las elecciones locales para gobernador, ayuntamientos y diputados locales en Chiapas), distribuir incluso sus votos entre candidatos de distintas afiliaciones partidistas (votos “divididos”, “cruzados” o “quebrados”).

El voto gregario e “identitario”, corporativo, comunitario y “consensual”

Para empezar, aun existen contextos territoriales en los que predomina una fuerza política hegemónica y/o dominante, en los que el voto se apoya sobre lealtades de tipo colectivo y probablemente excluyente, en un ambiente poco propicio al pluralismo político y a la competición electoral. En términos teóricos, dicho voto se aparenta de alguna manera al modelo psicosocial de las simpatías e identificaciones partidistas, con raíces afectivas y lealtades que pueden remontar hasta los años tempranos de la socialización. No obstante, dicho concepto sufre de serias limitaciones en el contexto mexicano en general, y chiapaneco en particular. Hasta muy recientemente, sólo existía una única fuerza política con posibilidades efectivas de gobernar. El multipartidismo no solamente es de muy reciente fecha, sino que apenas está siendo apropiado por gran parte de los nuevos electores, en un contexto de cambio acelerado y profundo.

Ello se refleja claramente en las dinámicas micro-políticas de la reciente transición electoral. El número y la homogeneidad de las secciones “hegemónicas” se reducen drásticamente entre 1991 y 1994, antes de conocer una nueva disminución entre 2000 y 2003, después de la alternancia presidencial. Mientras que, en 1991, el 66% (1 279) de las 1 929 secciones se caracterizaban por situaciones en las que la primera fuerza política (en ese entonces siempre el PRI) recibía más de dos terceras partes de los sufragios válidos (captando más del 90% en una cuarta parte de ellas), desde 1994 dichas proporciones se redujeron en más de la mitad, revelando de paso la transición hacia un juego electoral mucho más libre, competitivo y transparente (gráfica 8).

Gráfica 8: Composición de las 1929 secciones electorales en función del % de votos válidos obtenidos por la primera fuerza política



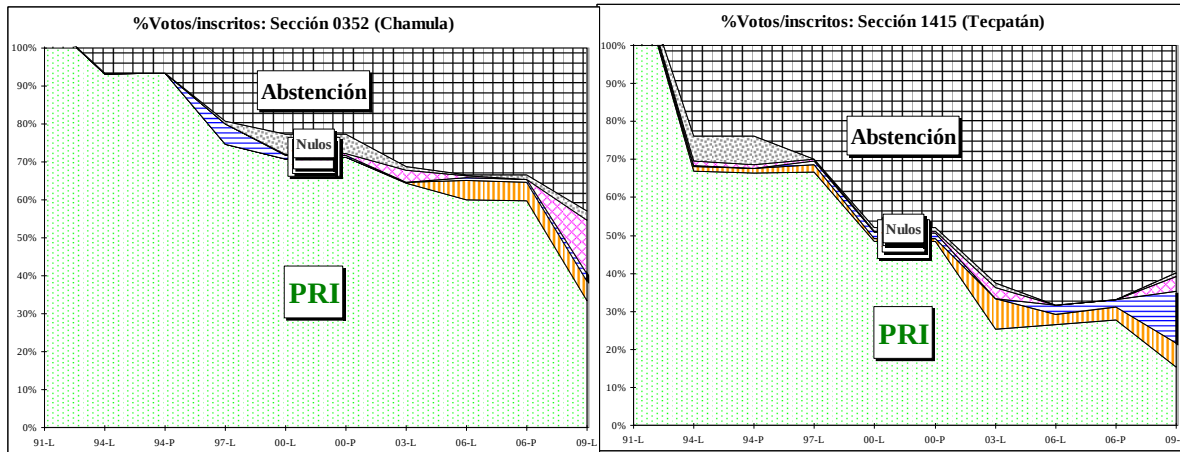
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Sin embargo, si bien el número de secciones monopartidistas se siguió reduciendo a lo largo de los noventa, y luego a partir de la alternancia presidencial del 2000, dichas secciones no desaparecieron por completo. Todavía en 2006, los ganadores registraron porcentajes superiores al 66% de los sufragios en 253 secciones (13% del total), captando más del 90% de los votos en 14 (0.7%) de ellas. E incluso en las últimas presidenciales de 2012, en las que solamente cinco secciones superaron el 90% de los válidos, aún se observaron resultados superiores al 66.6% en 252 secciones adicionales (12.6% del total), rurales en su gran mayoría.

Para ilustrar la singularidad de este tipo de contexto político, observemos las tendencias del voto en cuatro secciones con comportamientos electorales extremos. Las dos primeras de ellas, identificadas por el IFE con los códigos 0352 y 1415, se encuentran en la comunidad indígena de Chamula y en el municipio mestizo de Tecpatan. En ambas micro-regiones, la posición del PRI no ha dejado de ser aplastante hasta 2006, reduciéndose la oposición a algunas expresiones puntuales y muy minoritarias. Sin embargo, ambas secciones también registran una participación electoral

declinante desde el periodo de la movilización autoritaria (que aún se observa en 1991 en las gráficas 9 y 10), así como una afirmación más reciente pero muy notable de la oposición en los comicios legislativos de 2009.

Gráficas 9 y 10: Evolución del % de votos/inscritos (secciones 0352 y 1415)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

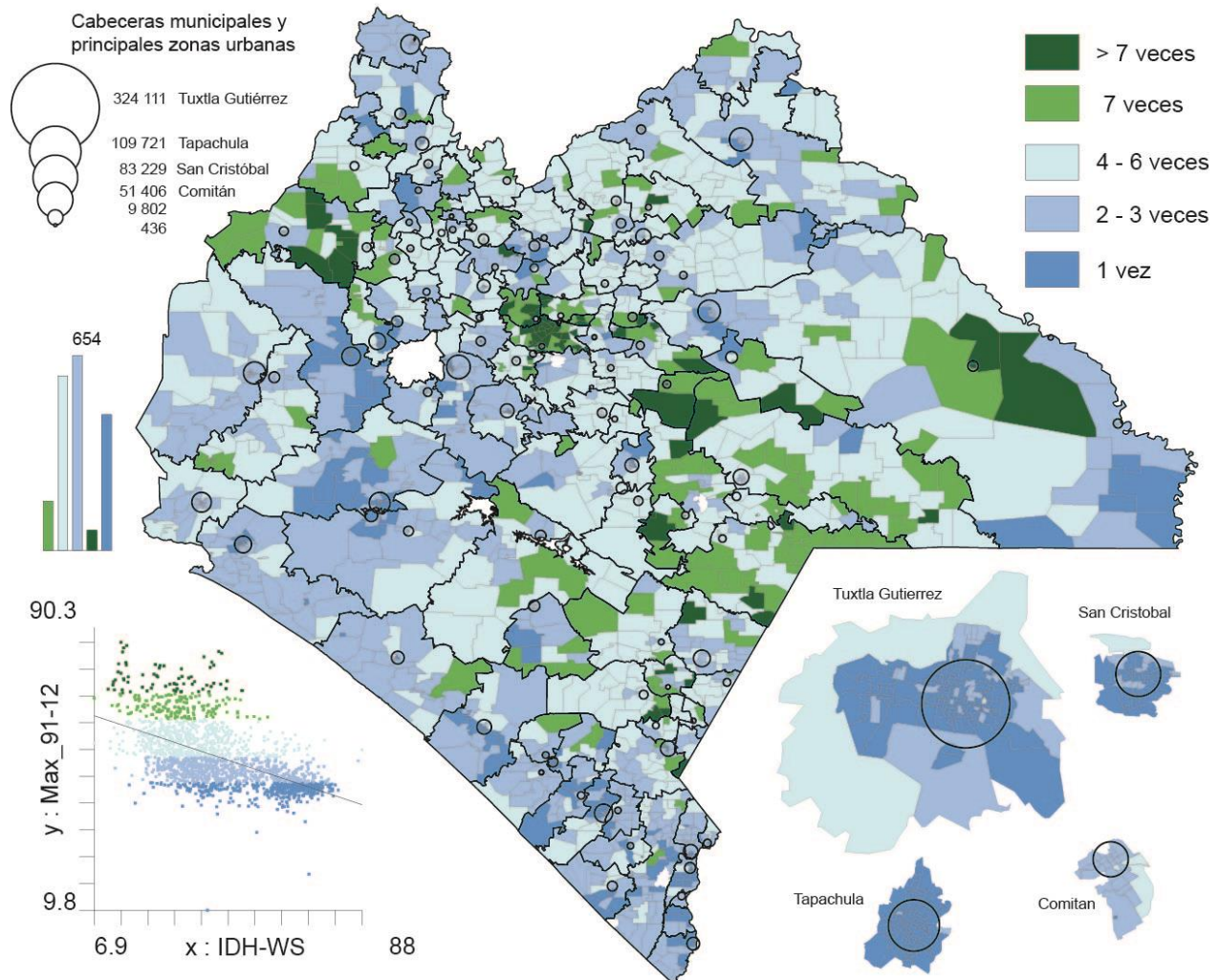
Desde una perspectiva geográfica y diacrónica, este tipo de “*hegemonía mono-partidista*” con pluralismo limitado se concentra claramente en las micro-regiones más marginadas de Chiapas. Como lo ilustra el siguiente mapa, las 159 secciones en las que la primera fuerza captó al menos siete veces más del 66.6% de los votos válidos durante el período 1991-2012 tienen un marcado perfil geográfico y socio-demográfico. Si bien no se trata de un comportamiento exclusivo de la zona indígena (ya que 35% de estas secciones se encuentran en territorios mestizos), sí se trata de un fenómeno eminentemente rural (89% de dichas secciones se sitúan en el campo). En su gran mayoría, este tipo de comportamiento extremo se sitúa en la Selva y en Los Altos indígenas, aunque también se encuentra en algunas secciones mestizas de municipios fronterizos que colindan con Guatemala (Trinitaria, Tzimol, Mazapa de Madero y Frontera Comalapa) y con Oaxaca (Tecpatán, Sunuapa y Ocozocuatlá).

En cuanto a la composición partidista de dichas secciones, ésta recubre principalmente los territorios del PRI. Pero éste no es el único que se beneficia de este tipo de hegemonía monopartidista. Tras haber conocido un crecimiento espectacular entre 1991 y 1994, el PRD también ha establecido un férreo control político en 26 secciones, situadas en las regiones chol (Tila y Salto de Agua), tzotzil-norte (Simojovel, Huituipán y Jitotol) y tzotzil-altos (Zinacantán y Huixtán), tzeltal (Chilón, Pantelhó, Sitalá, Cancuc, Oxchuc, Chanal y Ocosingo) y tojolabal (Las Margaritas), pero también en la Costa (Pijijiapan, Mazatán) y el Valle Central (Villacorzo, Villaflores y Jiquipilas).

Como botón de muestra, tomemos la sección 0660 del municipio mestizo de Jiquipilas y 1045 de Pueblo Nuevo Solistahuacán. En esta segunda microrregión, la facción local aliada con el partido del Sol Azteca incluso prohibió el acceso de los representantes priístas durante las jornadas electorales federales y locales del 2006. Ello le permitió alcanzar tasas de participación y de votación dignas del periodo autoritario (que se repitieron en 2009), gracias a prácticas que se aparentan a las del antiguo régimen del PRI. Sin contar con una capacidad de movilización electoral excepcional en Jiquipilas (tendencia moderada de participación electoral), los aliados locales del

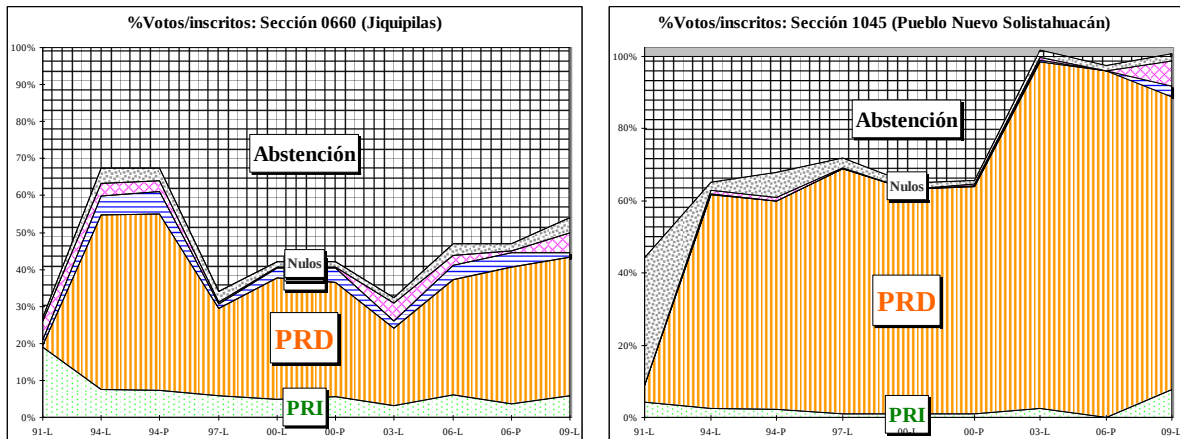
PRD también cuentan aquí con una hegemonía contundente sobre los otros grupos de la oposición, fragmentados y con escasas posibilidades de revertir la situación (gráficas 11 y 12).

Mapa 19: Secciones con hegemonía monopartidista (>66.6%)



Fuente: Elaboración propia con Philcarto: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

En contraste con el PRI y el PRD, ni Acción Nacional ni los otros partidos políticos cuentan con ninguna sección en la que son hegemónicos, sino que se implantan y se extienden en contextos mucho más competitivos y fragmentados, plurales e inestables. A diferencia de las microrregiones priistas y perredistas con comportamientos homogéneos, cabe distinguir dos otros tipos de secciones que se caracterizan por una acentuada volatilidad, relacionada con procesos de la más diversa índole que dificultan su interpretación general.

Gráficas 11 y 12: Evolución del % de votos/inscritos (secciones 0660 y 1045)

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

El voto “de intercambio”, faccional y clientelar

En cualquier democracia resulta perfectamente normal que algunos electores cambien de preferencia partidista a lo largo del tiempo, dando lugar a lo que se conoce como el realineamiento electoral. No obstante, para el caso de Chiapas tenemos cuantiosas evidencias empíricas que, en numerosas secciones, una volatilidad extrema puede asociarse con comportamientos electorales colectivos, de tipo faccional o clientelar, mientras que, en otras, éstos relevan de decisiones de tipo individual.

Cuando la volatilidad en una sección particular adquiere puntualmente magnitudes totalmente atípicas que rompen con la dinámica general del sistema de partidos local, esto puede indicar comportamientos electorales colectivos que ponen en juego mecanismos diversos de intercambio, de tipo faccional o clientelar. Dichos votos se aparentan al modelo teórico de la elección racional, pero con una diferencia sustancial: éstos no se basan en cálculos beneficios-costos autónomos y de tipo individual, sino en procesos grupales de negociación, presión y coacción; se apoyan, ya sea en lealtades de tipo “comunitario” o faccional, ya sea en relaciones asimétricas de intercambio y apoyo mutuo, de tipo corporativo y/o clientelar.

Para evaluar la dimensión cuantitativa de este fenómeno, nos enfocaremos en el periodo posterior a 1994, ya que las variaciones impresionantes que se producen entre 1991 y 1994 coinciden con la implosión del antiguo régimen y remiten a un cambio profundo del sistema electoral y del significado mismo del voto. Utilizamos para ello el índice clásico de *Pederson*, que puede variar entre 0 y 100, y corresponde a la suma del valor absoluto del conjunto de variaciones registradas a favor o en detrimento de cada partido contendiente, dividida por dos (ya que por razones aritméticas las “ganancias” de votos de un partido particular necesariamente provienen de las “perdidas” de otro instituto contendiente).⁸

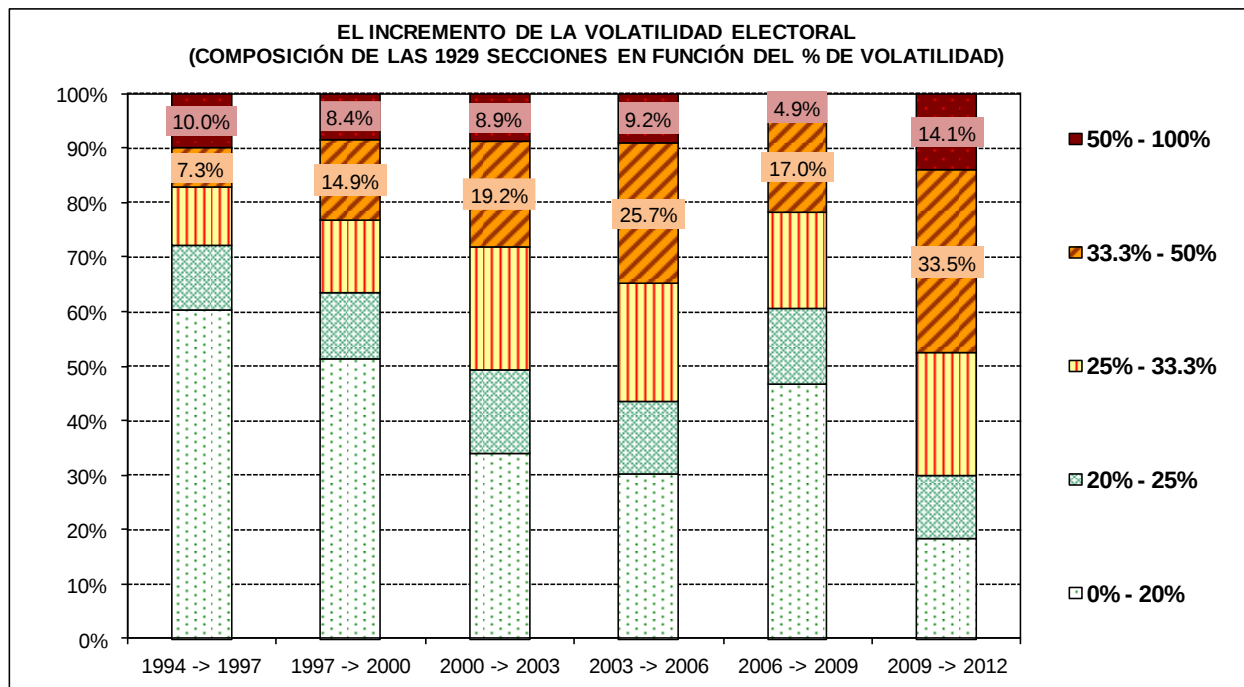
Como pudimos verificarlo mediante diversas aproximaciones etnográficas de votaciones corporativas y faccionales, se trata de un fenómeno sumamente heterogéneo y multifacético, cuyas manifestaciones varían considerablemente en sus significados por lo que requieren ser analizadas

⁸ Para mayores detalles sobre este índice, véase la obra de referencia de Taagepera & Shugart (1989).

caso por caso. Por lo pronto, limitémonos a ubicar las secciones con una volatilidad extrema, distinguiendo además el caso específico del “abstencionismo zapatista”.

En términos generales, se registra un fuerte y constante incremento de la volatilidad electoral, que pasa de un promedio de 23 (con una mediana de 17) entre 1994 y 1997, a un promedio de 34 (con una mediana del 33) entre 2009 y 2012. Dicho incremento se explica en parte por la creciente fragmentación del sistema de partidos, y se observa con claridad en la siguiente gráfica. Al inicio del periodo analizado, solamente 333 secciones (17.3% del total) se caracterizan por una volatilidad mayor a 33, mientras que al final, su número casi se triplica a 913 secciones (47.6% del total). En otras palabras, en la mitad de las 1 929 secciones al menos uno de cada tres electores cambia súbitamente de orientación partidista entre 2009 y 2012, implicando incluso a uno de cada dos electores en el 14.1% de los casos (gráfica 13).

*Gráfica 13: El incremento de la volatilidad electoral
(Composición de las 1929 secciones en función del % de volatilidad)*



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

Indaguemos, ahora, en las secciones en las que se registra una volatilidad extrema (superior a la mitad del electorado) en al menos una elección particular. Ello sucede en 607 secciones entre 1994 y 2012, en las que se registra un total de 1067 casos (192 de ellos entre 1994/1997 y 270 entre 2009/2012). En términos generales, dichas volatilidades extremas se sitúan más bien en contextos rurales, pero no muestran una distribución geográfica consistente. Por ello, en la medida en la que se trata de un fenómeno sumamente heterogéneo y multifacético, en esta contribución nos enfocaremos en dos tipos peculiares de volatilidad, cuyos significados y dinámicas pudimos analizar con mayor profundidad.

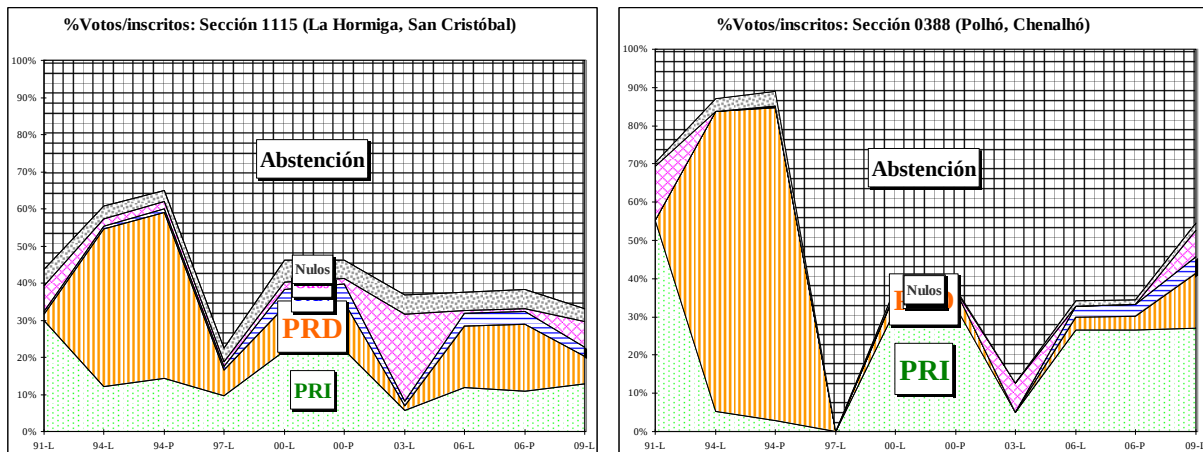
Un primer ejemplo proviene de una investigación etnográfica, realizada por Sophie Hvostoff en la colonia indígena más emblemática de la periferia de San Cristóbal de Las Casas, conocida como “La Hormiga”. Situado sobre el cerro que colinda, hacia el Norte, con la comunidad

tzotzil de San Juan Chamula (de donde provienen precisamente muchos de sus habitantes que fueron expulsados de sus parajes por conflictos político-religiosos), este barrio fue fundado en 1984 y se transformó rápidamente en el centro de un nuevo poder “indígena”, al calor de las luchas por la legalización de los predios y el acceso a los servicios públicos. Bajo el liderazgo de su fundador, quien luego encabezó la organización indígena independiente más poderosa de Los Altos de Chiapas, esta colonia urbana también se transformó en una codiciada reserva de votos cautivos, antes de fragmentarse en el contexto de la democratización electoral.

Este proceso histórico se refleja claramente en las tendencias electorales. En 1994, un sector importante del barrio rompe con el PRI y vota nutridamente por el PRD, lo que le valdrá a su dirigente ser postulado y electo diputado local de dicho partido en 1995. Pero su combatividad e independencia lo llevarán pronto a su destitución y encarcelamiento, sancionando el declive de su influencia local y regional. En términos electorales, ello se traduce en una acentuada volatilidad, resultado de diversas divisiones faccionales y de alianzas cambiantes –con el PRD en 1994, con el PRI en 1997 y 2000, con el PAS en 2003, y de nuevo con el PRD en 2006–.

Sin embargo, las consignas sucesivas de los principales dirigentes locales se debilitan cada vez más, lo que se refleja en un elevado abstencionismo y en una creciente fragmentación del voto válido. En las legislativas de 2009, éste se divide así entre el PRI (43.3%), el PRD (24.6%), el PAN (9.1%), el PT (6.5%), el PVEM (4.9%), Primero México (3.8%), Convergencia (3.7%), el PANAL (1.6%), el PSD (1.2%) y... Salvemos México (1.1%). En otras palabras, el grado de fragmentación partidista se asemeja al que se registra en promedio en el nivel nacional, situándose en un formato de cuatro fuerzas relevantes. Como bien lo demuestra la etnografía cualitativa de Sophie Hvostoff, de un voto “comunitario”, disciplinado y hegemónico se pasa, así, a un sufragio estratégico “de intercambio”, neo-corporativo, faccional y clientelar (gráfica 14) (Hvostoff, 2002).

Gráficas 14 y 15: Evolución del % de votos/validos e inscritos (secciones 1115 y 0388)



Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

El segundo ejemplo se relaciona con las consignas de voto sucesivas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que explican una parte predominante de la volatilidad total que se observa entre 1994 y 2000 en la zona de conflicto, en un periodo en el que el resto de la entidad todavía se caracteriza por una notable estructuración tri-partidista. Si bien en 1994 los rebeldes llaman a votar en contra del PRI, a partir de 1995 éstos promueven el abstencionismo entre sus bases. Ello produce una impresionante inestabilidad de la participación electoral y del voto a favor

del PRD, partido que, tras beneficiarse de una movilización excepcional en 1994, es fuertemente afectado por el retiro electoral de los simpatizantes zapatistas.

Como botón de muestra, la gráfica 15 ilustra la evolución del comportamiento electoral en la sección 0388 de Chenalhó, donde se ubica el famoso “municipio autónomo rebelde” de Polhó. Ahí se observa, con claridad, el impresionante incremento del voto “perredista” entre 1991 y 1994, que se transforma inmediatamente en abstencionismo en las elecciones federales de 1997, en unos comicios en los que los zapatistas queman casillas en 111 secciones rurales e indígenas del estado. Posteriormente, la participación electoral empieza a recuperarse paulatinamente, beneficiando sobre todo al Revolucionario Institucional, así como puntualmente a Convergencia y al PAS en 2003, así como al PRD y al PAN en 2009, cuando participan de nuevo 55% de los inscritos. El análisis cuantitativo y cualitativo de este fenómeno proporciona un buen indicador de la influencia del EZLN, y de los efectos contradictorios de la rebelión armada en la llamada zona de conflicto.

Lo que nos interesa destacar, aquí, es el carácter colectivo y faccional de estos dos tipos de comportamiento electoral, caracterizados por la pertenencia a una organización social o político-militar. Siguiendo a Hamza Alavi, las dinámicas faccionales se organizan alrededor de líderes locales, que movilizan puntualmente sus seguidores a cambio de beneficios específicos – materiales, simbólicos, de promoción o de protección–, para sus clientes. Pero, a diferencia de las clases sociales, las facciones se constituyen en torno a alineamientos verticales que cruzan las solidaridades horizontales en el seno de una comunidad. En lugar de politizar las diferencias y desigualdades comunitarias, éstas tienden a neutralizarlas, en la medida en la que se apoyan en divisiones transversales e internas, que contribuyen a reproducir y a legitimar. Finalmente, las dinámicas faccionales no se apoyan siempre ni necesariamente sobre organizaciones formalmente constituidas y durables, sino que se manifiestan coyunturalmente, sobre todo cuando algún conflicto pone en juego el ejercicio o la transmisión del poder. Por ello, en cuanto a la estructuración de este tipo de lealtades, Alavi distingue entre un círculo restringido de partisanos, quienes mantienen relaciones más nutridas, durables y estrechas con el líder, y sectores más amplios y extensos, que solamente establecen relaciones transaccionales, utilitaristas y mucho más efímeras con él (Alavi, 1976).

Para terminar, también pueden distinguirse otros tipos específicos de volatilidad, con dinámicas territoriales todavía más consistentes. Tal es el caso de los efectos “de notabilidad personal” que produjeron las candidaturas presidenciales de Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, de Vicente Fox en el 2000, y de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012.

El voto “individualizado”, estratégico y “de opinión”

En este apartado, aislaremos un último tipo peculiar de comportamiento electoral, quizá el más independiente e “individualizado”, y el que más se asemeja al tipo ideal del voto “de opinión” o “de convicción”. Cada vez que se celebran simultáneamente comicios para distintos niveles de gobierno (por ejemplo las elecciones para presidente, senadores y diputados federales), se abre la posibilidad de sufragar de manera diferenciada para candidatos de afiliaciones partidistas distintas. Este voto llamado “cruzado”, “quebrado” o “dividido”, puede obedecer a diversas lógicas (dividir el poder, manifestar su apoyo a un partido pero su rechazo a un candidato en particular, o viceversa, etcétera), pero manifiesta casi siempre una preferencia individual, en ruptura con comportamientos colectivos de índole identitaria, faccional o clientelar.

De manera general y agregada en el nivel estatal, se observa un claro incremento de este fenómeno a lo largo de nuestro periodo de estudio. En 1994, el voto estratégico o “útil” le aporta 18 mil 464 sufragios adicionales a Diego Fernández de Cevallos con respecto a los que moviliza el PAN (+1.8% de los válidos), y 11 mil 183 a Cuauhtémoc Cárdenas con respecto al PRD (+1.1%), proviniendo dichos sufragios de electorados priístas o de otros partidos en las legislativas concomitantes. Seis años después, es la candidatura presidencial de Vicente Fox la que concentra este efecto de notabilidad en Chiapas, movilizandando 22 mil 591 votos (+2.2%) más que la ALIANZA POR EL CAMBIO en las legislativas. En 2006, el voto “útil” aumenta todavía más, para beneficiar principalmente a Andrés Manuel López Obrador, quien moviliza 78 mil 116 sufragios más que los diputados de la coalición PRD-PT-Convergencia (+6.5% de los votos válidos), provenientes fundamentalmente de electorados del PRI-PVEM y del PANAL.

En los últimos comicios federales de 2012, finalmente, AMLO confirma su capacidad de atraer una parte decisiva del voto estratégico, “negativo” y diferenciado. Mientras que los candidatos a diputados de la Coalición por el Bien de Todos solamente suman 467 mil 789 sufragios en las legislativas, en la presidencial su candidato capta 635 mil 176 sufragios. Esta diferencia de más de 167 mil votos (+8.9% de los válidos) se debe a que 61 mil electores que votaron por el PRI en las legislativas no lo hicieron por Enrique Peña, además de los 48 mil electores del PANAL que no votaron por Gabriel Quadri, y de las diferencias notables en los totales de votos válidos (+48 mil) y emitidos (+22 mil) en ambos tipos de elecciones.

Evidentemente, la magnitud del voto “dividido” se incrementa cuando éste es analizado en el nivel seccional, ya que muchas transferencias (que pueden ser positivas o negativas) se compensan mutuamente al ser agregadas en el nivel estatal. Pero sobre todo, la exploración del fenómeno en esta escala permite ubicar las lógicas territoriales que lo conforman, al aislar dinámicas seccionales con una clara diferenciación geográfica. Para las elecciones presidenciales de 2012, se pueden identificar, así, al menos cinco tipos de secciones conforme a la magnitud y configuración de los distintos efectos locales de notabilidad (cuadro 5).⁹

En las 196 secciones que conforman la categoría 2 (en color rojo) se registran transferencias muy marcadas, de electorados priístas (-11.8 puntos) y de boletas anuladas (-3.7) en las legislativas, que votan válido y a favor de AMLO (+14.9 puntos porcentuales) en las presidenciales. Asimismo, el efecto “López Obrador” rebasa los 10 puntos porcentuales en las categorías 3 y 4, donde también capta votos que se anulan en las legislativas pero se diferencia fundamentalmente por el origen partidistas de los otros votos “útiles”. En las 424 secciones del tercer tipo dichos sufragios provienen esencialmente de sectores panalistas (-6.5 puntos), mientras que en las 214 secciones del cuarto tipo éstos se restan fundamentalmente de electorados del PAN (-6.3 puntos). En contraste, las transferencias de votos son mucho más heterogéneas en las 472 secciones de la categoría 5, y notablemente moderadas en las 615 secciones restantes que integran la categoría 1 (véase cuadro 5 y mapa 20).

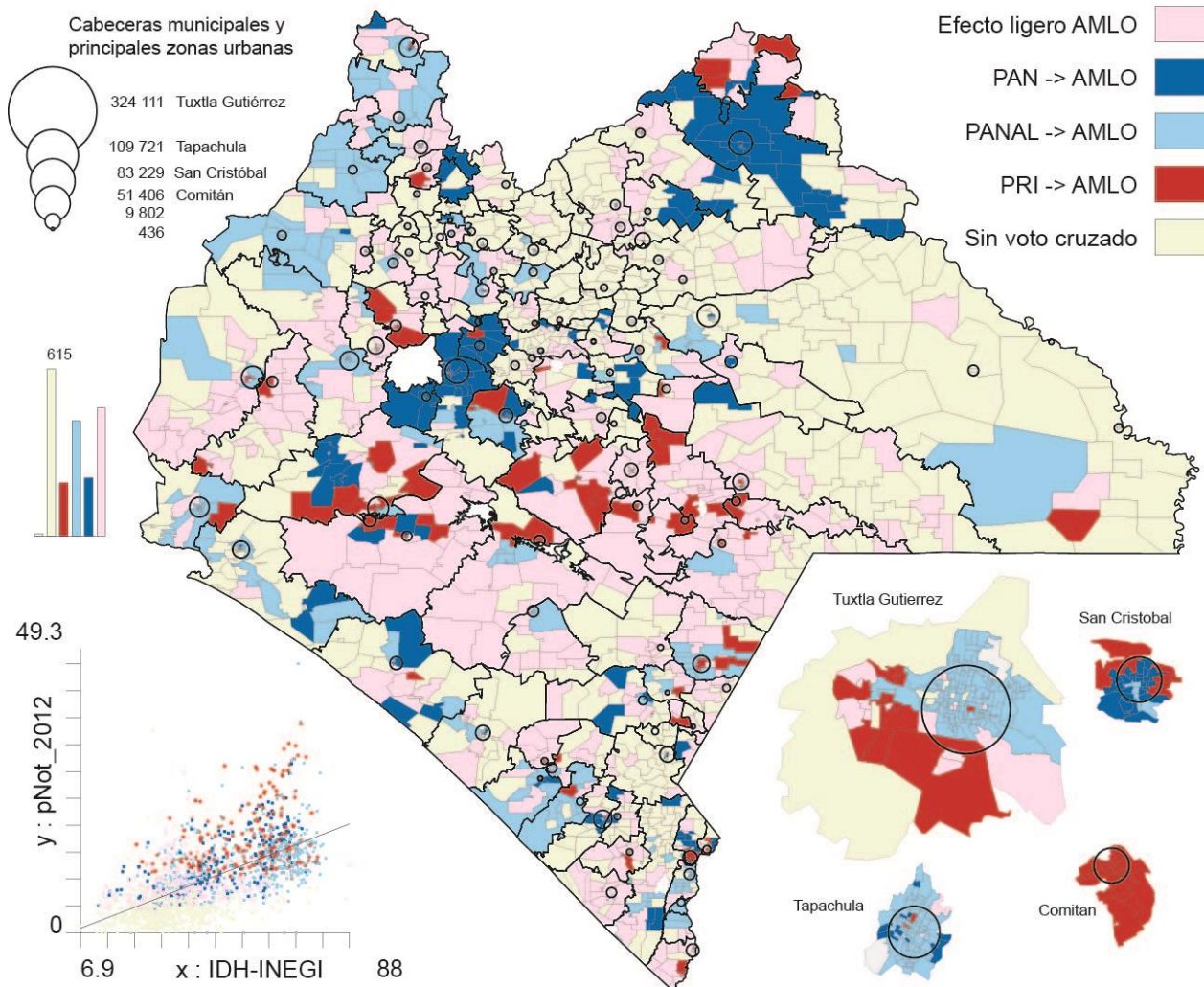
⁹ Esta tipología ha sido construida mediante un análisis multifactorial de clasificación jerárquica ascendente, que permite minimizar la varianza interna de cada categoría (intra-grupal), maximizando a la vez la varianza entre categorías (inter-grupal).

Cuadro 5: Composición del efecto “López Obrador” en 2012

Diferencia presidencial - legislativa	Todas	1	2	3	4	5
Andrés Manuel López Obrador	7.4	1.9	14.9	10.9	12.7	5.8
Enrique Peña Nieto	-3.2	-0.1	11.9	-1.4	-5.1	-5.6
Josefina Vasquez Mota	0.7	0.7	2.1	1.0	-6.3	3.2
Gabriel Quadri	-2.3	-0.9	-1.2	-6.5	-1.6	-1.2
Votos Nulos	-2.4	-1.4	-3.7	-3.2	-3.0	-2.1
Participación electoral	-0.2	-0.2	-0.2	-0.7	0.3	0.0
Efectos agregados	9.9	4.5	17.6	13.5	13.2	9.1
Número Secciones	1921	615	196	424	214	472
Composición socio-demográfica	Todas	1	2	3	4	5
% Cas-Urb	42.0%	13.0%	80.0%	74.0%	62.0%	27.0%
IDH	45.1	33.9	57.9	58.1	51.3	39.9
%Alfabetismo	76.2	68.0	82.4	85.3	80.1	74.4
% Monolingüismo	7.7	15.6	2.1	1.6	6.2	6.0

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

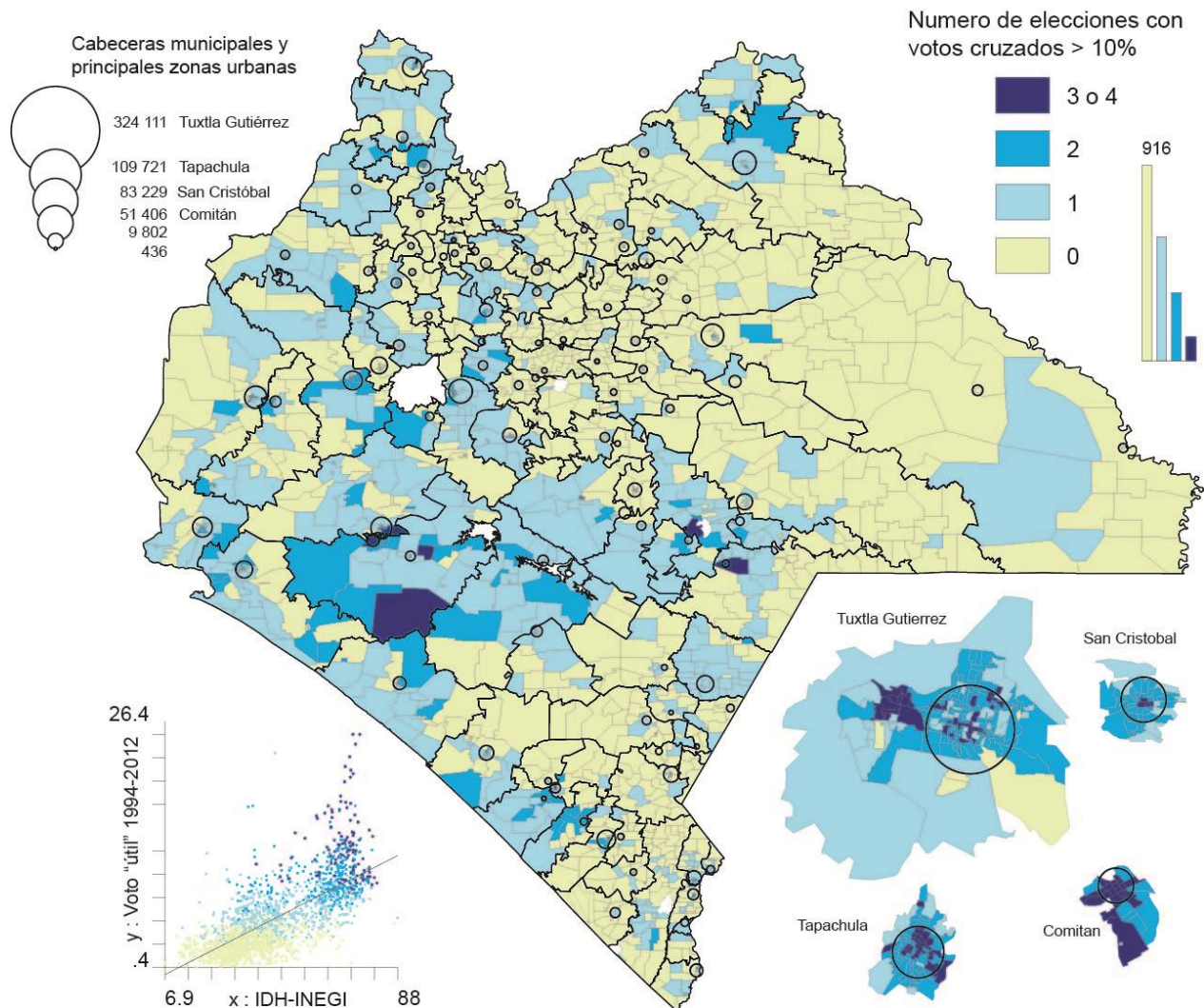
Mapa 20: Composición territorial del efecto “López Obrador” en 2012



Fuente: Elaboración propia con Philcarto: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

Pero lo más interesante es que dichos efectos de notabilidad se caracterizan por una fuerte concentración geográfica, en la medida en la que el arrastre personal de Andrés Manuel López Obrador se ubica claramente en contextos altamente urbanizados. Ello se observa tanto el mapa como en el cuadro anteriores, ya que los elevados niveles de desarrollo y alfabetismo de las secciones que concentran el voto estratégico en 2012 contrastan fuertemente con los promedios de las secciones eminentemente rurales, marginadas y monolingües que suelen votar de una forma mucho más disciplinada. Pero ello también se observa en la distribución territorial de los promedios seccionales del conjunto de votos “útiles” registrados desde 1994, que se relacionan positiva y estrechamente con los niveles seccionales del desarrollo humano, alcanzando un coeficiente de correlación de $+0.634$ ($r^2 = 40.2\%$) durante el período de estudio. El siguiente mapa ilustra perfectamente este fenómeno: es justamente en las secciones más desarrolladas de los principales centros urbanos del estado, en las que se ubican los electorados más numerosos que cruzan permanentemente sus votos, en contraste con los comportamientos mucho más estables de las zonas marginadas y rurales (mapa 21).

Mapa 21: Distribución de secciones que concentran el voto “útil” (1994-2012)



Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

En suma, mientras que en 1994 y 2000, alrededor del 5.2% y del 4.5% de los electorados “dividieron” sus votos válidos entre candidatos de distintos partidos en las presidenciales y legislativas, este fenómeno abarcó alrededor de 8.7% en 2006 y de 9.7% en 2012. Esto nos lleva al último apartado de este análisis, en el que situaremos geográfica y socio-demográficamente los distintos tipos extremos de comportamiento electoral.

C. De las dimensiones constitutivas del voto al rompecabezas de la participación electoral

¿Cómo se relacionan, ahora, estas distintas dimensiones del voto con las otras desigualdades demográficas, económicas y socio-culturales que estructuran la entidad, y cómo se relacionan éstas con las orientaciones partidistas que conforman el agregado heterogéneo de la participación electoral? De manera preliminar, caractericemos brevemente la geografía humana de Chiapas, marcada por profundas desigualdades demográficas, socio-económicas y étnico-culturales, así como por una clara oposición entre las zonas mestizas e indígenas, urbanas y rurales. El mapa 22 ilustra las principales estructuras del (sub-)desarrollo en el nivel de las 1 929 secciones electorales, partiendo de un índice sintético que permite aproximarse a los niveles de educación, salud y bienestar material, con datos provenientes del último Censo del INEGI de 2005.¹⁰

Chiapas es una entidad eminentemente agraria, rural e indígena, con uno de los problemas más graves de marginación socio-demográfica de toda la República. Con la notable excepción de la capital del Estado (Tuxtla Gutiérrez) y de cinco municipios más que albergan los polos económicos más dinámicos de la entidad (San Cristóbal de Las Casas, en Los Altos; Comitán de Domínguez, en los valles ganaderos; Tapachula y Tonalá, sobre la costa del Pacífico; y el municipio petrolero de Reforma, en la frontera Norte que colinda con Tabasco), el resto del estado se caracteriza por una alta dispersión demográfica y por bajos índices de desarrollo social.

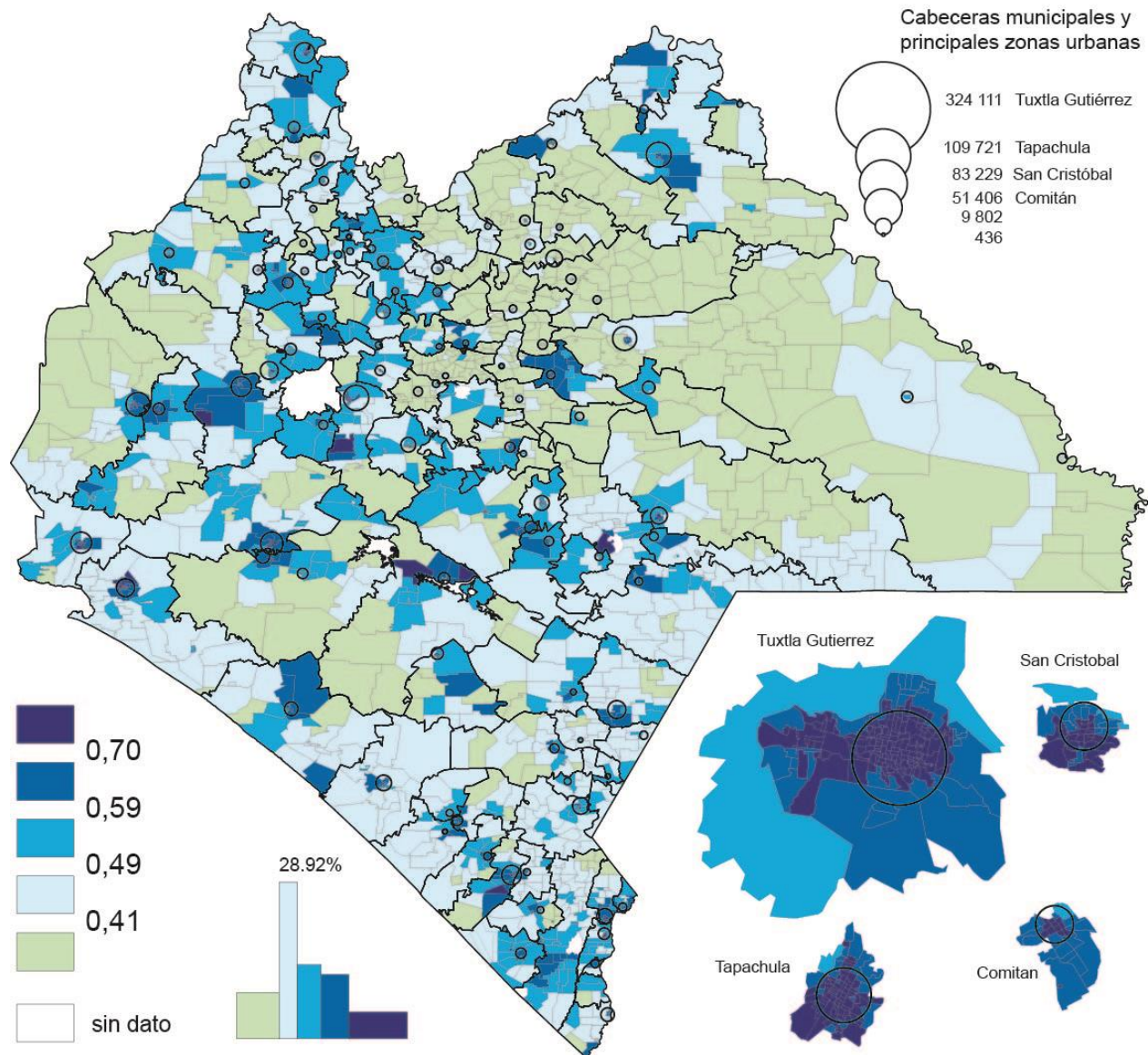
Se distinguen, adicionalmente, cuatro dinámicas territoriales con niveles de desarrollo claramente diferenciados: (1) la de las zonas de influencia de las principales ciudades, que se benefician de su dinamismo socio-económico y se sitúan a lo largo de las principales vías de comunicación (en azul); (2) la de las cabeceras municipales con índices más elevados de desarrollo, que contrastan con las secciones periféricas y rurales; (3) un tercer grupo de secciones con índices moderados de marginación (color celeste claro), situadas en las regiones rurales más prósperas de la Costa del Pacífico, del Valle Central y de las Llanuras de Comitán, así como en las Llanuras de Pichucalco y de Palenque en el Norte del estado; (4) y un cuarto conjunto de 557 secciones que concentran los mayores índices de rezago socio-económico (verde claro), ubicadas principalmente en las zonas indígenas, en el corazón de la Selva, en Los Altos y en el Norte, pero también en las partes más desfavorecidas del Valle Central y de la frontera con Oaxaca, en las que predominan poblaciones rurales mestizas.

¿Cómo se relacionan, ahora, estas desigualdades socio-económicas con las desigualdades territoriales y antropológicas en el ejercicio del sufragio? El siguiente mapa reporta la ubicación

¹⁰ Para ser precisos, nuestro índice agrega los promedios de cuatro dimensiones, con la misma ponderación que adopta el PNUD para la construcción tradicional del IDH: 0.333 BIENESTAR MATERIAL (= promedio de %viviendas que disponen de agua en la red pública + %viviendas que disponen con servicio sanitario + %viviendas que disponen de drenaje conectado a la red pública + %viviendas que disponen de energía eléctrica) + 0.166 ALFABETISMO (= promedio de %población alfabetizada) + 0.166 ESCOLARIDAD (= promedio de %población con nivel de estudios de primaria + %población con nivel de estudios de secundaria / 2) + 0.333 SALUD (= promedio de %población con derecho de servicios de salud pública). Fuente: INEGI (2006).

geográfica de las distintas dimensiones ideal-típicas del voto. Para identificar estas secciones, adoptamos criterios más restrictivos que permiten captar los comportamientos más extremos entre 1991 y 2012. Ello permite ubicar las microrregiones con patrones consistentes a lo largo del período de estudio, caracterizando de paso su peso relativo y su composición socio-demográfica.

Mapa 22: Distribución seccional del Desarrollo Socio-económico en 2010

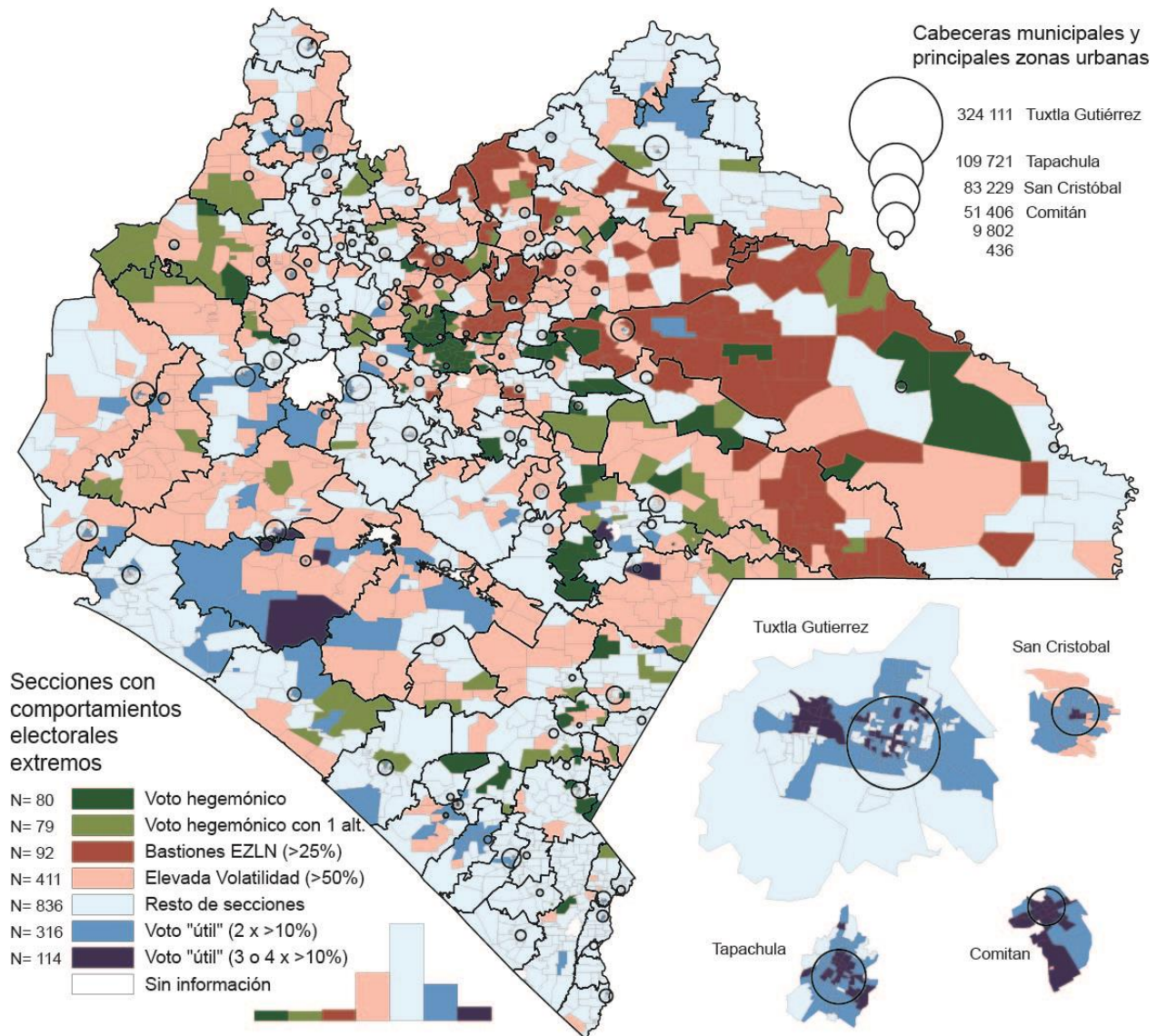


Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

Retomemos, para empezar, las secciones con comportamientos de aparente unanimidad. En términos cuantitativos, este tipo de “*hegemonía mono-partidista*” con pluralismo limitado caracteriza 159 secciones en las que la primera fuerza capta más del 66.6% del sufragio en al menos siete elecciones federales: en 80 de ellas, nunca se produjo ninguna alternancia, mientras que en las 79 restantes sí hubo un cambio puntual de partido dominante. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno que beneficia exclusivamente al PRI, ya que también existen secciones en las que, tras una alternancia, el partido del Sol Azteca estableció a su vez una marcada hegemonía

monopartidista. Tampoco se trata de un comportamiento exclusivo de la zona indígena, ya que 34.6% de estas secciones se encuentran en territorios mestizos. En cambio, sí se trata de un fenómeno eminentemente rural, en la medida en la que sólo 10% de ellas se encuentran en contextos urbanos. Quizás por ello, el PAN tampoco cuenta con este tipo de feudos electorales, en la medida en la que el blanquiazul se caracterizó tradicionalmente por una notable concentración citadina (mapa 23).

Mapa 23: Distribución territorial de las dimensiones ideal-típicas del voto



Fuente: Elaboración propia con *Philcarto*: <http://philcarto.free.fr>, con base en datos del IFE (2012)

Como ya lo advertimos, la segunda dimensión se asocia con una fuerte volatilidad, cuyos contenidos son mucho más heterogéneos y resultan más difíciles de interpretar. Por ello, en este análisis exploratorio nos limitamos a ubicar las 503 secciones que registraron una volatilidad superior al 50% del voto en al menos una elección del período 1991-2012, distinguiendo entre ellas las 92 secciones en las que el fenómeno se asocia directamente con las consignas sucesivas del

EZLN entre 1994 y 1997. En términos generales, éstas secciones también se sitúan en contextos eminentemente rurales (84.3% del total), aunque tienen una distribución geográfica más dispersa. En contraste con el comportamiento específico de las bases rebeldes (que se concentra en algunos municipios rurales [98.9% de los casos] e indígenas [94.6% de los casos] de las regiones Selva y Altos), las 411 secciones restantes también son rurales (81%) pero se distribuyen de una forma equitativa entre las zonas mestizas (49.1%) e indígenas (50.9%). Se trata, pues, de un comportamiento que se vuelve cada vez más frecuente en el campo chiapaneco, pero se extiende tanto en la zona indígena como en las secciones rurales del Norte, del Valle Central y de las Llanuras de Comitán, siendo curiosamente menos frecuente en la Costa del Pacífico, en la Sierra, en las Llanuras de Palenque y en las montañas zoques (mapa 23).

Finalmente, los votos “estratégicos” y “divididos” han tenido una distribución geográfica cambiante, relacionada con los efectos diferenciados de notabilidad personal de los distintos candidatos presidenciales. Pero si ésta fue relativamente heterogénea en 1994 (cuando se combinaron dos efectos distintos a favor de Fernández de Cevallos y de Cárdenas), tanto el voto “útil” del que se benefició Vicente Fox en 2000, como los crecientes efectos de arrastre de AMLO en 2006 y 2012, se concentraron en contextos altamente desarrollados y urbanizados. Ello se visualiza al ubicar las 430 secciones en las que más del 10% de los electores “cruzaron” sus votos en al menos dos ocasiones (en color celeste), volviéndose todavía más claro en las 114 secciones en las que ello ocurrió incluso en tres o en cuatro ocasiones (en color azul oscuro). Ambos tipos de comportamientos se ubican en contextos eminentemente urbanos (88.9% y 98.3% de los casos, respectivamente) y –como veremos ahora– con elevados índices de desarrollo socioeconómico.

El perfil socio-demográfico y político-partidista de los tipos extremos del voto

Para terminar, los siguientes cuadros permiten sintetizar la composición socio-demográfica y político-partidista de nuestra tipología exploratoria sobre las dimensiones antropológicas del voto, complementando útilmente el análisis territorial. Como podía esperarse, los tipos extremos relacionados con votos gregarios de tipo “hegemónico” y/o “unánime”, se sitúan en contextos eminentemente rurales y se caracterizan por menores grados de desarrollo social; éstos contrastan fuertemente con las secciones más urbanas en las que se concentran los votos estratégicos “de convicción” y/o “de opinión”, con comportamientos más selectivos e individualizados y con índices mucho más elevados de alfabetismo, educación secundaria y acceso al seguro social (cuadro 6).

Cuadro 6: Composición socio-demográfica de los tipos extremos del voto

Tipos Extremos	No Sec	LN 2006	%LN	%Urbanas	IDHWS	IDH_Alf	IDH_Sec	IDH_Dree	IDH_IMSS	pHLI	cHLI
Hegemonía monopartidista	80	82,400	3.2	12.5	29.8	61.0	25.4	23.7	17.4	71.1	72.5
Hegemonía con “alternancia”	79	85,323	3.3	8.9	33.4	68.6	27.1	37.7	9.3	39.5	58.2
Bastiones EZLN	92	113,363	4.4	1.1	28.9	61.5	28.2	21.0	16.9	86.3	94.6
Volatilidad >50%	411	491,930	19.0	19.0	37.0	70.4	30.4	42.4	12.6	37.1	50.9
Otras	837	1,111,167	42.8	39.1	43.9	76.7	37.1	51.1	18.4	17.7	26.4
Voto “útil” 2 x >10%	316	549,359	21.2	88.9	61.9	87.1	54.4	73.3	38.2	5.2	14.2
Voto “útil” 3 / 4 x >10%	114	160,333	6.2	98.3	69.0	91.3	62.1	80.7	46.7	2.4	6.1
Total	1,929	2,593,868	100.0	42.4	45.1	76.2	38.7	51.5	21.6	25.3	34.9

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012) Y DEL INEGI (2006)

El voto “de intercambio” –que también indica comportamientos de tipo corporativo y/o clientelar, pero en un contexto de mayor fragmentación y/o pluralidad–, ocupa una situación intermedia en términos socio-demográficos, por su creciente importancia y heterogeneidad. Éste aglutina tanto a las 92 secciones con fuerte presencia zapatista –que destacan por los índices más elevados de ruralidad, analfabetismo, marginación y dificultad de acceso a la salud y a la educación secundaria– como a un conjunto menos rezagado de 411 secciones –que combinan probablemente dinámicas colectivas de tipo faccional, con transacciones y motivaciones todavía más cambiantes, en ocasiones quizás de tipo individual–. Por ello, el estudio profundizado de esta tercera dimensión del voto, la más característica del contexto actual de la democratización chiapaneca, también plantea los mayores desafíos e interrogantes para futuras investigaciones.

A su vez, se observa una relación significativa entre los distintos tipos del voto, y la orientación de las preferencias político-partidistas. Mientras que el PRI no deja de perder fuerza en la medida en la que se pasa de comportamientos más “consensuales”, gregarios y corporativos a comportamientos más volátiles, estratégicos e “individualizados”, el PAN es sumamente débil en los primeros tipos de secciones e incrementa continuamente su presencia en las últimas. Algo similar sucede con los otros partidos y con el PRD, aunque en este último caso, las bases del Sol Azteca se concentran en las secciones con mayor volatilidad, independientemente del éxito coyuntural que puedan tener algunos de sus candidatos en las secciones con mayor proporción de votos “útiles” (cuadro 7).

Cuadro 7: Composición partidista de los tipos extremos del voto

Tipos Extremos	No Sec	Max 91-12	Volat 94-12	pNot 94-12	pPRI 91-12L	pPAN 91-12L	pPRD 91-12L	pOtros 91-12
Hegemonía monopartidista	80	76.2	20.7	3.0	73.5	5.3	13.7	7.4
Hegemonía con "alternancia"	79	71.2	27.1	3.6	63.6	8.7	19.6	8.1
Bastiones EZLN	92	60.5	47.4	2.3	45.1	6.0	38.8	10.1
Volatilidad >50%	411	58.6	36.1	4.3	48.0	12.1	29.3	10.5
Otras	837	53.9	24.4	4.8	46.1	17.0	28.0	8.9
Voto "útil" 2 x >10%	316	48.6	27.1	10.0	36.7	24.8	26.7	11.8
Voto "útil" 3 / 4 x >10%	114	48.1	25.2	13.9	36.8	25.8	25.0	12.3
Total	1,929	55.6	28.4	5.8	46.0	16.9	27.2	9.9

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012) Y DEL INEGI (2006)

Finalmente, en contraste con las variables socioeconómicas y partidistas, la relación entre las dimensiones antropológicas del voto y la magnitud de la participación electoral resulta menos clara, estable y contundente. Tanto al inicio y al final del período de estudio, como en las legislativas intermedias de 2003 y 2009, la movilización electoral es mucho más sostenida en las secciones con comportamientos hegemónicos que en las secciones con votaciones estratégicas. Sin embargo, este patrón se desborra en las legislativas intermedias de 1997 y se invierte en las presidenciales de 1994, 2000 y 2006, en las que los picos más elevados de participación se concentran en las secciones con mayores tasas de votos “útiles”. En cuanto a las secciones que concentran la volatilidad electoral, éstas suelen ser más abstencionistas hasta 2006, pero se vuelven más participativas en 2009 y 2012. Pero lo más curioso es que las últimas elecciones presidenciales, a pesar de caracterizarse por una tasa de participación muy similar a la de 1994, movilizan sobre todo en las secciones más volátiles y hegemónicas, rompiendo con el patrón observado en las tres presidenciales precedentes (cuadro 8).

Cuadro 8: Promedios de participación por tipos extremos del voto

Tipos Extremos	No Sec	Part_91	Part_94L	Part_97	Part_00L	Part_03	Part_06L	Part_09L	Part_12L
Hegemonía monopartidista	80	82.5	72.4	40.6	54.5	40.4	46.3	49.2	71.3
Hegemonía con "alternancia"	79	71.0	61.3	34.8	49.1	36.6	45.5	50.6	72.3
Bastiones EZLN	92	56.1	74.3	14.1	41.2	24.5	41.2	41.4	70.9
Volatilidad >50%	411	64.9	62.1	28.6	47.6	31.6	44.9	45.7	71.3
Otras	837	69.9	66.1	40.0	52.0	33.1	48.0	42.0	68.7
Voto "útil" 2 x >10%	316	62.8	69.5	38.5	53.0	29.9	51.0	32.7	64.8
Voto "útil" 3 / 4 x >10%	114	59.6	72.3	41.7	57.4	32.1	55.4	35.0	66.4
Total	1,929	67.0	66.6	36.0	51.0	32.2	47.8	41.5	68.8

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012) Y DEL INEGI (2006)

Conclusiones

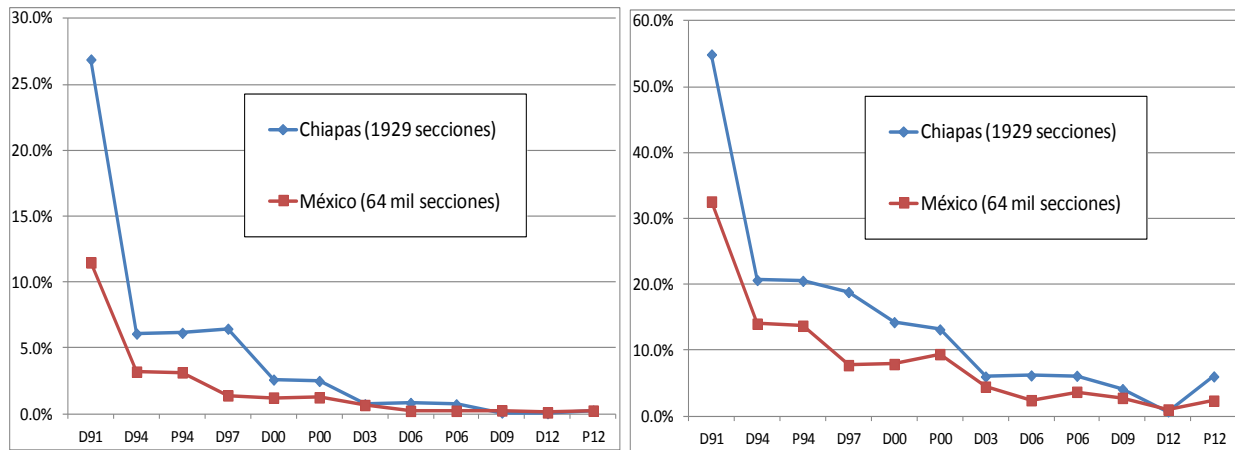
En resumidas cuentas, el voto contemporáneo de los mexicanos recubre modalidades heterogéneas y cambiantes, que no pueden ser asimiladas a un modelo único de “elector racional”. Como lo ilustra la experiencia chiapaneca, junto con el tipo ideal del sufragio individual “de opinión” y “de convicción” –cuya aparición es reciente y cuya proporción todavía es reducida–, coexisten motivaciones identitarias y afectivas de tipo comunitario, así como votos de intercambio corporativo –que se apoyan en lealtades faccionales, en transacciones puntuales y/o en relaciones de tipo clientelar–. De ahí la necesidad de desarrollar enfoques teórico-metodológicos plurales que permitan estudiar el voto en una perspectiva multidimensional, en vistas de conceptualizar y captar, medir y explicar la creciente diversidad y volatilidad del *sufragio particular*.

De las (e-)lecciones chiapanecas a la transición política mexicana

Las votaciones formales que se celebran, hoy en día, en muchas localidades rurales de Chiapas tras un intenso proceso de cabildeo, negociación y movilización, poco tienen que ver con las reflexiones personales que motivan el sufragio individualizado de tal o cual ciudadano tuxtleco, comiteco o sancristobalense, sea éste mestizo o indígena. Para todos ellos, el voto libre es, en todo caso, una práctica nueva que todavía se aprende, y cuyos significados siguen siendo objeto de confusiones y frustraciones, al menos tanto como de expectativas y actitudes ciudadanas.

Pero ¿hasta qué punto Chiapas es representativo, y hasta qué punto no es más bien una excepción dentro del contexto más amplio de la democratización mexicana? Sin poder profundizar, por razones de espacio, en esta pregunta crucial, analicemos la evolución de dos indicadores básicos que sustentan nuestra propuesta teórica y conceptual.

El primero es la proporción de secciones electorales con comportamientos de tipo unánime (donde la primera fuerza recibe más del 90% de los sufragios) o monopartidista (donde existe un solo partido relevante). Tras un periodo inicial de rezago relativo en Chiapas –donde en 1991, el 55% de las secciones todavía estaba bajo el control de un partido hegemónico, que captaba más del 90% de los votos en 27% de los casos–, estas situaciones monopartidistas se vuelven francamente marginales desde 2003. En las presidenciales de 2012, el monopartidismo sigue caracterizando 6% de las secciones en Chiapas y 2.3% de las secciones en México, pero solamente 0.3% y 0.2% se encuentran en una situación de estricta unanimidad electoral (gráficas 16 y 17).

Gráficas 16 y 17: Evolución de secciones unánimes y monopartidistas

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL IFE (2012)

En contraste, las tendencias en el incremento del voto estratégico/cruzado/“útil” muestran un arraigo más temprano y avanzado en Chiapas, que en el resto de la Federación. En 1994, el promedio seccional de este fenómeno ya se situaba en 4.4% en dicha entidad, contra 4.2% para el conjunto del país. Desde entonces, el voto útil era ejercido por más de una quinta parte del electorado en 2.2% de las secciones chiapanecas, mientras que ello solamente era el caso para 1.3% de las secciones a nivel federal. Dieciocho años después, dicha tendencia se confirma y amplía considerablemente. Durante las elecciones presidenciales de 2012, el promedio seccional de votos cruzados alcanzó 9.9% del sufragio válido en Chiapas y fue de 9.1% en el resto del país. Asimismo, la parte de secciones en las que al menos uno de cada cinco electores dividió sus votos se elevó a 5.6% del total en el estado sureño, contra 4.7% para el conjunto de la Federación.

Sin autorizar generalizaciones, ambas tendencias sí permiten pensar que los procesos detectados en Chiapas no son excepcionales y también merecen ser analizados con mayor profundidad en otras entidades. Tras un largo periodo de estabilidad y homogeneidad electoral, se registra un declive generalizado de las secciones monopartidistas y un incremento constante del voto estratégico e individualizado, en un contexto en el que sigue predominando probablemente el voto de intercambio, corporativo y faccional. Si bien estos tipos ideales se han vuelto cada vez más escasos en su forma pura, sus dimensiones constitutivas siguen permeando, en forma híbrida, los comportamientos de numerosas secciones electorales en Chiapas y en el resto del país.

Como también lo ilustran otros estudios, basados tanto en métodos etnográficos como en amplias encuestas cuantitativas y representativas a nivel federal, la referida diversidad de los comportamientos electorales caracteriza muchos territorios y votantes de México. Los trabajos antropológicos de Tejera Gaona (2003), Winocur y Gutiérrez (2007) en el Distrito Federal, de De la Peña y De la Torre (2003) en los barrios populares de Guadalajara, de Dehouve, Franco y Hémond (2006) en Guerrero, así como de Eisenstadt (2012) en Oaxaca, entre muchos otros más, ponen de manifiesto la enorme heterogeneidad de las representaciones, actitudes y motivaciones que se movilizan durante cada proceso electoral, así como la persistencia de prácticas políticas de índole corporativo, faccional y de intercambio clientelar. A su vez, las encuestas de opinión enfrentan interesantes problemas metodológicos y técnicos para captar fenómenos tan elementales y complejos como la misma identificación partidista (Moreno & Méndez, 2007; Estrada, 2006), cuya estabilidad y coherencia teóricas difícilmente resisten a la volatilidad de sus mediciones

empíricas, al incremento de los electores “apolíticos” e “independientes” (Estrada, 2006) y a la magnitud creciente del voto “cruzado” y dividido en México (Sonnleitner, 2010).

Pero, ¿por qué debería de haber identidades partidistas cristalizadas desde la temprana edad, en un país que apenas descubre e inventa el pluralismo electoral? ¿Pueden los modelos clásicos del voto –desarrollados en Europa y los Estados Unidos de América, donde los partidos políticos surgen de conflictos históricos estructurales y se relacionan con movimientos sociales, en contextos de expansión y consolidación del Estado-Nación– ser aplicados sin adecuaciones a los procesos políticos contemporáneos de México, en un contexto de “globalización” y de re-estructuración económica, de expansión de los mercados y de “achicamiento” de los actores públicos?

Lejos de ser una excepción, el de Chiapas es quizás un caso extremo que, por su radicalidad, revela e ilumina una complejidad todavía mayor en el nivel nacional, en uno de los territorios más diversos, plurales y desiguales del continente latinoamericano. De ahí el interés de desarrollar enfoques teórico-metodológicos plurales, que permitan estudiar el voto en perspectivas socio-históricas situadas con herramientas que capten su carácter multidimensional.

De la teoría del sufragio universal, al estudio del ejercicio particular del voto

Debido a la fuerte connotación simbólica y ritual que ha adquirido el sufragio universal en las democracias consolidadas, existe la tentación de conferirle un importante grado de consistencia y homogeneidad. Por ello, los principales modelos explicativos del voto en Europa y los Estados Unidos de América lo analizan como un conjunto fuertemente integrado de elecciones y comportamientos políticos racionales e individuales, minimizando por ende su diversidad.

Tal es el caso de los modelos *sociológicos y psicosociales* del voto –que buscan explicarlo mediante predisposiciones sociales y religiosas (Lazarsfeld et alii, 1944; Lipset, 1959), o a través de identificaciones partidistas estables producto de procesos de socialización (Campbell et alii, 1960; Miller & Shanks, 1996)–; de los modelos derivados de la teoría de la *elección racional* –que ponen el énfasis en las fluctuaciones, en las evaluaciones retrospectivas y prospectivas de los gobernantes, así como en los cálculos beneficios-costos del elector en el momento de elegir a un candidato entre las ofertas políticas en disputa (Downs, 1957; Nie et alii, 1976; Fiorina, 1981)–; así como de los diversos intentos de combinar estos enfoques en modelos sintéticos. Todas estas teorías comparten la idea que los electorados están suficientemente integrados para ser analizados bajo el mismo esquema de un elector individual como tipo ideal.

En otras palabras, el voto es concebido como una respuesta a una pregunta inequívoca, y se asume que ambas tienen un sentido común que permite agregarlas en el nivel nacional, independientemente de la diversidad de los significados y de los matices que pueden conferirles las especificidades territoriales, sociales y culturales. Sin duda, dicho postulado no plantea problemas mayores en las democracias consolidadas, que comparten un fuerte grado de integración nacional, y donde el voto es una añeja práctica ritual arraigada desde tiempos lejanos. Sin embargo, en nuestra región de estudio, caracterizada por una débil integración política y sociocultural, el sufragio todavía es un dispositivo de aparición reciente, cuyos contenidos se caracterizan por una marcada heterogeneidad.

Probablemente, en nuestros días un número creciente de ciudadanos mexicanos vota conforme a los modelos democráticos contemporáneos: en función de identidades partidistas más o menos estables, tomando en consideración los valores adquiridos durante su socialización y las

opiniones de sus familiares, y evaluando la oferta política de manera crítica, informada y racional. Sin embargo, la generalización de dichos modelos explicativos al conjunto de la población todavía enfrenta tres obstáculos mayores en México:

(1) El peso de las tradiciones políticas arraigadas durante un largo periodo de régimen de partido hegemónico y cuasi único, que le conferían al sufragio significados peculiares, corporativos y autoritarios, ajenos a los ideales de la cultura cívica y de la democracia liberal;

(2) la debilidad estructural y el carácter subordinado e instrumental de los partidos políticos en muchas regiones rurales y dispersas, con la excepción de la amplia maquinaria del antiguo partido oficial, que operó durante muchas décadas como el brazo electoral de un Estado socialmente incluyente pero políticamente autoritario;

(3) así como la marcada segmentación de los dispositivos antropológicos del voto, que pueden apoyarse en mecanismos, modalidades y lógicas muy diversas, en ocasiones hasta opuestas, de participación y de movilización electoral.

En contextos comunitarios que gozan de gran autonomía, las identificaciones partidistas sólo corresponden raramente a las afinidades ideológicas que caracterizan los partidos en el nivel federal. Por ello, hay que subrayar el carácter segmentado de la oferta política y el estado precario de las organizaciones partidistas, que distan mucho de corresponder a los tipos ideales de la ciencia política.

Pero sobre todo, cabe cuestionar la idea que el voto es una práctica lo suficientemente unificada e integrada como para obedecer a un modelo único de comportamiento político-electoral. En México, el sufragio libre, secreto e individual todavía es una institución de aparición reciente, que apenas está siendo apropiada, adaptada y re-inventada, en un contexto de fragmentación y transición, desde un régimen posrevolucionario autoritario pero socialmente incluyente, hacia un juego político más abierto, competitivo y plural, pero desordenado y económicamente excluyente.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Adler-Lomnitz, Larissa; Rodrigo Salazar Elena; e Ilya Adler (2004), *Simbolismo y ritual en la política mexicana*, México, UNAM /Siglo XXI.
- Alavi, Hamza (1976), *Las clases campesinas y las lealtades primordiales*, Barcelona, Anagrama, 1976.
- BANAMEX-ACCIVAL (2001), *México Electoral. Estadísticas Federales y Locales, 1970-2000*, CD-ROM, México, Grupo Financiero Banamex-Accival.
- Becerra, Ricardo, Salazar, Pedro, Woldenberg, José (2000), *La mecánica del cambio político en México*, México, Cal y Arena.
- Blais, André (2007), “Turnout in Elections”, in Dalton, Russell & Hans-Dieter Klingemann, *Oxford Handbook of Political Behavior*, Oxford University Press, pp. 621-635.
- Braconnier, Céline & Jean-Yves Dormagen (2007), *La démocratie de l'abstention: aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire*, París, Gallimard.
- Brady, Henry, Verba, Sidney & Kay Lehman Schlozman (1995), “Beyond SES: A Resource Model of Political Participation”, *American Political Science Review*, Vol. 89, No. 2, June, pp. 271-294.
- Buendía, Jorge (2000) *El elector mexicano en los noventa: ¿un nuevo tipo de votante?*, México, CIDE, Documento de trabajo.
- Cálix, Alvaro & Sonnleitner, Willibald (2006), “La paradoja hondureña: ¿Por qué los marginados votan tanto en Honduras?”, in Sonnleitner, Willibald (bajo la dir. de), *Explorando los territorios del voto: Hacia un atlas electoral de Centroamérica*, Guatemala, CEMCA, IHEAL, BID, pp. 20-29.
- Campbell, Angus, Philip Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes (1960), *The American Voter*, New York, Wiley, 1960.
- Collier, George A. (1998), *¡Basta! Tierra y rebelión zapatista en Chiapas*, Tuxtla Gutiérrez, UNACH/Food First Books.
- Dahl, Robert A. (1956), *A Preface to Democratic Theory*, Chicago, University of Chicago Press.
- Darmofal, David (2003), *Voter Participation Across Space and Time: Institutions, Contexts, and Citizens, 1828-2000*, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- De la Peña, Guillermo y De la Torre, Renée (2003), “Religión y política en los barrios populares de Guadalajara”, en *Estudios Sociológicos*, Vol. VIII, Núm. 24, pp. 571-602.
- Dehouve, Daniele, Franco, Víctor y Hémond, Aline (coords.) (2006), *Multipartidismo y poder en municipios indígenas de Guerrero*, México, CIESAS, Universidad Autónoma de Guerrero, Cooperativa Editorial Universitaria.
- Downs, Anthony (1957), *An Economy Theory of Democracy*, New York, Harper.
- Durand Ponte, Víctor Manuel (2004), *Ciudadanía y cultura política. México, 1993-2001*, México, Siglo XXI.

- Eisenstadt, Todd A. (2011), *Politics, Identity, and Mexico's Indigenous Rights Movements*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Estrada, Luis (2006), "Determinantes y características de los independientes en México en 2006", en *Política y gobierno*, Vol. XIII, Núm. 1, pp. 149-173.
- Fauvelle-Aymar, Christine (2008), "Electoral turnout in Johannesburg: socio-economic and political determinants", *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa* 66, pp. 142-167.
- Fiorina, Morris (1981), *Retrospective voting in American national elections*, New Haven, Yale University Press.
- Franklin, Mark N. (2004), *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Geys, Benny (2006), "Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research", *Electoral Studies*, 25(4), pp. 637-663.
- Gibson, Edward L. (2012), *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gómez Tagle, Silvia & Valdés Vega, María Eugenia (coords.) (2000), *La geografía del poder y las elecciones en México*, México, IFE/Plaza y Valdés.
- Gómez Tagle, Silvia. 2001. *La transición inconclusa: treinta años de elecciones en México*, México: El Colegio de México.
- Henríquez Arellano, Edmundo (2000), "Usos y costumbres en los Altos Chiapas", en Viqueira, Juan Pedro y Willibald Sonnleitner (coords.), *Democracia en tierras indígena. Las elecciones en los Altos Chiapas (1991-1998)*, México, El Colegio de México, CIESAS, IFE.
- Hermet, Guy; Rouquié, Alain; y Juan Linz (1982), *¿Para qué sirven las elecciones?*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Holzner, Claudio (2010), *Poverty of Democracy. The Institutional Roots of Political Participation in Mexico*, Pittsburgh, The University of Pittsburgh Press.
- Hvostoff, Sophie (2002), *La communauté abandonnée: l'invention d'une nouvelle indianité urbaine dans les périphéries tzotziles et tzeltales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexique (1974-2001)*, Tesis de Maestría, Francia, Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, 2002.
- Ihl, Olivier (2000), *Le vote*. Paris, Montchrétien.
- Instituto Federal Electoral (IFE). 2012, *Atlas Electoral Federal de México (1991-2012)*. México: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, IFE.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2006), *II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados básicos*, Aguascalientes, INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2001), *XII Censo general de población y vivienda, 2000*, Aguascalientes, INEGI.

- Rus, Jan (1995), “La Comunidad Revolucionaria Institucional: La subversión del gobierno indígena en Los Altos de Chiapas, 1936-1968”, en Viqueira, Juan Pedro y Ruz, Mario Humberto, *Chiapas. Los rumbos de otra historia*, México, D.F., UNAM/CIESAS/UDG/CEMCA, 1995, pp. 251-278.
- Köhler, Ulrich (1982), “Estructura y funcionamiento de la administración comunal de San Pablo Chalhchihuitán”, en *América Indígena*, Vol. XLII, No. 1, 1982.
- Krishna, Anirudh (2006), “Poverty and Democratic Participation Reconsidered: Evidence from the Local Level in India”, *Comparative Politics*, vol. 38, No. 4, pp. 439-458.
- Krotz, Esteban (coord.) (1996), *El estudio de la cultura política en México: perspectivas disciplinarias y actores políticos*, México, CONACULTA.
- Lazarsfeld, Paul et alii (1944), *The People's Choice*, New York, Columbia University Press.
- Lijphart, Arend (1997), “Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma”, *American Political Science Review*, vol. 91, No. 1, pp. 1-14.
- Lipset, Seymour M. (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, en *The American Political Science Review*, vol. 53, No. 1, pp. 69-105.
- Lipset, Seymour Martin (1959), *Political Man: The social basis of politics*, New York, Doubleday.
- Loaeza, Soledad (1999), *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994: oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Miller, Warren y Merrill Shanks (1996), *The New American Voter*, Londres, Harvard University Press.
- Minvielle, Erwann; Sid-Ahmed, Souiah (2003), *L'analyse statistique et spatiale. Statistiques, cartographie, télédétection, SIG*. Nantes: Editions du temps.
- Mitra, Subrata K. & V. B. Singh (1999), *Democracy and Social Change in India: A Cross-Sectional Analysis of the National Electorate*, Thousand Oaks, Sage.
- Moreno, Alejandro & Méndez, Patricia (2007), “Identificación partidista en las elecciones presidenciales en México: 2000 y 2006”, en *Política y gobierno*, Vol. XIV, Núm. 1, pp. 5-42.
- Moreno, Alejandro (2012), “Who Is the Mexican Voter?”, en Roderic Ai Camp, *The Oxford Handbook of Mexican Politics*.
- Nie, N. H., Verba, S. & Petrocik, J. R. (1976), *The Changing American Voter*, Cambridge, Harvard University Press.
- Norris, Pippa (2002), *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Powell, G. Bingham (1986), “American Voter Turnout in Comparative Perspective”, *American Political Science Review*, vol. 80, No. 1, pp. 17-43.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2004). *Indicadores municipales de desarrollo humano en México*. <http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/disco/index.html>

- Robinson, W.S. (1950), "Ecological correlation and the behavior of individuals", *American Sociological Review*, vol. 15, No. 3, pp. 351-357.
- Rosenstone, Steven & John Mark Hansen (1993), *Mobilization, Participation, and Democracy in America*, New York, Macmillan Publishing Company.
- Sarsfield, Rodolfo (2007), "La racionalidad de las preferencias políticas en México: estudios recientes de opinión pública y comportamiento electoral", *Política y Gobierno* 14.1: 393-416.
- Schedler, Andreas & Frederic Charles Schaffer (eds.) (2007), *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 2007.
- Sonnleitner, Willibald (2013), "Explorando las dimensiones territoriales del comportamiento político: Reflexiones teórico-metodológicas sobre la geografía electoral, la cartografía exploratoria y los enfoques espaciales del voto", en *Estudios Sociológicos*, Vol. XXXI.
- Sonnleitner, Willibald (2010), "De tapados y acarreados, a candidatos y electores: ¿Democratización y/o fragmentación de las cultura(s) e identidades político-partidistas en México", en Blancarte, Roberto, *Culturas e identidades México*, México, El Colegio de México.
- Taagepera, Rein y Matthew S. Shugart (1989), *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*, New Haven, Connecticut, Yale University Press.
- Tejera Gaona, Héctor (2003), *No se olvide de nosotros cuando esté allá arriba: Ciudadanos, cultura y campañas electorales en la ciudad de México*, México, Porrúa, 2003.
- Topf, Richard (1995), "Electoral Participation" en Hans-Dieter Klingemann y Dieter Fuchs (dir.), *Citizens and the State*, Oxford, Oxford University Press, pp. 27-51.
- Verba, Sidney & Nie, Norman H. (1972), *Participation in America: Political Democracy and Social Inequality*, New York, Harper and Row.
- Viqueira, Juan Pedro (2009), "Cuando no florecen las ciudades: La urbanización tardía e insuficiente de Chiapas", en *Ciudades mexicanas del siglo XX. Siete estudios históricos*, Coordinado por C. Lira Vásquez y A. Rodríguez Kuri, El Colegio de México / Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 59-178.
- Viqueira, Juan Pedro y Ruz, Mario Humberto (1995), *Chiapas. Los rumbos de otra historia*, México, D.F., UNAM/ CIESAS/UDG/CEMCA, 1995, pp. 251-278.
- Winocur, Rosalía (coord.) (2002), *Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México*, México, IFE/FLACSO/ Porrúa, 2002.
- Winocur, Rosalía y Gutiérrez, Roberto (2007), *Estudio cualitativo sobre las modalidades civiles y políticas de participación en el Distrito Federal*, México, IFE, 2007.
- Zebadúa, Emilio (1999), *Breve historia de Chiapas*, México, FCE, 1999.